

Causa Rol N° 10.867.-

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio Mesa Latorre.

Temuco, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. -

VISTOS:

ÍNDICE

I.	Relación de la Sentencia.....	2 - 4
II.	Resumen ejecutivo.....	4 - 5
III.	Actuarios de tramitación y dato técnico.....	5 - 6
IV.	En cuanto a las tachas.....	6 - 7
V.	En cuanto a la Acción Penal:	
A.	Declaraciones	8 - 49
B.	Documentos.....	49 - 60
	Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	60 - 62
	Calificación jurídica de los hechos.....	62- 66
	Concepto de Lesa Humanidad.....	66 - 69
	Declaraciones indagatorias	
	Declaración indagatoria de Carlos Ulises Cifuentes Hernández	69 - 73
	Análisis de la declaración indagatoria de Carlos Ulises Cifuentes Hernández	74 - 91
	Declaración indagatoria de Luis Diógenes Ulloa Bahamonde :	91 - 94
	Análisis de la declaración indagatoria de Luis Diógenes Ulloa Bahamonde	94- 111
C.	En Cuanto a las Defensas:	
	Defensa del abogado Eugenio José Horacio Torres Moraga	111 - 115
D.	Análisis de las defensas:	
	Consideraciones previas al análisis de la defensa:	
	D.1. Obligación de Investigar.....	115– 131
	D.2. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunales Alemanes.....	131 - 141
	D.3 Estado de Derecho.....	141 - 146
	D.4 Convenio de Ginebra	146- 147

E. Análisis de la defensa específica:.....147 - 149

F. Acusaciones particulares149 -151

G. Reflexiones sobre lesa humanidad.....151 - 157

H. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

Atenuantes de Responsabilidad Penal.....157 - 158

Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....158 - 161

Agravantes de Responsabilidad Penal.....161 - 162

Determinación de la Pena.....162 – 164

Aplicación del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales164 - 165

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....165 - 173

VI. En cuanto a la Acción Civil:

Demanda civil.....173 - 175

Contestación de la demanda civil.....175 - 183

Análisis de la contestación de la demanda civil.....183 - 193

Acreditación probatoria del daño moral.....193 - 195

Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....195

VII. Aspectos Resolutivos.....195 - 200

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N°10.867** del ingreso del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, para investigar el delito de **Apremios Ilegítimos de José Raúl Quintul Muñoz** y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. CARLOS ULISES CIFUENTES HERNANDEZ, R.U.N 3.472.709-0, chileno, natural de Villa Alegre, 90 años, casado, Suboficial Mayor de Carabineros en situación de retiro, con domicilio en calle Recreo N° 201, Campos Deportivos, Temuco. Extracto de filiación y antecedentes de fs. 770 a fs. 771 (Tomo II).

2. LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE, R.U.N 4.647.468-6 chileno, natural de Quemchi, 80 años, viudo, Sargento Segundo de Carabineros de Chile, en situación de retiro, con domicilio en sector Lliuco, comuna de Quemchi. Extracto de filiación y antecedentes de fs. 772 a fs. 773 (Tomo II);

A **fs. 1 a fs. 2 (tomo I)**, se inició causa por requerimiento de la Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, señora Beatriz Pedrals García de Cortázar.

A **fs. 156 a fs. 160 (Tomo I)**, con fecha 30 de octubre de 2012, interpuso querella criminal Alicia Lira Matus, Presidenta de la Agrupación de Familiares de ejecutados políticos, en contra de todos aquellos que resulten responsables, por los delitos de homicidio y de asociación ilícita, cometidos en la persona de José Raúl Quintul Muñoz, con costas.

A **fs. 261 a fs. 274 (Tomo I)**, interpuso querella criminal el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla Mackenney, en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, por su intervención en el delito consumado de tormentos con resultado de muerte, cometido en contra de José Raúl Quintul Muñoz, solicitando se sancione al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A **fs. 1.072 a fs. 1.078 (Tomo III)**, interpuso querella criminal la abogada Llanara Ávila Nieto, en representación de Héctor Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz, por los delitos de detención ilegal, aplicación de tormentos y asociación ilícita, consumados, perpetrados en contra de don José Raúl Quintul Muñoz y en contra de todos quienes corresponda condenándolos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A **fs. 1.090 a fs. (Tomo III)**, con fecha 02 de octubre de 2021, se sometió a proceso a **CARLOS ULISES CIFUENTES HERNÁNDEZ y a LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE**, como autores de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de José Quintul Muñoz, perpetrado en la Segunda Comisaría de Castro en el mes de abril de 1974.

A fs. 1.087 (Tomo IV), con fecha 14 de septiembre de 2021, se declaró cerrado el sumario.

A **fs. 1.090 a fs. 1.117 (Tomo III)**, con fecha 02 de octubre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **CARLOS ULISES CIFUENTES HERNÁNDEZ y a LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE**, como autores de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de José Quintul Muñoz, perpetrado en la Segunda Comisaría de Castro en el mes de abril de 1974.

A **fs. 1.128 a fs. 1.136 (Tomo III)**, la abogada Catalina Ross Fredes, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formula **acusación particular**.

A **fs. 1.164 a fs. 1. (Tomo III)**, la abogada Llanara Ávila Nieto, en lo principal de su escrito se formula **acusación particular**. Al primer otrosí deduce

demanda civil de indemnización de perjuicios en representación de Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz, en contra del Fisco de Chile, por concepto de reparación del daño moral sufrido.

A fs. **1253 (tomo IV)** con fecha 13 de mayo de 2022 se declara abandona la acción por parte del querellante Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

A fs. **1.254** (tomo IV) con fecha 18 de mayo de 2022 se confiere traslado de la acusación fiscal y acusaciones particulares al Fisco de Chile y a los acusados.

A fs. **1.258 a fs. 1.290 (Tomo IV)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer en representación del Fisco de Chile, **contesta la demanda civil**. Solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas.

A fs. **1.308 a fs. (Tomo IV)**, el abogado Eugenio José Horacio Torres Moraga, en representación de Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde, en lo principal de su escrito **contesta fiscal y acusaciones particulares**.

A fs. **1.326 (Tomo IV)**, con fecha 12 de octubre de 2022, **se recibió la causa a prueba**.

A fs. **1.621 (Tomo IV)**, con fecha 15 de diciembre de 2022, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. **1.622 (Tomo IV)**, con fecha 15 de diciembre de 2022, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs. **1.623 (Tomo IV), 1.672, 1.679, 1.680, 1.682, 1.684, 1.685 (tomo V)** se dictaron medidas para mejor resolver.

A fs. **1.687 (Tomo V)**, Se dictó sobreseimiento temporal y parcial por los delitos de asociación ilícita.

A fs. **1.688 (Tomo V)**, con fecha diecisiete de julio de 2023 se trajeron los **autos para fallo**.

II. RESUMEN EJECUTIVO

- **ACCIÓN PENAL 1° al 43 °:**

1° a 6°) en cuanto a las tachas; 7° a 8° En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones (20) y Documentos (24); **9°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 10°) y 11°) Calificación jurídica de los hechos; 12°) y 13°) Concepto de Lesa Humanidad; 14°) Declaración Indagatoria de Carlos Ulises Cifuentes Hernández; 15°)**

Análisis de la declaración del acusado y ponderación en relación a la prueba del proceso; 16°) Declaración Indagatoria de Luis Diógenes Ulloa Bahamonde; 17°) Análisis de la declaración del acusado y; 18°) Ponderación en relación a la prueba del proceso; 19°) Defensa del Abogado Eugenio José Horacio Torres Moraga; 20°) y 21°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: Obligación de investigar. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por Tribunales Alemanes. Estado de Derecho. Convenio de Ginebra; 22°) Análisis de Defensa Específica de los Acusados Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde; 23°) Acusación Particular de la abogada Catalina Ross Fredes; 24°) Análisis de la acusación particular; 25°) Acusación Particular de la abogada Llanara Ávila Nieto; 26°) Análisis de la acusación particular; 27°) Reflexiones sobre lesa humanidad; Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 28°), 29°), 30°), 31°) 32°) Atenuantes de Responsabilidad Penal; 33°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 34°) y 35°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 36°), 37°), 38°) 39°) Determinación de la pena; 40°) Aplicación del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales; 41°), 42°) y 43°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores. 44°) Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores.

- **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 44° al 49°:**

45°) Demanda Civil interpuestas por la abogada Llanara Ávila Nieto, en representación de Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz;;46°) Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado; 47°) Análisis de la contestación de la demanda civil efectuada por el Fisco de Chile; 48°) Acreditación probatoria del daño moral; 49°) Montos; 50°) reajustes e intereses de las sumas demandadas.

III ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- A. Fecha de inicio de la causa: 12 de abril de 2012
- B. Actuario de Tramitación Sumario: Cecia Cruces Valdebenito.
- C. Actuario de Tramitación Plenario: Paulina Montealegre Carrillo, Cecia Cruces Valdebenito, Jocelyn Fuentes Cortés.
- D. Tomos: V
 - Tomo I de fs.1 a fs. 495;
 - Tomo II de fs. 496 a 827;
 - Tomo III de fs. 828 a 1.252;
 - Tomo IV de fs. 1.253 a fs. 1.660;
 - Tomo V de fs. 1.661 en adelante;
 - Cuaderno reservado I tomo de 45 fojas.
- E. Fojas 200
- F. Considerandos 50

CONSIDERANDO:**III. EN CUANTO A LAS TACHAS**

1°) Que a fojas fojas 1.648 (Tomo IV) en audiencia testimonial, el abogado Eugenio Torres Moraga en representación de Carlos Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde, interpone tacha respecto de la testigo presentado por la querellante, el Sra. Cecilia Beatriz Hernández Quintul, por la causal del artículo 460 N°10 en relación a la existencia de un grado de parentesco en 3 grado colateral.

2°) Que en el mismo acto, la abogada Llánara Ávila evacúa el traslado, aduciendo que si bien existe un grado de parentesco son las únicas personas idóneas que pueden declarar los hechos sufridos, ya que luego de los hechos sus representados quedaron estigmatizados por lo tanto es difícil que otras personas distintas a las que se presentó en su oportunidad puedan declarar el daño sufrido por sus representado. Asimismo la abogada Catalina Ross evacúa el traslado, indicando que los parientes o familiares son los que tiene mayor cercanía o conocimiento del año que sufrieron los familiares.

3°) Que en relación a la tacha interpuesta por la causal del N° 10 del artículo 460 del texto citado, esta **es rechazada**, ello porque de conformidad a las normas del artículo 304 y siguientes del Código Civil la filiación respectiva se prueba frente a terceros por la respectivas partidas de matrimonio, nacimiento, bautismo. En autos no existe ningún documento oficial que acredite el parentesco que indica el abogado que ha interpuesto la tacha. Solo están los dichos de la testigo, lo que no es suficiente en conformidad a la ley para acreditar la tacha. En todo caso el tribunal de igual modo tiene presente para todos estos efectos el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal, puesto que además la testigo no carece de imparcialidad

4°) Que a fojas fojas 1.656 (tomo IV) en audiencia testimonial, el abogado Eugenio Torres Moraga en representación de Carlos Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde, interpone tacha respecto del testigo presentado por la querellante, José Bernardo Barría Barrientos, por las causales del artículo 460 N°8 y 9 del Código de Procedimiento Penal.

5°) Que en el mismo acto, la abogada Llanara Ávila evacúa traslado manifestando que respecto a las causales que señala el abogado, no se configuran como tal, si bien don José señala que tiene cierto interés, este habla de

un interés en general en la justicia y no en un beneficio en particular, ni es dependiente de sus representados por ende el resultado el juicio no afectaría o no lo perjudicaría ni nada por el estilo. Respecto de la causal de parentesco, si bien hay un grado de parentesco hoy día las personas declarar son las únicas personas idóneas para poder declarar respecto del daño sufrido por sus representados porque han quedado estigmatizados y por lo tanto es difícil que otras personas puedan declarar lo sucedido.

6°) Que en relación a la tacha interpuesta por la causal del N° 8 y 9 del artículo 460 del texto citado, esta **es rechazada**. Respeto de ambas causales en relación al parentesco se debe tener presente que de acuerdo a las normas del artículo 304 y siguientes del Código Civil la filiación respectiva se prueba frente a terceros por las respectivas partidas de matrimonio, nacimiento, bautismo. En autos no existe ningún documento oficial que acredite el parentesco que indica el abogado que ha interpuesto la tacha. Solo están los dichos del testigo, lo que no es suficiente en conformidad a la ley para acreditar la tacha. Respecto de algún interés en el juicio tal como expresan las abogadas querellantes, se trata de un interés general que tendría cualquier persona por el trabajo de la administración de justicia. En todo caso el tribunal de igual modo tiene presente para todos estos efectos el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal, puesto que además el testigo no carece de imparcialidad.

IV. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

7°) Que a **fs. 1.090 a fs. 1.117 (Tomo III)**, con fecha 02 de octubre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **CARLOS ULISES CIFUENTES HERNÁNDEZ y LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE**, como autores de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de José Quintul Muñoz, perpetrado en la Segunda Comisaría de Castro en el mes de abril de 1974.

8°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del ilícito penal señalado, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 1.090 a fs. 1.117 (que corren de fs. **1** a fs. **1.089**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Héctor Septimio Quintul Muñoz | 11.Domingo Álvarez Cárdenas |
| 2. María Helvecia Paillacar Paillacar | 12. Ángel Andrade Oyarzún |
| 3. Mario Enrique Contreras Vega | 13. Marco Antonio Romero Arias |
| 4. César Vladimir Leiva Garrido | 14. Jaime Alfonso Moraga Zamorano |
| 5. Héctor Arnoldo Vargas Gallardo | 15. Werne Víctor Haro Oyarzún |
| 6. José Humberto Cárdenas Díaz | 16. Noé Alejandro Cárdenas Alvarado |
| 7. María Angélica Huenchur Huenchur | 17. Hernán Escobar Inostroza |
| 8. Juvenal Alfredo Hernández | 18. Gloria Iris Quintul Muñoz |
| 9. José Lucedino Aude Añazco | 19. José Octavio Quintul Muñoz |
| 10.Héctor Gallardo Paredes | |

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1. .1 HÉCTOR SEPTIMIO QUINTUL MUÑOZ (27 años a la fecha, **Rut: 8.726.708-3**) quien declaró a fs. 65 a 67; (Tomo I), a fs. 677 a 678; (Tomo II), a fs. 726 a 727; (Tomo II) y a fs. 757; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 16 de mayo de 2011, rolante de fs. 65 a 67; (Tomo I) expresa que es hermano de José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció el día 16 de mayo de 1979 en el Hospital de Castro. Es el caso que para el año 1973, el deponente residía en la casa de sus padres, ubicada en el sector Coihuinco de la comuna de Castro, en ese tiempo se encontraba con sus padres, una hermana de nombre Gloria Iris y su hermano José Raúl, quien era dirigente del Partido Socialista, con quien se dedicaban a realizar labores agrícolas. En el mes de marzo del año 1974, no recuerda la fecha exacta, llegaron hasta el campo un camión particular, con varios Carabineros, ingresando alrededor de seis de ellos a su hogar, diciendo que andaban buscando a su hermano Raúl. En ese momento, estas personas comenzaron a registrar toda la casa, a la vez que causaban destrozos y destrozaban todo lo que había en su paso, aduciendo que andaban buscando armamentos, ya que según ellos sabían que en la casa había armas. Luego de que su madre y su hermana hablaran con los Carabineros y que estos se aburrieran de destrozar cosas, ya que ninguno de los hombres de la familia se encontraban en la casa, es que estos funcionarios consultaron donde se encontraba Raúl, en ese minuto su hermana le dijo que estaba trabajando en el campo de Hernán Rehbein, lugar cercano su hogar, por

ellos los Carabineros se fueron del lugar, supuestamente en busca de José Raúl, todo esto lo supo posteriormente cuando llegó a la casa por relato de su madre y de su hermana, ya que ese día el deponente andaba al parecer en Castro. Posteriormente, luego de un rato, llegó Raúl a la casa, acompañando de los Carabineros, quienes fueron a detenerlo y lo encontraron cortando leña con una motosierra en el campo. En ese minuto, Raúl dejó la motosierra en la casa y se fue detenido con los funcionarios a la comisaría de Castro. Hace presente que luego de unos días, su papá recorrió varios lugares de Castro, en busca de su hermano Raúl, pero no podía dar con su paradero, por ello le solicitó ayuda a un sacerdote de la Iglesia de los Sagrados Corazones de esta ciudad, de quien no recuerda su nombre, pero actualmente se encuentra al parecer fuera del país. Fue esta persona que finalmente encontró a su hermano que había pasado por la Comisaría de Ancud y luego llegó a Puerto Montt, específicamente a la cárcel de Chin Chin, donde permaneció recluido más de un año, visitándolo su hermano y su hermana cada quince días, con la finalidad de llevarle víveres y cosas para su estadía. Hace presente que el tiempo en que estuvo en la cárcel su hermano, fue cumpliendo una condena por el delito de Infracción a la Ley de Armas, haciendo presente que en la casa solo encontraron un revolver pequeño que en ese tiempo se tenía para la seguridad de la casa y cuando se viajaba a Argentina. Es necesario señalar que durante el tiempo en que su hermano Raúl, estuvo detenido en Carabineros y en la cárcel de Puerto Montt, fue duramente torturado, lo colgaban y golpeaban hasta que se aburrían. Durante las visitas, su hermano le contaba lo que sucedía, a la vez que se daba cuenta que estaba muy mal físicamente. Más tarde, luego de un año aproximadamente, su hermano fue trasladado desde la cárcel de Chin Chin, hasta el recinto penal de Castro, donde estuvo alrededor de un año más, hasta que fue dejado en libertad. Al salir de la cárcel, su hermano José Raúl, salió caminando con mucho dolor y estaba perturbado de su mente, ya que no reconocía donde estaba su casa o para donde tenía que ir. Por esos días, sus dolores se hicieron muy fuertes e imposibles de resistir, siendo atendido por el doctor Juvenal Hernández, quien señaló que debido a las torturas que había recibido, tenía múltiples lesiones en la espalda y tórax, por lo que le aconsejó que lo trasladaran hasta Santiago, a fin de que médicos con mayores herramientas pudieran ayudarlo con su recuperación. Seguidamente y debido a que su hermano no mejoraba, no dormía en la noche y gritaba de dolor de la cintura, es que el deponente viajó a Santiago, en bus junto con su hermano, recorriendo varios médicos y siendo atendido en hospitales, sin lograr mejoría, es

más un día mientras Raúl estaba sentado en la casa donde vivían, en un momento se cayó de la silla y nunca más volvió a ponerse de pie, ya que quedó parapléjico, regresando en esas condiciones a Castro, para ello tuvo que devolverse en Avión hasta Puerto Montt y desde allí, en avioneta hasta Castro. Luego de un tiempo, nuevamente trasladó a su hermano, esta vez a la ciudad de Puerto Montt, siendo atendido y operado en dos ocasiones, en forma particular, en el Hospital de la ciudad, todo con la finalidad de que pudiera estar mejor, regresando nuevamente con su hermano a su hogar. Posteriormente, la vida de su hermano fue muy complicada, ya que sufría mucho por las lesiones que tenía, permaneciendo alrededor de dos años en la casa, falleciendo luego de una hemorragia interna, después de padecer por cinco años, las consecuencias de las torturas a las que fue sometido. Finalmente, indica que su esposa María Paillacar Paillacar, por varios años realizó tramites donde la señora Felicia Cárdenas, quien era la persona que atendía en la Gobernación y estaba relacionada con los Derechos Humanos.

En declaración extrajudicial de fecha 27 de junio de 2019, rolante de fs. 677 a 678; (Tomo II) cuenta que para el año 1974, tenía la edad de 27 años y se encontraba viviendo y trabajando en la ciudad de Punta Arenas. Su hermano José Raúl, vivía junto a sus padres de nombres Eliseo Quintul Quintul y Rosa Muñoz Hernández, ambos actualmente fallecidos y su hermana Gloria Iris Quintul Muñoz, en el mismo inmueble donde reside actualmente. Hace presente que son siete hermanos, pero tres se encuentran fallecidos en la actualidad, correspondientes a José Osvaldo, Olga y Florencio, mientras que sus hermanos Gloria Iris y José Octavio viven en el sector Rural La Chacra de Castro. Para el año 1974, su hermano José Raúl, era un joven de 31 años y trabajaba cortando madera en un aserradero de Coihuinco, debiendo agregar que era simpatizante del Partido Socialista, no teniendo certeza si se encontraba inscrito en dicho partido. Para la fecha de su detención, ocurrida en mayo de 1974, se encontraba en la ciudad de Punta Arenas, enterándose de lo sucedido con José Raúl, por intermedio de una carta que le escribió su hermana Gloria, la cual indicaba que José había sido detenido por funcionarios de Carabineros, por lo que solicitó permisos en el trabajo y viajó a los días siguientes a Castro, tomando conocimiento que su hermano se encontraba recluido en la cárcel pública de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt. Recuerda que cada 15 días, lo iban a visitar a la cárcel Chin Chin y en los tiempos que tuvo que conversar con él, le comentó que lo habían acusado de guerrillero y por tenencia de armas, refiriéndose

además que había sido sometido a torturas en la Comisaria de Carabineros de Ancud y Puerto Montt. Su hermano se veía físicamente mal y se comunicaba con mucho dolor. Posteriormente su hermano José Raúl, fue trasladado desde la cárcel Chin Chin a la cárcel Ten Ten de Castro, recinto donde permaneció cerca de un año, para luego obtener el beneficio de la reclusión nocturna. Cuando su hermano sale en libertad y comienza a pernoctar en las noches en la cárcel de Ten Ten, recuerda que él comenzó a presentar problemas en la columna y otros malestares en el cuerpo en el transcurso de los días, lo que significó que no podía trabajar en labores ejerciendo fuerza. Posteriormente, su estado de salud se fue agravando y fue llevado a diferentes médicos de Puerto Montt, los cuales le manifestaron que, debido a la gravedad de su diagnóstico, les recomendaron que lo llevaran a Santiago, donde existía tecnología más avanzada para su recuperación. Recuerda que su hermano fue llevado a Santiago y durante su permanencia en dicha ciudad quedó parapléjico, por lo que regresó a Castro y su estado de salud fue empeorando, falleciendo finalmente el 16 de mayo de 1979, producto de una hemorragia. Con respecto a la consulta realizada, manifiesta que durante el periodo que su hermano estuvo privado de libertad en las cárceles de Chin Chin de Puerto Montt y Ten Ten de Castro, como también durante el tiempo que permaneció con vida después de quedar en libertad, nunca señaló identidades de los Carabineros que lo detuvieron, como tampoco de sus torturadores, haciendo solo referencia a los malos tratos y apremios a los cuales fue sometido.

En declaración judicial de fecha 12 de diciembre de 2019, rolante de fs. 757; (Tomo II) ratifica sus declaraciones extrajudiciales prestadas anteriormente de autos. A la pregunta realizada, responde que los Carabineros que detuvieron a su hermano eran de Castro. A su vez, no supo las identidades de estos funcionarios. Dice que su hermano le contó que sufrió apremios en Puerto Montt, en la cárcel de Chin Chin, le dijo que lo metían a tachos de agua de cabeza, no le contó más porque las torturas fueron muchas. Con relación a la pregunta si antes de la detención, Raúl sufría dolor o tenía algún tipo de enfermedad que le dificultara caminar, el deponente responde que no recuerda bien, pero no, él trabajaba en el campo con motosierra cortando leña, no se quejaba de dolor o de enfermedad. A la pregunta si Raúl había sido buscado anteriormente por Carabineros o Militares, el deponente responde que, si había buscado, por Carabineros, no fue mucho tiempo antes, le parece que lo detuvieran. A la pregunta realizada, si conoció a los Carabineros Carlos Cifuentes, José Aude, Luis Ulloa y Hernán Escobar, el deponente dice que no, el único

Carabinero que conoció y dijeron que andaba era de apellido Aude, no recuerda el nombre.

A.2 MARÍA HELVECIA PAILLACAR PAILLACAR (22 años a la fecha de los hechos, Rut: 7.901.716-7) quien declaró a fs. 68 a 70; (Tomo I) y a fs. 304 a 306; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2011, rolante de fs. 68 a 70; (Tomo I) dice que fue cuñada de José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció el día 16 de mayo de 1979, en el hospital de Castro. Es el caso que para el año 1973, residía en el sector de Rilán, comuna de Castro. En ese tiempo, siendo el año 1974, mantenía una relación sentimental con Héctor Septimio Quintul Muñoz y en aquella época la deponente vivía en este domicilio, en compañía de su madre, siendo como parte de la familia de Héctor. Más tarde, en el mes de mayo del año 1974, se enteró que José Raúl fue detenido por Carabineros de Castro, quienes llegaron a la casa de la familia, ubicada en el sector Coihuinco, dijeron que andaban buscando a Raúl. En ese momento, estas personas comenzaron a registrar toda la casa, a la vez que causaban destrozos y rompían todo lo que había su paso, aduciendo que andaban buscando armas. Posteriormente, los Carabineros fueron a buscar a don Eliseo quien era el padre de Héctor y José Raúl, a quien trajeron desde el campo donde estaba trabajando, apuntando con las armas que portaban los Carabineros, quienes no conformes con su avanzada edad, lo amenazaron y consultaron donde estaba Raúl, en ese minuto se les dijo que estaba trabajando en el campo de Hernán Rehbein, lugar cercano a la casa, por ellos los Carabineros se fueron del lugar, supuestamente en busca de José Raúl. Posteriormente, luego de un rato, llegó Raúl a la casa, acompañado de los Carabineros, quienes fueron a detenerlo y lo encontraron cortando leña con una motosierra en el campo. En ese minuto, Raúl dejó la motosierra en la casa y se fue detenido con estos funcionarios a la comisaría de Castro. Todo lo narrado en la actualidad, se lo contó su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz. En ese tiempo, su suegro recorrió varios lugares de Castro, en busca de Raúl, pero no podía dar con su paradero, por ello le solicitó ayuda a un sacerdote de la iglesia de los Sagrados Corazones, quien no recuerda su nombre, pero actualmente se encuentra al parecer fuera del país. Fue esta persona quien finalmente encontró a Raúl, en la cárcel de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt, ya que estaba cumpliendo una condena por Infracción a la Ley de Armas, siendo visitado por la deponente cada quince días, con la finalidad de llevarle

viveres y cosas para su estadía. Hace presente que durante el tiempo en que Raúl estuvo detenido en Carabineros, y en la cárcel de Puerto Montt, fue duramente torturado, lo colgaban y golpeaban, sin tener compasión. Durante las visitas, Raúl le contaba a su hermano lo que sucedía, dándose cuenta de que estaba muy mal físicamente. Más tarde, luego de un año aproximadamente Raúl fue trasladado desde la cárcel de Chin Chin, hasta el recinto penal de Castro, donde estuvo alrededor de un año más, hasta que fue dejado en libertad. Una vez que José Raúl salió de la cárcel, caminaba con mucho dolor y estaba perturbado de mente, ya que no reconocía su casa o para donde tenía que ir. Por esos días, sus dolores se hicieron muy fuertes e imposibles de resistir, siendo atendido por el doctor Juvenal Hernández quien señaló que, debido a los malos tratos y las torturas recibidas, tenía múltiples lesiones en su cuerpo, por lo que el médico aconsejó que lo trasladaran hasta Santiago, a fin de que, con mayores adelantos médicos, pudieran ayudarlo en su recuperación. Posteriormente debido a que Raúl no mejoraba, no dormía en la noche y gritaba de dolor de la cintura, es que su esposo viajó en bus con su hermano hasta Santiago, recorriendo varios centros médicos y siendo atendido en hospitales, sin lograr mejorar a Raúl. Un día mientras estaba sentado en la casa donde vivían en Santiago, en un momento éste se cayó de la silla y nunca más volvió a ponerse de pie, quedando parapléjico, regresando en esas condiciones a Castro, para ello su marido tuvo que volverse en avión a Puerto Montt y desde allí, en avioneta hasta Castro. Más tarde, su esposo nuevamente trasladó a su cuñado Raúl, esta vez a la ciudad de Puerto Montt, siendo atendido y operado en dos oportunidades en el hospital de la ciudad, regresando luego a su hogar. Seguidamente, la vida de Raúl fue muy complicada, ya que sufría mucho por las lesiones que tenía, permaneciendo alrededor de dos años en la casa, falleciendo luego de una hemorragia interna, después de padecer por cinco años, las consecuencias de las torturas que fue sometido, durante el tiempo en que estuvo detenido. Finalmente, indica que, durante varios años, realizó varios trámites donde la señora Felicia Cárdenas, quien era la persona que atendía en la gobernación y estaba relacionada con los Derechos Humanos y las personas que habían sido perseguidos por Carabineros. Es necesario agregar que, los Carabineros que estuvieron en la casa de sus suegros y que detuvieron a Raúl, estuvo uno de nombre José Aude y había otro de apellido Oyarzún, esto conforme a lo que le comentó su cuñada. Señala, además, que la mujer que inventó que su cuñado tenía armas y denunció este hecho a los Carabineros, fue

una vecina del campo, de nombre Ana Hernández, quien tenía simpatía con el Gobierno Militar y actualmente se encuentra fallecida.

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 302 a 303 Vta; (Tomo I) ratifica en todas sus partes la declaración que prestó ante el Comisario de la Policía de Investigaciones don Oscar Garrido Castro. A su vez, expone que, fue cuñada de José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció el 16 de mayo de 1979, en el Hospital de Castro, a la edad de 35 años. En 1973, su familia residía en el sector de Rilán, comuna de Castro, pero la deponente estudiaba en el Liceo de esta ciudad. Después de terminar sus estudios en el liceo, continuó estudiando para educadora de párvulos, actividad que alcanzó a realizar durante un año por cuanto tuvo que dedicarse al cuidado de su familia. En 1974 cuando tenía 22 años de edad, comenzó una relación sentimental con Héctor Septimio Quintul Muñoz, quien vivía en Coihuinco e iba a verla a la pensión en donde la deponente vivía, que era la casa de su tía Mercedes Paillacar, y es el mismo inmueble que indicó anteriormente como domicilio, puesto que cuando ella falleció, la deponente lo compró. A los dos años de pololeo se casó con Héctor y continuaron viviendo en la misma casa. Su marido era el menor de la familia Quintul Muñoz, de 65 años en la actualidad. No se encuentra sano, tiene diabetes, artrosis, no está en condiciones de prestar declaración y dice que no quiere saber nada de lo ocurrido con su hermano por todo lo que sufrió. José Raúl había estudiado solo hasta sexto básico, no pudo continuar sus estudios por carencia de medios económicos, era soltero, se ganaba la vida cortando leña, para ello utilizaba una motosierra de su propiedad. Era dirigente del Partido Socialista de Castro, no tenía armas de fuego. Tenía enemigos, ya que en esa época en Coihuinco todos eran momios, y no podían ver a los socialistas. Toda la familia Quintul era del partido socialista. En mayo de 1974, residiendo ya en la casa de calle Galvarino Riveros, la llamó por teléfono su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz, quien vivía allí con su padre José Eliseo Quintul Quintul y su mamá María Rosa Muñoz Hernández, actualmente fallecidos, al igual que tres de sus 6 hijos para informarle que habían ido funcionarios de Carabineros en busca de José Raúl, registraron la casa, provocaron destrozos, hicieron pedazos los colchones buscando armamento, ya que estaba denunciado por tener armamento y ser dirigente socialista. A causa de esto a la finada Rosa le dio un ataque al corazón y tuvieron que llevarla al médico. Posteriormente, Carabineros con armas pasaron a la casa, preguntando por don Eliseo, su cuñada les dijo que estaba cortando leña en un lugar cercano a la casa y fueron a buscarlo y le preguntaron dónde estaba

José Raúl, les dijo que estaba trabajando donde su prima Ermelinda Gallardo, con motosierra. Ella estaba casada con Hernán Rehbein. Luego de un rato, llegó Raúl a la casa, acompañado de los Carabineros, dejó la motosierra en la casa y se fue detenido con los Carabineros a la comisaria de Castro. Todo lo narrado se lo contó su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz, a medida que iban ocurriendo estos hechos. Ella tiene actualmente unos 62 años, reside en Coihuinco, conocido como la Chacra Coihuinco, sector rural, a unos 10 minutos de Castro en vehículo. Su marido tenía otro hermano, José Octavio Quintul Muñoz, no recuerda si mayor o menor que José Raúl, en esa época casado y trabajaba en el campo. Vive actualmente en Coihuinco. Él también estuvo preso junto con Juan Huenchucoy. Otro que estuvo detenido en la misma época era Mario Contreras Vega, él era profesor, también escritor, no recuerda su edad ni en que colegio trabajaba. También recuerda a César Wladimir Leiva, José Quinchen, los Barrientos, Enoldo Cuyul Levipani, entre otros casi todos fallecidos. Retomando su relato, después que José Raúl fue detenido, su suegro recorrió varios lugares de la ciudad de Castro, buscándolo, pero no podía dar con su paradero, por ello le pidió ayuda a un sacerdote de la Iglesia de los Sagrados Corazones, de quien no recuerda su nombre, pero actualmente se encuentra viviendo fuera del país. Fue esta persona que finalmente encontró a Raúl en la cárcel de Chin Chin, ya que estaba cumpliendo una condena por infracción a la Ley de Armas. Una vez que supieron su paradero, sus familiares lo visitaron cada quince días, con la finalidad de llevarle víveres y cosas para su estadía. Hace presente, que durante el tiempo en que Raúl, estuvo detenido en Carabineros y en la cárcel de Puerto Montt fue duramente torturado, lo colgaban y golpeaban y hasta lo hacían comer excrementos. Todo esto lo sabe por los dichos de Mario Contreras, César Leiva y otros que estuvieron también detenidos al igual que su cuñado. Además, durante las visitas, Raúl le contaba a Héctor, su marido, lo que sucedía, dándose este cuenta que estaba muy mal físicamente. Más tarde, luego de un año aproximadamente, Raúl fue trasladado desde la cárcel de Chin Chin, hasta el recinto penal de Ten Ten, en Castro, donde estuvo alrededor de un año más, hasta que fue dejado en libertad. Cuando José Raúl fue detenido era un hombre joven, sano, de mente clara, alto de estatura, más o menos 1,65 cm, no sabe especificarlo, pero una vez que salió de la cárcel, caminaba con mucho dolor y estaba perturbado de su mente, ya que no reconocía su casa o no sabía para donde tenía que ir. Por esos días, sus dolores se fueron haciendo muy fuertes e imposibles de resistir, fue atendido por el doctor Juvenal Hernández, quien señaló

que debido a los malos tratos y torturas recibidas, tenía complicaciones con su cuerpo, por lo que aconsejó que lo trasladaran a Santiago, a fin de que con mayores adelantos médicos, pudieran ayudarlo con su recuperación. Posteriormente, debido a que Raúl no mejoraba, no dormía en la noche y gritaba de dolor de la cintura, es que su esposo lo llevó en bus hasta Santiago, recorriendo varios centros médicos y fue atendido en hospitales, sin lograr mejoría. Un día, mientras estaba sentado en la casa donde estaban alojando en Santiago, se cayó de la silla y nunca más volvió a ponerse de pie, quedando parapléjico, regresando en esas condiciones a Castro, para ello su marido tuvo que llevarlo en avión devuelta a Puerto Montt y desde allí, en avioneta hasta Castro. Más tarde, su esposo nuevamente trasladó a Raúl al hospital de Puerto Montt, lo operaron en dos oportunidades, regresando luego a su hogar. Después permaneció alrededor de dos años en la casa, falleciendo de una hemorragia interna, después de padecer por cinco años, las consecuencias de las torturas a las que fue sometido. En varias ocasiones se entrevistó con la señora Felicia Cárdenas, en la gobernación y estaba relacionada con los Derechos Humanos y las personas que habían sido perseguidas por Carabineros. Entre los Carabineros que detuvieron a Raúl, existía uno de nombre José Aude y otro de apellido Oyarzún, esto conforme a lo que le contó su cuñada Gloria Iris Quintul, quien los reconoció cuando fueron en busca de José Raúl. Señala, además, que la mujer que inventó que su cuñado tenía armas y denunció este hecho a Carabineros, fue una vecina del campo, de nombre Ana Hernández, que vivía en Couhuinco, quien tenía simpatía con el Gobierno Militar y actualmente se encuentra fallecida.

A.3 MARIO ENRIQUE CONTRERAS VEGA (26 años a la fecha de los hechos, Rut: 5.264.360-0) quien declaró a fs. 71 a 72; (Tomo I), a fs. 87; (Tomo I) y a fs. 304 a 306; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de fs. 71 a 72; (Tomo I) dice que para el año 1973, era comerciante y dirigente político del partido Comunista de Chile, siendo detenido con fecha 31 de diciembre de 1973, por Carabineros de Castro, supuestamente por reorganizar la resistencia al Gobierno Militar. Por lo anterior, fue enviado a la cárcel de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt, encontrándose con varias personas en la ciudad de Castro, entre las que recuerda a Raúl Quintul y Carmelo Quinchen Gómez, siendo compañero de celda de este último. En ese tiempo, todos tomaron conocimiento de los daños físicos que tenía Raúl Quintul, secuelas de las torturas a las que fue

sometido antes de llegar a la cárcel, ya que habitualmente este se encontraba acostado y en ocasiones eran los compañeros quienes lo llevaban al baño. Es necesario agregar que a Carmelo Quinchen y a Raúl Quintul, los pasaron a consejo de guerra y fueron condenados al parecer por infracción a la Ley de Armas, a una pena si mal no recuerda de 22 meses. Posteriormente, un día en que se encontraban en la cárcel de Chin Chin, Quinchen y Quintul, fueron trasladados hasta la cárcel de Castro, mientras que el deponente permaneció en Puerto Montt, siendo dejado en libertad, con fecha 19 de diciembre de 1975. Una vez en libertad, se trasladó a vivir a la ciudad de Ancud, perdiendo todo contacto con la gente de Castro, hasta el año 1982, fecha en que regresó a la ciudad. Indica que se enteró de la muerte de Raúl Quintul, en una de las ocasiones que viajó a visitar a su familia a Castro, sin tener mayores noticias de su fallecimiento. Finalmente, agrega que por lo que recuerda, Raúl Quintul, presentaba lesiones en la parte baja de la espalda, especialmente heridas que se infectaron y estas lesiones le impedían poder desplazarse con normalidad, es más, en una ocasión se enteró que había quedado inválido y que permanecía en su domicilio acostado todo el día, esto sin duda lo ocasionó las torturas a las que fue sometido durante su detención.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2011, rolante de fs. 87; (Tomo I) señala que ratifica en todas sus partes lo que declaró ante la Policía de Investigaciones con fecha 18 de mayo de 2011. Y tiene entendido que las heridas que José Raúl Quintul Muñoz, tenía en el coxis alcanzaban el nivel de fracturas lo que le impedía ponerse de pie, caminar, en resumen, valerse por sus propios medios. José Quintul nunca fue atendido por las lesiones que presentaba, no fue llevado a ninguna posta, menos aún a un hospital. Sabe también que José Quintul falleció en su domicilio, había cumplido una pena de cárcel, y supone que la causa de muerte es producto de las lesiones sufridas estando privado de libertad en calidad de detenido político. Le consta lo que dice porque estuvo detenido la primera vez desde el 31 de diciembre al 10 de febrero de 1974, y luego la segunda, desde el 28 de mayo hasta el 19 de diciembre de 1975, cree que en su segundo periodo de detención se encontró con José Quintul quien ya estaba entre los detenidos y dado que compartió celda con su compañero de causa don José Carmelo Quinchen Gómez, pudo conocer a José Quintul e inclusive atenderlo cuando no era capaz por sí mismo movilizarse, descender o ascender escaleras e inclusive realizar sus necesidades en el baño.

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 304 a 306; (Tomo I) arguye que ratifica en todas sus partes la declaración que prestó ante el Comisario de la Policía de Investigaciones don Oscar Garrido Castro y cuya acta está agregada a fs. 71. Dice que durante el gobierno de la unidad popular vivía en Castro, era comerciante, pertenecía al Partido Comunista y en Castro estaba encargado de la organización y funcionamiento interno. Además, tenía un programa radial en la radio Chiloé, de Castro, que salía al aire tres veces a la semana, de 11:30 horas a 12:00 AM, si mal no recuerda. Debido a su actividades políticas estuvo detenido entre el 13 y el 23 de septiembre; el 4 y 11 de octubre y un día antes de fines de 1973, oportunidad en que lo enviaron a Puerto Montt. En las dos primeras ocasiones, al parecer en cumplimiento de una orden de detención en su contra, fue detenido primeramente por personal de Carabineros, cuando estaba en su trabajo en una empresa llamada Importado Austral, por un grupo dirigido en aquel entonces por el sargento primero de apellido Cifuentes e integrado por el entonces cabo José Aude y un Carabinero de apellido Ulloa. Esto ocurrió en la mañana del 13 de septiembre de 1973. No le exhibieron orden ni el motivo. Circulaba una lista de personas que debían presentarse en la comisaria, personas que realizaban actividades sociales de relevancia. Lo condujeron a la segunda comisaria de Carabineros en Castro, había otros detenidos y a todos los mantuvieron sentados en el piso, permaneció en esa situación durante diez días, se alimentaban con la comida que le llevaban de sus casas. Desde luego, nunca pudo bañarse, para el aseo personal utilizaban un único lavamanos y para sus necesidades existía un baño común al cual los sacaban por turno. Le parece recordar que lo interrogaron en la misma guardia, pero sin mayores formalidades. Donde estaban las armas, quien era el responsable de ellas, quien manejaba la lista del plan z, eran las preguntas recurrentes. Recuerda que circulaba un afiche dirigido a la tropa que decía “tú también estabas en la lista”, es decir, sugería que ellos y su familia iban a ser muertos. La segunda ocasión, entre el 4 y 11 de octubre de 1973 lo detuvo personal de la marina, fue conducido a una bodega de la Gobernación Marítima, abajo en el puerto, donde guardaban motores en desuso, lo castigaron y le pusieron corriente, no por marinos, sino por conscriptos de la Fuerza Aérea procedentes de Puerto Montt, que habían llegado como refuerzos. Las preguntas eran las que ha señalado anteriormente; luego lo interrogó un teniente de la Marina, a quien le dijo que le estaban haciendo las mismas preguntas que los Carabineros, y se dio cuenta de que ya habían cumplido con la orden de

detenerlo, y lo liberaron. El 31 de diciembre de 1973, a raíz de una confusión por al parecido que Telmo Vega Rojas un hermano de su madre Rosario Vega Rojas tenía con un conocido dirigente comunista Manuel Ramírez, muy buscado porque era funcionario del partido, y que su madre había invitado a pasar la fiesta de año nuevo, se armó todo un operativo policial y allanaron su casa; el día antes su madre y su hermana para proteger al deponente habían hecho una excavación en el patio para enterrar los libros de su biblioteca, entre los cuales habían algunos relativos al comunismo, y ese tío ayudó con la excavación. Cuando llegaron a detener al supuesto Ramírez, se aclaró la confusión, pero igual se llevaron detenido a su tío pues estaba ebrio y alguien debía ir a la comisaria para retirarlo después, a lo que se ofreció. Durante el trayecto su tío se exculpó diciendo que solo había ayudado en una excavación para enterrar los libros del deponente. Fue así como finalmente quedó el deponente detenido y su tío en libertad. Después, se dijo que en alguno de los libros había dos paquetes con balas de calibre 22, y lo trasladaron a Puerto Montt, a la cárcel de Chin Chin. Esta estaba llena, fue interrogado en la Fiscalía y después le dieron la orden de libertad. Sin embargo, luego en la mañana del 28 de mayo de 1974 fue nuevamente detenido por los mismos funcionarios de Carabineros, suboficial Cifuentes, cabo Aude, y Ulloa, en su lugar de trabajo, en total eran cinco personas detenidas; Pedro Quelincoy de la Torre, Enoldo Cuyul Levipan, Juan Altamirano Tripay, César Vladimir Leiva y el deponente cree que estuvieron un día en la comisaria y los trasladaron a la cárcel de Chin Chin. Del grupo, Leiva y Cuyul fueron trasladados a La Patilla, en el cuartel de investigaciones, genéricamente se dijo que estaban encargados de organizar la resistencia. Permaneció detenido en ese recinto hasta el 19 de diciembre de 1975, 19 meses y 20 días, sino se equivoca. A lo menos en tres ocasiones fue interrogado por un suboficial de la Fuerza Aérea, en oficinas que se encontraban en el segundo piso del edificio en que funciona actualmente la Gobernación Provincial de Llanquihue, y la cual se ingresaba por calle Antonio Varas. En esos días, media parte del primer piso y todo el segundo piso de la cárcel estaba llena de presos políticos y recibían un trato denigratorio de parte de los gendarmes, en condiciones falta de higiene, hacinados. En el periodo que señaló, en una oportunidad fue conducido al cuartel de la Policía de Investigaciones, en calle Serena de Puerto Montt, a media mañana, estuvieron toda la mañana encerrados en La Patilla, tipo celda, ahí vio a Marco Antonio Romero Arias, escribiente de Gendarmería, que viven actualmente en Temuco, tiene una hija que se llama Liliana Romero Barrientos y está en Facebook, y a

Jaime Moraga Zamorano, que es topógrafo y vive en Ancud donde tenía oficina. Conversó con ellos, le parece que no los habían interrogado, no se les veía en malas condiciones. Como a las 7 de la tarde lo devolvieron a Chin Chin, junto con otra persona que no identificó. Al inicio de este periodo cuando los detuvieron los trasladaron a Ancud, en esa época la prefectura de Carabineros se encontraba en Ancud, mientras esperaban el traslado a Puerto Montt los mantuvieron en un patio, de frente a una muralla, con los brazos en alto y las palmas apoyadas en la pared; al que bajaba los brazos lo golpeaban. En Castro, a Pedro Quelincoy lo condujeron a las caballerizas de la Comisaria y allí lo sometieron al llamado “submarino”, un tambor petróleo vacío, lleno de agua podrida, en el cual lo sumergían. Cuando lo subieron al furgón que los llevaría a Ancud iba muy maltraer, y falleció a causa de un cáncer pulmonar. Durante su paso por el cuartel de investigaciones y la Patilla y su encuentro con Romero y Moraga, vio que al final de un pasillo, en el mismo nivel en que estaba esa celda, había una dependencia con las paredes manchadas de sangre, allí había un catre tipo de campaña, de aquellos de una plaza, con huinchas metálicas y resortes. Le comentaron que era utilizado para aplicar corriente eléctrica, no de aquella generada para fines urbanos, sino producida con elementos domésticos y de menor intensidad o voltaje, y que recién había pasado por allí un joven dirigente, le parece que, del Mir, de apellido Guerrero y al que apodaban El Pakistano. No recuerda haberlo visto allí, pero le consta que estuvo en Chin Chin. En la cárcel conoció a Conrado Ulloa, que a su vez conocía a su madre; también supo de un prisionero de apellido Mascareña, quien era procedente de una isla, estaba el deponente presente cuando en la noche lo fueron a dejar a La Patilla a la cárcel, muy enfermo, por la sed que llevaba supone que había sido sometido a golpes de electricidad, mientras llegaba el gendarme con la llave de la celda en que lo encerraban se fue al baño a tomar agua. Todos sabían que la persona sometida a golpes de electricidad quedaba con su organismo en tales condiciones que no se debía beber líquido alguno. Todos le gritaron que no lo hiciera, entre ellos el doctor Nofal Abud, pero igual bebió. El deponente estaba a dos celdas de distancia del baño, a unos seis metros y vio cuando se dirigió al baño. Después se juntaron varios gendarmes y lo sacaron en una camilla; no lo volvió a ver y no supo que ocurrió con él tampoco nadie les informó nada. Con relación a José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció posterior a 1973, por las circunstancias que ha narrado, estuvo privado de libertad en la cárcel de Chin Chin, encontrándose con varias personas de la ciudad de Castro, entre las que aparte de las que nombró,

recuerda a Raúl Quintul y a Carmelo Quinchen Gómez, quien era su compañero de celda. Quinchén le relató las circunstancias en que ambos fueron detenidos. Resulta que aquel había comprado un revolver de aquellos procedentes de Argentina, calibre 22. A raíz de las informaciones que circulaban sobre personas detenidas se asustó y acudió a Quintul, con quien ocultaron el arma en un pozo seco que había en el predio de éste, y se ocultaron en algún bosque. Eso los hizo sospechosos y alguien los denunció, así es que se fueron detenidos por los funcionarios de Carabineros que ha mencionado y que los llevaron amarrados a la ciudad y luego trasladados a Puerto Montt junto con el arma, fueron sometidos a consejo de guerra y condenados. Dice que lo vio en Chin Chin, presentaba en su cuerpo huellas de culatazos, sobre todo en la parte baja de la espalda, y eso casi lo discapacita. Por ello tenía mucha dificultada para defecar en la taza turca en que hacían sus necesidades, y en muchas ocasiones lo ayudó apoyándolo entre dos personas. Por eso vio sus magulladuras y señales recientes de maltrato que impresionaban como culatazos. Quinchen le dijo que se los habían propinado los Carabineros en Castro. Como dijo, presentaba lesiones en la parte baja de la espalda, específicamente heridas, que se infectaron y estas lesiones le impedían poder desplazarse con normalidad. Por cierto, tanto Quintul como Quinche están muertos. Como señaló, los pasaron a consejo de guerra y fueron condenados al parecer por infracción a la Ley de Armas, a una pena que si mal no recuerda fue de 22 meses de presidio. Por su parte, en lo personal nunca fue sometido a consejo de guerra y nunca se le notificó sentencia alguna. Simplemente fue dejado en libertad, lo que le informaron en la Fiscalía. Posteriormente, un día en que estaban en la cárcel de Chin Chin, Quinchen y Quintul fueron trasladados hasta la cárcel de Castro, mientras que el deponente permaneció en Puerto Montt, quedando en libertad el 19 de diciembre de 1975. Una vez en libertad, se trasladó a vivir a Ancud, perdiendo todo contacto con la gente de Castro, hasta 1982, fecha en que regresó a Castro. En una de las ocasiones en que viajó a visitar a su familia en Castro, se enteró de la muerte de Raúl Quintul, sin tener mayores noticias de su fallecimiento. En una ocasión se enteró que había quedado inválido y que permanecía en su casa acostado todo el día.

A.4 CÉSAR VLADIMIR LEIVA GARRIDO (35 años a la fecha de los hechos, rut: 3.301.307-8) quien declaró a fs. 73 a 74; (Tomo I), a fs. 84 a 86; (Tomo I) y a fs. 307 a 309 Vta.; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2011, rolante de fs. 73 a 74; (Tomo I) explana que recuerda para el mes de junio del año 1973, llegó a la ciudad de Castro proveniente de Valdivia, siendo detenido el día 27 de mayo del año 1974, por personal de Carabineros de civil de Castro, sin identificación, en su domicilio particular. En ese tiempo, permaneció tres días en la comisaría de Carabineros de Castro, donde fue golpeado, torturado y sometido a simulacro de fusilamiento, hasta que fue enviado a la ciudad de Ancud y luego a la cárcel de Chin Chin, Puerto Montt. Una vez en la cárcel, conoció en ese lugar a Carmelo Quinchen y José Quintul, quienes estaban detenidos al igual que el deponente y eran originarios de la ciudad de Castro. Recuerda que, en esa época, estaban ubicados en celdas, junto a unas quince o veinte personas, donde el alimento que les entregaban era incomible y no contaban con atenciones médicas o asistencia de paramédicos. Es necesario indicar que José Quintul, quedó muy afectado físicamente sufría de afecciones al pecho y/o pulmón, acrecentado por la humedad, la nula atención médica y las torturas a las que fue sometido, en su trayecto hasta la cárcel de Chin Chin, los hacía pensar que podría tener tuberculosis, ya que la mayoría de las veces no era capaz de levantarse. Por ello, el deponente cuando tenía la oportunidad de salir al patio, cuando había sol, lo sacaban a la fuerza, tratando de que pudiera con esta acción, mejorar en algo su estado. Un día, José Quintul y Carmelo Quinchen, fueron sacados de la cárcel de Chin Chin y en un primer momento pensó que habían quedado en libertad, pero luego de unos días se informó que habían sido trasladados hasta la cárcel de la ciudad de Castro. Una vez que fue dejado en libertad desde la cárcel de Chin Chin, se le informó de la muerte de José Quintul, quien falleció en la ciudad de Castro, debido a problemas pulmonares y las secuelas producto de las torturas a las que fue sometido. Finalmente, indica que cuando fue detenido por Carabineros de Castro, recuerda que fue interrogado y torturado por un funcionario de apellido Cifuentes, quien se hacía llamar de apellido Villalobos, otro funcionario de nombre José Aude y otra persona de quien no recuerda su apellido, pero fue concejal de la comuna de Quemchi, en el año 1990 aproximadamente.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2011, rolante de fs. 84 a 86; (Tomo I) ratifica en todas sus partes lo declarado ante la Policía de Investigaciones, de fecha 17 de mayo de 2011. A su vez, agrega que por estos hechos declaró cuando salió la ley, debe haber sido por el año 1997 o 1998, ya no recuerda exactamente, pero se refirió a ellos respecto de lo que vivió personalmente y lo sucedido a otros detenidos y que pudo constatar. No tiene

nuevos antecedentes para agregar al proceso, ha dicho lo que sabe al respecto. el 27 de mayo de 1974, se encontraba en su domicilio ubicado en calle Galvarino Riveros número 721, en Castro, y daba almuerzo a su hijo mayor a quien le faltaban tres días para cumplir dos años cuando escucha que golpean la puerta, al abrir se encuentra con tres hombres vestidos de civil quienes le preguntaron por un señor Pérez, ahí les respondió que no lo conocía y le pidieron la cédula de identidad lo que le pareció extraño que persona vestidas de civil hicieran este cometido y les respondió que para qué, les dio su nombre y les explico que vivía en ese lugar por varios meses. Insistieron y ante tal situación, les mostró la cédula, estaba presente la señora del deponente y cuando entregó su carnet a la persona que se hacía llamar Cifuentes, vio su identificación y le señaló que tenía que acompañarlos porque debía hacer una declaración explicándole a la señora del deponente que no se preocupara por qué este iba a volver ligero. 19 meses después volvió. Desde su casa fue llevado a la comisaria de Carabineros de Castro, entrando en ella fue golpeado y le manifestaron “ahora vas a hablar y te vas a encontrar con nosotros”, fue golpeado con los puños en las costillas y en distintas partes del cuerpo, le sacaron la ropa dejándolo en pantalones y de allí a una pesebrera que estaba detrás de la comisaria, al rato y estando en esa dependencia escuchó la voz de alguien que gritaba “a qué hora vamos a fusilar a este comunista” esa persona se apodaba “corazón de escarcha” y después lo fueron a sacar y los mismos individuos que llegaron a su domicilio se encargaron de amarrarlo con las manos en la espalda y nuevamente lo golpearon de manera muy distendida sin hacer preguntas ni decir nada, solo golpear y cuando lo soltaron de nuevo lo encerraron en la pesebrera; en la tarde del día de su detención lo soltaron y le preguntaban por un señor de apellido Mansilla que después supo que se trataba de un funcionario del Servicio de Seguro Social, ahí se confundió porque el deponente conoció a un señor de apellido Mansilla que era comerciante y le preguntó si estaba vivo ante lo cual nuevamente le cayeron golpes diciéndole “sí, tal por cual... está vivo”. Durante la noche le sacaron de nuevo lo golpearon y la comida que le llevó su señora le mostraron y se la devolvieron manifestándole que no quería comer, de esto, se enteró tiempo después por que la señora del deponente le contó al igual que supo que llegaron a su hogar y registraron todo en busca de armas, quemaron libros y entre ellos quedaron uno que se titulaba “arme y desarme” y por el cual lo trasladaron como detenido a Chin Chin en Puerto Montt. La misma noche de su detención calcula, por el silencio reinante, debe haber sido las diez de la noche lo sacaron y lo

metieron en un jeep, atado de manos, lo tiraron al suelo del vehículo por la puerta trasera dejándolo ahí por no sabe cuanto tiempo pero escuchó que fuera del vehículo arrastraban a alguien, escuchó quejidos, enterándose después que se trataba de don Pedro Quelincoy de la Torre, a él lo conocía porque fue delegado de gobierno en Chonchi y después lo devolvieron a la pesebrera hasta el día siguiente que lo sacaron temprano preguntándole a quien tenía que matar, naturalmente para eso no tenía respuesta, por lo que lo involucraron en el plan z, este fue el gran invento que hicieron para justificar tanta detención. Los tres días que estuvo detenido en Castro la rutina fue la misma, preguntas y golpes salvo una noche que lo sacaron, lo tiraron en un jeep y lo llevaron vendado a un lugar desconocido en donde lo pusieron de pie, lo ataron a un árbol y le ordenaron fuego y dispararon al aire, en el fondo la intencionalidad era intimidar, maltratar y un sinfín de sentimientos contradictorios. La mañana del tercer día junto a Mario Contreras, Pedro Qulincoy, Juan Pedro más un señor Quemchi, cuyos nombres no recuerda, se trasladaron a Ancud, ahí en la comisaria de esa ciudad estuvieron todo el día y la noche, al día siguiente de amanecida fueron trasladados a la intendencia de Puerto Montt, ahí estuvieron casi todo el día llevándolos en la tarde a Calabozos subterráneos de Chin Chin en Puerto Montt donde estuvieron aislados durante dos días hasta que los llevaron de nuevo a la intendencia donde se les interrogó el fiscal, por separado, luego de esto regresaron a Chin Chin, en libre plática con los demás detenidos que en ese momento eran más de 200. En el mes de junio de ese año lo sacaron de Chin Chin y lo llevaron a investigaciones en un grupo compuesto por otros nueve detenidos donde estuvo todo el día sin que ocurriera nada nuevo y durante la tarde se llevaron a ocho de ellos y quedó con el detenido de nombre Juan Pedro; en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, donde estuvo un mes, ahí lo tomó el servicio de inteligencia militar y fue sometido a torturas físicas y psíquicas, estuvo todo un mes ahí y nadie sabía dónde estaba hasta que por una equivocación del fiscal lo mandaron nuevamente a Chin Chin donde permaneció por el siguiente periodo hasta que fue dejado en libertad y volvió a Castro, a su casa.

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 307 a 309 Vta.; (Tomo I) ratifica en todas sus partes la declaración que prestó ante el Comisario de la Policía de Investigaciones don Oscar Garrido Castro. Y cuenta que llegó a esta ciudad en junio de 1973, proveniente de Valdivia, tenía 34 años de edad, era dirigente del Partido Comunista, encargado agrario y dirigente de la Federación Campesina e indígena Ranquil, y subsecretario general de la Cut

provincial de Valdivia. El 11 de septiembre de 1973 ya estaba trasladado a Castro por el partido, preparando el 14° Congreso Nacional, había llegado dos meses antes y no era conocido sino a nivel interno de manera que para la fecha señalada no fue convocado para presentarse a unidad policial alguna, por lo que pasó a la clandestinidad. Sin embargo, el 24 de mayo de 1974 fue detenido por personal de Carabineros de Castro, vestidos de civil, sin identificación, en su domicilio particular, ubicado en Galvarino N°721, interior, calle que en esa época se llamaba Avenida Pacífico, debido a un soplo, cuando le daba almuerzo a su hijo. Dice que estaba con un amigo Juan de Dios Altamirano Tripay que apenas salió de Chin Chin murió a causa de un infarto. Golpearon la puerta, abrió y vio a tres personas, de las cuales reconoció a José Aude, a quien antes había visto de uniforme; preguntaron por un tal Pérez, le dijo que no vivía ahí, uno de los sujetos sacó su revólver, le apuntó y le pidió que exhibiera el carnet, lo que hizo, y a continuación lo detuvieron al deponente y a su amigo, sin preguntarle a este nombre ni nada. A su señora le dijeron que se trataba de hacer una declaración y que volvía prontamente. Los trasladaron caminando hasta la comisaria de Carabineros, los separaron, al deponente lo pusieron en una caballeriza, le sacaron la ropa, lo dejaron en puro pantalón, descalzo. Se fueron, después volvieron dos, uno de ellos le ató las manos a la espalda con una pitilla, con nudo que se va apretando a medida que uno las mueve y luego comenzaron los golpes de manos y de pie, con mano empuñada, fundamentalmente en el estómago y pecho, la cara no se la tocaron hasta el final. En esto no participó José Aude, él solo observaba y tomaba nota, pero se le escapó el apellido de uno de ellos, Cifuentes; el otro era Ulloa. Desde luego, nunca le exhibieron orden de detención ni lo dejaron los motivos de esta; en ese tiempo había toque de queda desde las 16:30 a 17 hrs. Hasta las 06:00 AM. Permaneció tres días en la caballeriza de la comisaria de Carabineros, el primer día su cónyuge, Bernardita Irene Caro Rojas, enfermera y matrona, de su domicilio le llevó comida, pero le dijeron que el deponente no quería comer, al segundo día botaron la comida delante del deponente; durante todo ese lapso no le permitieron asearse, sus necesidades las realizaba ahí mismo, en el suelo. En el sitio había un bebedero de los animales, una tinaja de cemento, llena de agua putrefacta porque ya no usaban caballos y en esa agua le sumergieron la cabeza en varias oportunidades. Con relación a la pregunta realizada, físicamente no sentía nada; había asistido a un curso impartido en Santiago sobre preparación física y autodefensa, parecido a las artes marciales, en el que había aprendido a auto controlarse y relajación, pero en el plano psicológico sintió impotencia sobre

todo al estar con las manos atadas ante persona que solo golpeaban y golpeaban, sin preguntar nada y con mucho odio. Cuando estaba en la caballeriza varias veces escuchó a uno que apodaban “corazón de escarcha” que gritaba “a que hora vamos a fusilar al comunista”. Todos los días lo mantuvieron descalzo y con el torso desnudo. Dormía de pie, afirmado en la pared. La segunda noche lo sacaron con los ojos vendados y lo transportaron en un jeep hasta un lugar que posteriormente, por el recorrido que hizo y versiones de vecinos del lugar, debe haber sido para el lado de San Pedro, donde estaba lo que en ese entonces llamaban Fundo Los Curas, por un sendero hacia el pacífico. Lo bajaron del jeep y le dijeron que lo iban a fusilar. Reconoció la voz de Cifuentes; también estaban Aude y Ulloa y el corazón de escarcha. Tenía las manos atadas a la espalda, de pie y los ojos vendados. Escuchó el ruido de carga de las carabinas y los disparos. Se orinó en los pantalones. Luego, un silencio absoluto. Le dijeron que esto era lo que le iba a pasar si no hablaba. Lo subieron al jeep y regresaron. Lo metieron en la misma caballeriza. Al día siguiente, en la mañana, lo sacaron hacia afuera, atado de manos y le preguntaron por personas que desconocía y que daba cuenta algunos eran ficticios y otros verdaderos pero que el deponente desconocía. A cada respuesta negativa iba uno o dos golpes en cualquier parte del cuerpo, menos la cara. En una de las ocasiones esquivó el cuerpo se golpeó en la aldaba de fierro de la puerta de la caballeriza y se fracturó la muñeca. Pues lo vio con la mano enyesada; era Ulloa, el más matón de los tres. Tiempo después este fue concejal en Quemchi, donde vive actualmente. Aude vive en la población de los Carabineros frente a la plazuela Eduardo Frei: sale a realizar sus compras, la última vez que lo vio fue el 5 de enero en curso. A Ulloa y Cifuentes no los ha visto e ignora si viven. Cifuentes en esa época tenía una chapa, le llamaban “Villalobos”. Al amanecer del cuarto día lo sacaron de la caballeriza, se encontró con Mario Contreras, Pedro Quelincoy, Enoldo Cuyul y Juan de Dios Altamirano. A los cinco los subieron en un furgón del Sag y los trasladaron hasta el grupo de Carabineros de Ancud. Le parece recordar que les dieron almuerzo, estuvieron todo el día, no preguntaron nombres ni nada, y al día siguiente los llevaron a Puerto Montt, ciudad a la que llegaron alrededor de las 9 de la mañana, y los condujeron hasta la Fiscalía, que funcionaba en la intendencia, en lo que ahora es la Gobernación Provincial. No los interrogaron y en la tarde los llevaron a Chin Chin. No portaban ninguna especie de uso personal, solo lo puesto, el deponente con calzado, hambriento y deshidratado. Los ubicaron en calabozos individuales en la parte subterránea y al día siguiente los llevaron a Fiscalía, la verdad es que

no sabe si al día siguiente o después, pues perdió la noción del tiempo. Recuerda que los detenidos del segundo piso les proporcionaron comida y les dieron la bienvenida. Se encontraban en calidad de incomunicados, pero sin conocer los cargos. Estos los vino a conocer cuando lo interrogaron en la fiscalía, estaba acusado de reorganizar el partido y por la tenencia de un libro “arme y desarme internacional” de la colección 70, que cuando el fiscal lo interrogó, el señor Ebersperger, no pudo no menos que exclamar “pacos huevones”. En Chin Chin estuvo todo el mes de junio, y a fines de ese mes lo trasladaron al cuartel de investigaciones, donde lo recluyeron solo en una celda. Allí se encontraba un detective de apellido Mariangel, que lo conocía de Valdivia y a veces cuando estaba de guardia en la noche le daba cigarrillos y le avisaban cuando lo iban a sacar para interrogarlo, esto es, llevarlo a la parrilla. Estuvo más o menos quince días, la primera semana no le preguntaron nada, primero estuvo con Juan de Dios Altamirano y se empezó a rayar, estaba hablando con la luna, comunicándose con marte, así es que le pidió a Mariangel que lo dejara solo y así fue. El interrogatorio comenzó al término de la segunda o a comienzas de la tercera semana de haber ingresado al cuartel; perdió la noción del tiempo, pues la celda era subterránea, casi a oscuras, con una pequeña ventanita en la parte alta de la pared. Fue sometido a interrogatorio por funcionarios del SIM. El procedimiento del interrogatorio consistía en que a uno lo sacaban de la celda con los ojos vendados, regularmente vestido y calzado. Entre dos personas lo hacían caminar con las manos atadas en la espalda unos ocho o diez pasos y al llegar a la esquina venían uno ocho o nueve escalones de una escalera estrecha y había que subir hasta una sala, le bajaron los pantalones y calzoncillos hasta los tobillos, los que le ataban a las patas de la silla de madera, lo sentaban y sin preguntar absolutamente nada en una de las sienes un diodo en las encías, ojos, genitales, donde cayera, en el pecho, las tetillas... La corriente provenía de un generador manual que activaban con una manivela, pues escuchaba el zumbido. No podría determinar cuánto tiempo se prolongaba esto, al primera pinchazo quedaba medio muerto, después lo sacaban a la rastra, arrastrando rodillas y pies, golpeando los escalones... luego lo tiraban en el suelo de la celda. Mariangel le había dicho que no podía tomar agua, por lo demás en el calabozo no había agua. A veces conseguían que entregaran agua en todos los calabozos, especialmente en La Patilla. Algunas veces, mercede a la ayuda de Mariangel, consiguió ducharse, en las duchas que había en el mismo piso, con agua fría, sin jabón y sin toalla para secarse, sin pasta dental ni cepillo; comía cada tres días, o cuatro, de lo que le

daba Jaime Moraga, que no era siempre pues a veces le convidaba a alguien más necesitado. A él le llevaban el almuerzo un mozo del Club Alemán pues la señora le pagaba pensión allí. Le preguntaban por el plan Z y a quien tenía que matar el deponente y en qué escuela de guerrilleros había estado. No le aplicaron otras formas de torturas, aparte de electricidad y golpes. De estos conserva una clavícula fracturada, de la cual se evidencia un callo que le sobresale del hombro. Es secuela de su paso por el cuartel de investigaciones de Puerto Montt, de eso está seguro. En cuanto a las secuelas psicológicas, le duraron más o menos hasta 1990, época en que se fue a Santiago para estudiar la carrera de laboratista dental y gracias a eso tiene trabajo. En el cuartel de investigaciones estuvo un mes y algunos días, ahí, al parecer por un error del fiscal, lo llevaron nuevamente a Chin Chin, del cual salió el 23 de diciembre de 1975, junto con Mario Contreras Vega, Enoldo Cuyul, Marco Antonio Romero y el deponente. Fue en Chin Chin donde conoció a Carmelo Quinchen y a José Quintul, quienes estaban detenidos al igual que el deponente y eran originarios de la ciudad de Castro. Recuerda que en esa época, estaban ubicados en celdas, junto a unas quince o veinte personas, donde el alimento que les entregaban, era incomible y no contaban con atención médica ni asistencia de paramédicos. José Quintul, quedó muy afectado físicamente, sufría de afecciones al pecho y/o pulmón, acrecentado por la humedad, la nula atención médica y las torturas a las que había sido sometido en su trayecto hasta la cárcel de Chin Chin, los hacía pensar que podría tener tuberculosis, ya que la mayoría de las veces no era capaz de levantarse. Principalmente Carmelo Quinchen y Rodemil Cárdenas le ayudaban a hacer sus necesidades en la taza turca, pues no podía sostenerse. A veces lo examinaba el doctor Nofal Abud, que también estaba detenido. Cuando tenían la oportunidad de salir al patio, en días soleados, lo sacaban a la fuerza, tratando de que pudiera con esta acción, mejorar en algo su estado. Un día, José Quintul y Carmelo Quinchen fueron sacados de la cárcel de Chin Chin, en un primer momento pensó que habían quedado en libertad, pero luego de unos días se informó que habían sido trasladados hasta la cárcel de Castro. Una vez que fue dejado en libertad, se enteró de la muerte de José Quintul, quien falleció en Castro, debido a problemas pulmonares y las secuelas producto de las torturas a las que fue sometido. Eso es lo que pensaban, pero nunca supieron las causas directas de su muerte.

A.5 HÉCTOR ARNOLDO VARGAS GALLARDO (27 años a la fecha de los hechos, rut:5.141.928-6) quien declaró a fs. 113 a 114; (Tomo I) y a fs. 148 a 149; (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 22 de mayo de 2012, rolante de fs. 113 a 114; (Tomo I) comenta que relacionado con la detención de José Raúl Quintul Muñoz, no sabe nada, y esta persona no es conocida para el deponente, así como tampoco tomó conocimiento de su detención. De igual forma, no le correspondió participar en la detención de individuos determinada por razones ajenas a hechos delictuales. Hace presente que al igual que en todas las unidades de Carabineros, en la 2°comisaria de Castro, también funcionaba el SICAR, el cual estaba compuesto por alrededor de tres funcionarios, entre los que recuerda al suboficial Carlos Cifuentes Hernández, el cabo 1° José Aude Añazco y el Carabinero Alfredo Barría Cárcamo. De ellos, sabe que Aude reside en Castro, ignora su domicilio, entiende que esta retirado, cuando lo encontró estaba trabajando como guardia de seguridad de una pesquera, en las afueras de Castro, cuyo nombre ignora. Desconoce antecedentes de los restantes nombrados. Este grupo debía cumplir las órdenes de detención más delicadas y órdenes internas especiales de la jefatura, relacionadas con asuntos políticos. Con respecto a la consulta realizada, en esa época, 1973 en adelante, en la 2° comisaria de Castro había personas detenidas por hechos delictuales y otras que lo estaban por razones políticas, pero estas últimas eran trasladadas directamente a la Fiscalía Militar de Puerto Montt, generalmente en vehículos fiscales que fueron requisados después del 11 de septiembre. Para ese tiempo, la 2ª Comisaria de Castro tenía como destacamentos dependientes de las tenencias de Quellón, Chonchi, de la que dependían los retenes de Puqueldón y Queilén, además de Dalcahue de la que dependía el retén de Tenaún. Por último, señala que en esos días el deponente ostentaba el grado de Carabinero y se desempeñaba como conductor de los carros policiales de la segunda comisaria de Castro. Por esa razón, generalmente realizaba servicio de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, por lo que en este último lapso se mantenía ajeno a las actividades propias de su unidad. Además, trabajaba con las patrullas escolares de tránsito.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de mayo de 2011, rolante de fs. 148 a 149; (Tomo I) aquilata que en el año 1966, ingresó a Carabineros de Chile específicamente contratado en la prefectura de Ancud, siendo destinado en forma inmediata a la segunda comisaria de Castro, correspondiéndole realizar el curso de reclutamiento en la primera comisaria de

Osorno, siendo su primera destinación a fines del año 1967, en la misma segunda comisaria de Castro. Hace presente que permaneció alrededor de 13 años en la segunda comisaria de Castro, hasta el mes de marzo del año 1980, fecha en la cual solicitó su renuncia voluntaria a la institución. Con relación al hecho que se le consulta, que dice relación con la detención de una persona de nombre José Raúl Quintul Muñoz, manifiesta que esta persona no es conocida para él y así como tampoco tomó conocimiento de su detención. De igual forma no le correspondió participar en detenciones de personas ajenas a hechos delictuales. Hace presente que al igual que en todas las unidades de Carabineros, en la segunda comisaria de Castro, también funcionaba el SICAR, el cual estaba compuesto por alrededor de tres funcionarios, entre los que recuerda al suboficial Carlos Cifuentes Hernández, el cabo 1° José Aude Añazco y el carabinero Alfredo Barria Cárcamo. Es necesario precisar que este grupo estaba constituido para cumplir las órdenes de detenciones más delicadas y ordenes especiales de la jefatura. Con respecto a la consulta realizada, que dice relación con los detenidos, indica que para ese tiempo, en la segunda comisaria de Castro, existían detenidos por motivos delictuales y también por razones políticas, pero estos últimos eran trasladados directamente a la Fiscalía Militar de la ciudad de Puerto Montt. Para ese tiempo, la segunda comisaria de Castro, tenía como destacamentos dependientes las tenencias de Quellón, Chonchi de quien dependían los retenes de Puqueldón y Queilén, además de Dalcahue de quien dependía el retén de Tenaún. Finalmente, señala que para ese tiempo el deponente ostentaba el grado de Carabinero y su función era de conductor de la unidad, por ello generalmente realizaba servicio de 24 horas por 24 horas de descanso, además trabajaba con las patrullas escolares de tránsito.

A.6 JOSÉ HUMBERTO CÁRDENAS DÍAZ (33 años a la fecha de los hechos, rut: 4.379.315-2) quien declaró a fs. 115 a 116; (Tomo I) y a fs. 146 a 147; (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 22 de mayo de 2012, rolante de fs. 115 a 116; (Tomo I) ratifica en todas sus partes la declaración que prestó el día 20 de mayo de 2012, ante el sub comisario Oscar Garrido Castro, de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, de la Policía de Investigaciones de Chile. Y expone que ingresó a Carabineros de Chile en 1968, año en que hizo el curso en Osorno y cuando egresó fue destinado a la primera comisaria de Ancud y luego fue trasladado a la comisaria de Castro. No recuerda exactamente en cuál de estas unidades prestaba servicios para el año 1974. Con

relación al hecho por el cual se le consulta, esto es, la detención de José Raúl Quintul Muñoz, señala que no la conoce, ya que nunca tomó conocimiento de la detención de esta persona, así como tampoco le correspondió participar en detenciones de personas ajenas a hechos delictuales, como parecer ser el caso de este sujeto. En este sentido, durante el tiempo en que prestó servicios en la comisaria de Castro, solo le correspondió relacionarse con personas detenidas por motivos delictuales y en ningún caso por motivos políticos. Con respecto a la consulta, en la comisaria de Castro funcionaba una comisión civil, integrada por alrededor de cuatro funcionarios, que actuaban de forma independiente al personal de uniforme, y por lo general su misión consistía en recorrer los lugares nocturnos, fiscalizando el cumplimiento de la ley de alcoholes y para evitar la comisión de delitos. Le parece que en 1974 ostentaba el grado de cabo segundo y por eso los funcionarios subalternos de menor grado, como era su caso, los utilizaban para cumplir servicios de calles y no para realizar operativos o detenciones, en las cuales participaban solo oficiales y suboficiales antiguos.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de mayo de 2011, rolante de fs. 146 a 147; (Tomo I) barbulla que en el año 1968 ingresó a Carabineros de Chile específicamente fue contratado en la segunda comisaria de Castro, correspondiéndole realizar el curso de reclutamiento en la ciudad de Osorno. Con relación al hecho que se le consulta, que dice relación con la detención de una persona de nombre José Raúl Quintul Muñoz, señala que este nombre no le es conocido, ya que nunca tomó conocimiento de la detención de esta persona, así como tampoco le correspondió participar en detenciones de personas ajenos a los delictuales. Hace presente que durante todo el tiempo en que estuvo en la comisaria de Castro, solo le correspondió ver a personas detenidas por motivos delictuales y en ningún caso por motivos políticos. Con respecto a la consulta realizada, si en la comisaria de Castro, funcionaba una comisión civil de alrededor de 4 funcionarios, quienes actuaban de forma independiente al personal de uniforme y por lo general su misión consistía en recorrer los lugares nocturnos con la intención de realizar la fiscalización de la ley de alcoholes y evitar ocurrencia de delitos. Dice que sí. Finalmente, señala que para ese tiempo el deponente ostentaba el grado de cabo segundo, por ello, era de los funcionarios subalternos de menor grado, por lo tanto, solo los utilizaban para cumplir servicios de calle y no para realizar operativos o detenciones, en las cuales participaban solo oficiales y suboficiales antiguos.

A.7 MARÍA ANGÉLICA HUENCHUR HUENCHUR (12 años a la fecha de los hechos, rut: 9.520.204-7) quien declaró a fs. 141 a 143; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 21 de mayo de 2012, rolante de fs. 141 a 143; (Tomo I) comenta que es nieta de quien fuera en vida, José Alfredo Levicoy Levicoy, quien falleció el día 3 de octubre del año 1975, en circunstancias las que hasta ahora no están claras. A continuación relata las circunstancias en que su abuelo fue detenido y detalla circunstancias relativas a su aprehensión.

A.8 JUVENAL ALFREDO HERNÁNDEZ (29 años a la fecha de los hechos, rut: 4.900.540-7) quien declaró a fs. 287 a 288; (Tomo I) y a fs. 295 a 296; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 6 de diciembre de 2012, rolante de fs. 287 a 288; (Tomo I) aquilata que, para el 11 de septiembre del año 1973, el deponente se encontraba trabajando en el Hospital de Quellón, donde permaneció hasta el año 1975, fecha en la que se fue a Queilén, donde estuvo alrededor de un año. Luego de ese tiempo, fue exonerado por razones políticas, permaneciendo alrededor de diez años sin poder trabajar en el área pública, por ello se desempeñó como médico solo en el ámbito privado. Con respecto a la enfermedad y muerte de José Quintul Muñoz, hecho que se le consulta en este acto, señala que no recuerda al paciente que se le menciona, pero al tenor de los documentos que se le exhiben, indica que el paciente presentaba una enfermedad neurológica consistente en una paraplejia fláccida por sección medular transversal completa por aplastamiento de vertebral en D11 y de posible etiología neoplásica. Esto quiere decir que es probable que la persona pudiera haber sufrido una eventual lesión posterior a una patología preexistente lo cual eventualmente podría haber complicado el diagnostico. Es preciso señalar que es necesario correlacionar la presente información con la historia clínica del paciente, en la ciudad de Santiago, a fin de dilucidar el origen definitivo de la lesión. A la pregunta, el certificado que se le exhibe en el acto efectivamente fue extendido por el deponente y fue confeccionado con la intención de autorizar al paciente para que pudiera viajar a la ciudad de Santiago. Finalmente, señala que durante el tiempo en que estuvo trabajando en la Isla de Chiloé, recorrió muchos lugares de la zona, atendiendo a una gran cantidad de personas, incluidos a personas detenidas por razones políticas y lesionados en las huelgas y protestas.

En declaración judicial de fecha 9 de enero de 2013, rolante de fs. 295 a 296; (Tomo I) ratifica en todas sus partes la declaración que prestó ante el Comisario de la Policía de Investigaciones don Oscar Garrido Castro. Y agrega que, para el 11 de septiembre de 1973, se encontraba trabajando en el Hospital de Quellón, donde permaneció hasta 1975, fecha en la que se fue a Quellón, donde estuvo alrededor de un año. Luego de ese tiempo, fue exonerado por razones políticas, permaneciendo alrededor de diez años sin poder trabajar en el área pública y por esa razón se desempeñó como médico solo en el ámbito privado. Con relación a los hechos investigados, la verdad es que no recuerda las señas físicas de José Quintul Muñoz, y no podría describir como era y no lo recuerda como paciente. Reconoce haber extendido el certificado que se le exhibe; la descripción que hace respecto a su dolencia debe haberla obtenido seguramente porque en la ocasión le exhibieron antecedentes médicos. Presentaba una enfermedad neurológica consistente en una paraplejia flácida- parálisis de las extremidades inferiores- producida por una probable lesión medular que podría ser secundaria a un daño vertebral, si es neoplásica quiere decir que habría una eventual lesión cancerosa preexistente, o también pudo tratarse de una lesión traumática. Esto último le parece poco probable debido a lo que aparece señalado en el certificado, en que por la precisión del lenguaje tiene que haber tenido a la vista antecedentes médicos. Esto deberían ratificarlo familiares de esa persona y médicos que lo controlaban. La frase “sección medular transversa completa por aplastamiento de vertebral en D11 y de posible etiología neoplásica” no pudo haberla consignado por un simple examen físico sino como lo señaló, por los antecedentes que deben haberse exhibido. Esto quiere decir que es probable que la persona pudiera haber sufrido una eventual lesión posterior a una patología preexistente, lo cual eventualmente podría haber complicado el diagnóstico. En todo caso, es necesario correlacionar la presente información con la historia clínica del paciente, en la ciudad de Santiago, si es que recibió tratamiento allí, a fin de dilucidar el origen definitivo de la lesión. Puede si afirmar que, si hubiese sido eventualmente maltratado al haber estado detenido, esto último no determinó la causa de muerte. A la pregunta, dice que extendió el certificado que se le exhibe en el acto, y fue confeccionado con la intención de autorizar al paciente para que pudiera viajar a la ciudad de Santiago a fin de recibir atención médica.

A.9 JOSÉ LUCEDINO AUDE AÑAZCO (29 años en la época de los hechos, rut: 5.300.623-k) quien declaró a fs. 342 a 343; (Tomo I), a fs. 406 a 408; (Tomo I) y a fs. 533 a 533 vta; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 23 de febrero de 2013, rolante de fs. 342 a 343; (Tomo I) anima que ingresó a Carabineros de Chile el día 16 de junio del año 1965, siendo su primera destinación el grupo de instrucción Ancud, posteriormente salió egresado en el año 1966, fecha en la cual es destinado a la segunda comisaria de Castro, seguidamente y dando cumplimiento a los actos propicios del servicio le correspondió cumplir funciones en distintas unidades policiales dentro del territorio nacional, hasta que finalmente en el año 1993, se acoge a retiro voluntario cumpliendo funciones en la prefectura de Chiloé. Con respecto a los hechos por los cuales se le consulta, indica que no recuerda fecha exacta, cuando un día llegó el sargento Cifuentes y le ordena junto con Ulloa, que lo acompañaran a la población, para lo cual se trasladaron en un vehículo que conducía Ulloa, se fueron en dirección al sector alto de Castro, específicamente a Coiguinico, lugar en el cual se detuvieron a las afuera de una vivienda y descendieron los tres uniformados del carro policial. El sargento Cifuentes, recuerda que golpeo la puerta y lo atendió una mujer joven, a quien se le consultó por una persona de José Raúl Quintul Muñoz, no pudiendo escuchar cual fue su respuesta ya que el deponente se encontraba a metros de ellos, pero le parece mucho que dio indicaciones del lugar donde este señor se encontraba, por lo que procedieron a caminar unos metros e ingresaron en unos campos, en el cual dieron con esta persona que al parecer se encontraba trabajando la tierra. Inmediatamente el sargento Cifuentes, lo increpa diciéndole que le indicara donde estaban las armas, sin mayor resistencia el señor Quintul hizo entrega de un pequeño revolver que escondía dentro de los matorrales. Acto seguido, fue trasladado hasta la segunda comisaria de Castro, lugar donde permaneció en calidad de detenido por el delito de Porte de Arma, dando paso al trámite policial correspondiente. Con relación a lo que se le pregunta, es enfático en señalar que el señor Quintul Muñoz, jamás fue agredido o golpeado durante el tiempo que permaneció bajo su custodia. A la pregunta, indica que efectivamente fue integrante de la comisión civil de Carabineros de la segunda comisaria de Castro, sección que estaba a cargo de sargento Cifuentes, Ulloa y el deponente, su misión consistía en el control y obtención de antecedentes delictuales.

En declaración judicial de fecha 12 de marzo de 2014, rolante de fs. 406 a 408; (Tomo I) ratifica en todas sus partes la declaración que prestó ante

Funcionarios de la Policía de Investigaciones. Y evidencia que efectivamente ingresó a Carabineros de Chile el 16 de junio de 1965, e hizo el curso de instrucción correspondiente en Ancud, al egresar fue destinado a la segunda comisaria de Castro, unidad en la que prestó servicios hasta 1970, en que fue trasladado a la cuarta comisaria de Santiago; en 1971 fue trasladado a la cuarta comisaria de Melipilla. En 1972, con el grado de cabo segundo y 26 años de edad, fue trasladado a la segunda comisaria de Castro. El 15 de abril de 1967 contrajo matrimonio con Flor María Barría, con quien tuvieron cinco hijos, uno de ellos actualmente fallecido. En 1972, llegado a Castro, cumplió servicios policiales normales, tránsito, ley de alcoholes, etc. En las postrimerías del Gobierno de la unidad popular en Castro no había protestas ni marchas, sólo largas filas de personas ante locales comerciales, pues había escasez de bienes en general y alimentos. Para el 11 de septiembre de 1973 quedaron acuartelados, les asignaron el cuidado de la radio Chiloé y la Gobernación provincial. El jefe de la comisaria era el mayor comisario, Mario Torrealba Guerrero, que le parece que está fallecido; le seguía el capitán Ricardo Hernández Cáceres, el teniente Julio Lemaitre Sotomayor; los suboficiales eran Luis Aros Jaque, le parece que fallecido, Oscar Pacheco Garay, quien tiene la edad de 90 años y está postrado en cama, Carlos Cifuentes Hernández, que cree que vive en Temuco y no ha visto desde hace años. Poco tiempo después del 11 de septiembre de 1973 comenzó a llegar personal del Ejército, de la armada, no se sabía si iban de Puerto Montt o de Santiago, se quedaban debajo de la gobernación marítima; ellos, los funcionarios solo debían cumplir con puntos fijos. No recuerda la fecha exacta, por octubre o noviembre de 1973 pasó a integrar la comisión civil, eran solo tres; el jefe, sargento Carlos Cifuentes Hernández, el cabo primero Ulloa y el deponente. Dice que tenía unos 26 años, Cifuentes unos 30 años y Ulloa era mayor. Les correspondía fiscalizar el cumplimiento de la ley de alcoholes, hurtos, robos. A la pregunta, no controlaban ley de armas, a veces les ordenaban realizarlo, y es lo que ocurrió con el señor Quintul, a quien le ordenaron ir a detener en el sector Cohuinco, ubicado en la cordillera de la Isla de Chiloé, hacia el oeste. No recuerda la fecha exacta, si a fines de 1973 o en el transcurso de 1974, al sargento Cifuentes, seguramente el comisario, le dio la orden de ir a detener a José Quintul, por una denuncia de infracción de ley de armas, así es que fueron en su búsqueda. Como señaló a los policiales, recuerda que Cifuentes golpeó la puerta de su casa, lo atendió una mujer joven, la que le indicó donde se encontraba, estaba en un lugar retirado de la casa, trabajando en la tierra. El sargento

Cifuentes habló con él, hizo entrega de un revolver calibre 22, no sabe la marca, que tenía oculto bajo unos matorrales. A la pregunta, no sabe que explicación dio acerca de por qué tenía esa arma con él, ya que conversó solo con Cifuentes. Que recuerda el deponente no allanaron su casa. En ningún momento lo golpearon, pasó a la casa a buscar un documento, no sabe, lo trajeron a la comisaria y lo entregaron al oficial de guardia, confeccionaron el parte correspondiente y al día siguiente lo enviaron a Puerto Montt. El personal de uniforme de la comisaria hacia el traslado de detenidos, en el furgón de Carabineros. Estas misiones, como la que refiere, la cumplían vestidos de civil, portaban revólver de cargo fiscal, marca Colt, especial. El ruby extra 32, llegó después como arma de servicio. Atendiendo a su pregunta, al cuartel de la segunda comisaria, en la época posterior al 11 de septiembre de 1973 llegaron muchas personas detenidas, de Palena y otros lugares, en tránsito hacia Puerto Montt, donde como dijo, eran llevados por personal de la comisaria, en un furgón de Carabineros. Por lo general, el motivo de su detención era infracción a la ley sobre control de armas. Mientras permanecían en la unidad se les mantenía en una dependencia destinada a casino del personal, dormían allí, se les proporcionaba comida preparada por el personal. Se les permitía hacer uso de los 4 años que tiene todavía el casino. No se les proporcionaba ropa de abrigo porque no contaban con ella. Contestando a la pregunta, en el cuartel había una superficie de terreno de unos 12 metros por seis de ancho, que había funcionado como caballeriza, pero para septiembre de 1973 ya no tenía caballos. Nunca se condujo a ese lugar a personas detenidas, estaba pavimentado y ahí no quedaba nada que recordara que había sido caballeriza. Cuando funcionaba como tal había que llevar agua en balde. Como señala, y reitera, a las personas que detuvieron las entregaron en la guardia y se desligaban de ellas para dedicarse a otros menesteres. Respondiendo a la pregunta si respecto a si en alguna ocasión interrogaron a detenidos por las razones que señaló, es cierto que en algunas oportunidades llevaron a alguno a la caballeriza, entre Cifuentes y Ulloa, preguntaban uno a otro, mientras el otro oficial escribía; a veces se les golpeaba con palmazos en las orejas. De los detenidos que recuerda a uno de apellido Torres Vera, lo denunciaron que tenía un cajón con armamento, tuvieron todo un día trabajando con él, no dijo donde lo ocultaba, al final dijo que lo había botado a un río, fueron a ese río, no recuerda el nombre, quedaba en la cordillera, en el parque nacional, sector Cahuala, no encontraron nada. Como todos, lo remitieron a Puerto Montt. Los detenidos iban directo a Puerto Montt, no pasaban por Ancud. Con relación a las imputaciones que le

formulan personas que han prestado declaración, reconoce que estuvo presente en esos interrogatorios y que tuvieron lugar en el sector de la caballeriza, y efectivamente había allí un tambor petrolero lleno con agua y en él, en alguna ocasión el detenido fue sumergido por un periodo corto de tiempo. En cuanto al apelativo “corazón de escarcha”, corresponde al suboficial Honorio Oyarzún, pero él no trabajaba con el deponente y los demás funcionarios. No recuerda que Ulloa se hubiese fracturado una muñeca al golpear a alguien. De los detenidos a quienes sometieron al trato que ha referido solo recuerda al que mencionó, de apellidos Torres Vera. Tampoco recuerda haber participado en un falso fusilamiento; ese sector que se menciona, San Pedro; queda retirado de estas dependencias, camino al pacífico. Es efectivo lo que dicen esas personas en sus declaraciones; es efectivo lo ocurrido en la caballeriza del cuartel de la segunda comisaria de Carabineros de Castro, tal como esas personas afirman. La orden de detención la daba Cifuentes; llegaban personas a la comisaria, denunciaban a alguien y Cifuentes ordenaba que había que concurrir a tal o cual parte. No contaban con orden judicial alguna. Solo procedía obedeciendo la orden de su superior jerárquico. Traían a la persona así detenida y procedían a interrogarla de la manera que se indica en esas declaraciones. Pero no recuerda haber participado en un falso fusilamiento.

En declaración judicial de fecha 19 de noviembre de 2014, rolante de fs. 533 a 533 vta; (Tomo II) ampliando su declaración, con respecto a Raúl Quintul Muñoz, señala que aproximadamente en el año 1974, recuerda haber concurrido en compañía del suboficial Cifuentes y el cabo Ulloa; al sector rural Coihuinco, dentro de la jurisdicción de Castro, con la finalidad de ubicar y detener a Raúl Quintul, debido a que el suboficial Cifuentes, decía que esta persona debía entregar unas armas que supuestamente tenía en su poder. Una vez que llegaron a su domicilio, preguntaron por el señor Quintul a la persona que los atendió, diciéndole que no se encontraba en la casa, indicándoles que estaba trabajando en el campo y les dio las señas donde se encontraba. Conforme a lo anterior, se trasladaron a ese lugar, donde lo vieron a la distancia y lo llamaron que se acercara donde se encontraban. Al llegar Quintul, el suboficial Cifuentes le preguntó por las armas que supuestamente tenía, diciendo esta persona que solo tenía un revolver, por ello los condujo hasta un sector del mismo campo, donde detrás de unos arbustos, tenía oculto un revolver Argentino, calibre 22, el cual entregó en ese momento y conforme a ello, fue detenido y trasladado hasta la segunda comisaria de Castro, a fin de ser puesto a disposición de la Fiscalía

Militar en Puerto Montt. Una vez que llegaron a la comisaria de Castro, nuevamente se interrogó a Quintul, esta vez al interior de la unidad policial, en las dependencias destinadas a casino, donde se ubicó al detenido sentado en una silla y se le preguntó insistentemente por las otras armas de fuego que supuestamente conforme a la información que tenía el suboficial Cifuentes, el señor Quintul mantenía en su poder, pero no obstante a los golpes, “palmetazos” con la mano abierta que le daban a Quintul, no entregó ninguna otra arma de fuego, por ello se siguió el procedimiento normal. La totalidad de las diligencias policiales que realizaban como comisión civil, se realizaban bajo las órdenes del comisario de la unidad, mayor Claudio Calderón Moraga y el subcomisario, el capitán Hernán Escobar Inostroza. Una vez que regresaron a la comisaria, le informaron de las novedades existentes, ósea si se había dado cumplimiento a lo ordenado y si se tuvo resultado positivo, este informe lo daba directamente el suboficial Cifuentes, quien era el funcionario más antiguo y se entendía directamente con la jefatura. Recuerda a Raúl Quintul, como una persona que medía 1,65 de estatura, tenía unos 30 a 35 años de edad, contextura delgada, pelo negro y corto. A la pregunta, en orden a si fue sometido a malos tratos o apremios ilegítimos, a parte de los palmetazos que mencionó, su respuesta es negativa. Por lo demás, a Quintul lo detuvieron alrededor del mediodía y al día siguiente en la mañana fue trasladado a Puerto Montt en vehículo de Carabineros, y pasó la noche dentro del cuartel.

A.10 HÉCTOR GALLARDO PAREDES (37 años a la fecha de los hechos, rut: 3.672.398-K) quien declaró a fs. 346 a 347; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 23 de febrero de 2013, rolante de fs. 346 a 347; (Tomo I) atina que en el año 1960, ingresó a Carabineros de Chile, específicamente se contrató en la primera comisaria de Puerto Varas, correspondiéndole realizar el curso de formación en la ciudad de Temuco, regresando a la misma unidad, prestando funciones en las siguientes unidades, el retén de Llanquihue, segunda comisaria de Puerto Montt, el retén Horno pirén, primera comisaria de Angol, primera comisaria de Ancud, segunda comisaria de Castro, cuarta comisaria de Chaitén, finalizando su carrera en el mes de febrero del año 1985, en la primera comisaria de Angol. Con relación a los hechos que se le consultan y como señaló anteriormente, en el año 1974, se encontraba prestando servicios en la segunda comisaria de Castro, ostentaba el grado de cabo primero y recuerda que sus funciones eran de chofer de un furgón

policial, además de realizar servicios de guardia en la misma unidad. Hace presente que los Carabineros de uniforme, continuaron cumpliendo las labores policiales habituales, inclusive se detenían personas por toque de queda, pero recuerda que nunca le correspondió realizar alguna diligencia o detención de personas por razones políticas. A la pregunta, no se desempeñó en los destacamentos dependientes de la comisaria de Castro. A la consulta, recuerda que al parecer existía personal de Carabineros de Castro, que vestía de Civil, pero no recuerda sus nombres, siendo probable que haya existido una comisión civil. A la pregunta, no le correspondió ver a personas detenidas por razones políticas, al interior de la segunda comisaria de Castro. A la consulta, el sector de Coihuinco queda desde Castro al sur y quizás sea jurisdicción del retén de Chonchi o del retén de Quellón. A la consulta, relativa por la persona de nombre José Raúl Quintul Muñoz, no la conoce, ni mantiene antecedentes sobre lo que le pudo haber pasado.

A.11 DOMINGO ÁLVAREZ CÁRDENAS (46 años a la fecha de los hechos, rut: 2.560.497-0) quien declaró a fs. 411 a 412; (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2014, rolante de fs. 411 a 412; (Tomo I) aduce que cuando joven trabajó en la compañía de aceros del pacifico, en Magallanes. Con el dinero que reunió se compró el campo en el cual vive actualmente. En la época del gobierno de la unidad popular era presidente del Consejo Comunal campesino y dirigente comunal del Partido Socialista, ayudaba a la gente pobre ante la escasez de bienes y el mercado negro. Cree que por esa actividad que realizaba, además de la agricultura, en 1974 fue detenido y recluido en el centro de readaptación social de la ciudad de Puerto Montt el 6 de junio del año 1974 al 16 de octubre del mismo año, por disposición de la primera Fiscalía Militar. Fue detenido en Chonchi, pueblo al que se dirigió para comprar terrenos, en compañía de Segundo Huenchuman, quien aún vive y reside en Rauco, específicamente al lado de la pesquera Camanchaca. Andaban a caballo y fue detenido por Carabineros de Castro que vestían de civil y que identifica como de apellidos Cifuentes, Ulloa y Aude, quienes lo trasladaron hasta la segunda comisaria de Carabineros de Castro, allí fue interrogado por ellos en un patio del cuartel, donde había tambores con agua descompuesta en los cuales fue sumergido en varias ocasiones durante la noche por el Carabinero Aude. Al día siguiente, en un camión lo llevaron a su casa y revolvieron todo en busca de armas. Desde luego, no le mostraron ninguna orden. Dice que tenía un

revolver de esos conocidos como “mata gatos” que le había regalado su hermano Armando que vivía y trabajaba en Argentina y le llevo ese regalo. Les entregó el arma que era un revolver chico y por esto fue condenado después a 540 días de presidio. Cree que estuvo detenido como ocho días en Castro y luego fue trasladado a Puerto Montt junto con Raúl Andrade, Berny Aros y Noé Cárdenas; Como consecuencia de los malos tratos inferidos por los Carabineros de la comisión civil de la segunda comisaria de Castro quedó con secuelas, pérdida de la audición debido a los golpes recibidos, dolores musculares a los huesos. Posteriormente narra hechos en el año 1973 en la Segunda Comisaria de Castro. Con relación a la pregunta, si conoció a José Quintul Muñoz cuando estuvieron en la cárcel de Chin Chin. Dice que a él también lo torturaron mucho y se encontraba en muy malas condiciones, cuando salió él quedó todavía allí y cuando estuvo en libertad murió al poco tiempo después. Siempre con relación a lo que se le pregunta, conoció al diputado Luis Espinoza de Castro, quien también estuvo detenido en la ciudad de Puerto Montt, dicen que le habían sacado las uñas y que caminaba de rodillas, siendo posteriormente fusilado.

A.12 ÁNGEL ANDRADE OYARZÚN (34 años a la fecha de los hechos, rut: 4.512.869-5) quien declaró a fs. 421 a 422; (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2014, rolante de fs. 421 a 422; (Tomo I) declara que para septiembre de 1973 era comerciante establecido en Chonchi, también era actuario del juzgado de la subdelegación, militaba en el Partido Socialista, tenía 34 años y se encontraba soltero. El 6 de junio de 1974 fue detenido, por Carabineros de la comisión civil de la segunda comisaria de Castro, que vestían de civil, el deponente ubicaba a uno de ellos, de apellido Aude. Lo sacaron del negocio, ubicado en calle Centenario N°101. No le exhibieron ninguna orden, tampoco le explicaron el motivo de la detención. Lo condujeron en la parte posterior de un camión de vialidad, con las manos atadas a la espalda. Aude iba con el deponente y le apuntaba con un arma de puño, que no distingue si era pistola o revolver, hasta dependencias de la segunda comisaria de Carabineros. Una vez allí lo llevaron hasta la caballeriza. Estaba solo, hacia excrementos. Era un lugar techado, de unos 5 por seis metros, ubicado en la parte posterior a la Comisaría. Después de un tiempo lo sacaron, le pusieron delante de un jeep con los faros encendidos y lo golpearon con golpes de puño en todo el cuerpo. Permaneció allí dos o tres días, tiempo en el cual se juntaron con otros detenidos, Domingo Álvarez, Noé Cárdenas, Berner Aros, estos dos últimos viven

en Canaan, muy cerca el uno del otro. Todos detenidos por la comisión civil de la segunda comisaría, integrada por los Carabineros que ha nombrado, no sabe si les aplicaron el mismo trato que al deponente, puede haber sido diferente, ya que Domingo Álvarez le contó que lo habían sumergido en varias ocasiones en un tambor con excrementos. Los mantenían a todos separados. Después de unos días, como dijo, lo llevaron junto con alguno de ellos a Puerto Montt, en un jeep que si no se equivoca era rojo. Continúa narrando lo ocurrido allí. Con relación a la pregunta, más le suena el nombre de José Quintul Muñoz, pero no lo recuerda.

A.13 MARCO ANTONIO ROMERO ARIAS (30 años a la fecha de los hechos, rut: 4.978.641-7) quien declaró a fs. 486 a 487; (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 21 de marzo de 2013, rolante de fs. 486 a 487; (Tomo I) espeta que para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba trabajando en el servicio de prisiones, llamada actualmente Gendarmería de Chile y se llamaba Cárcel de Castro y se ubicaba a 4 kilómetros y medio de la ciudad de Castro hacia el norte, en el sector llamado Ten Ten. Se desempeñaba como oficial administrativo en la estadística de la cárcel. En cuanto a lo que se le pregunta, debe decir que conoció a Mario Enrique Contreras Vega, persona muy conocida con su vínculo con los empleados particulares y la cámara de comercio; además él era poeta. Tenía un programa en la radio, que salía al aire tres veces a la semana. Fue varias veces detenido, como muchas otras personas, por no decir muchas personas. Se lo dejaba en libertad, lo detenían, luego de un par de días lo volvían a detener. Era una forma de hostigamiento. Sabe que los carabineros, sargento primero Cifuentes y cabo José Aude y un carabinero de apellido Ulloa. Contreras pertenecía al partido Comunista. Dice que fue detenido a fines de la primera de la primera mitad del mes de marzo en la ciudad de Castro, agrega que fue exonerado de prisiones a fines de septiembre de 1973. Fue detenido por Carabineros de Castro y trasladado a Puerto Montt. Continúa narrando hechos ocurridos en Puerto Montt.

A.14 JAIME ALFONSO MORAGA ZAMORANO (30 años a la fecha de los hechos) quien declaró a fs. 488 a 490; (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 20 de marzo de 2013, rolante de fs. 488 a 490; (Tomo I) estima que desde marzo del año 1974 a 1976 no recuerda fecha exacta estuvo a disposición de la Fiscalía Militar en tiempos de guerra de

Puerto Montt, permaneciendo 4 meses incomunicado en el cuartel de investigaciones de Puerto Montt y el resto del tiempo de su detención en el presidio de Chin Chin de Puerto Montt. Continúa narrando sucesos de su detención en investigaciones. En cuanto a los agresores señala que le ha sorprendido encontrarse en vía pública en las ciudades de Castro a varios de los ex funcionarios de Carabineros que ha mencionado don Mario Contreras, tales como el señor Aude, Cifuentes y otro de apellido Ulloa que desempeñaban exclusividad de detenciones en la ciudad de Castro, también ha visto circulando en la ciudad de Ancud displicentemente a el ex suboficial Ulloa.

A.15 WERNE VÍCTOR HARO OYARZÚN (21 años a la época de los hechos, rut: 7.212.199-6) quien declaró a fs. 520 a 522; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 6 de septiembre de 2014, rolante de fs. 520 a 522; (Tomo II). Comienza relatando las circunstancias de su detención y como fue llevado hasta la comisaria de Carabineros de Castro. Una vez en ese lugar, fueron llevados por los pasillos interiores, donde luego de sacarles sus pertenencias personales, cinturones y cordones, los llevaron a unas caballerizas ubicadas en la parte trasera de la comisaria, donde al interior de ese lugar, donde se notaba que habían mantenido caballos, se ubicaba una especie de calabozo de madera, donde fueron ingresados junto a su primo, pero sin poder tener ningún contacto. Más tarde, ese mismo día, en horas de la noche, fue sacado del calabozo y amarrado a un poste de pies y manos, para luego ser golpeado salvajemente con golpes de pies y puños, en diversas partes del cuerpo, sin que nada se le preguntara. Esto duró aproximadamente unos 20 minutos, para luego ser ingresado al calabozo. Luego de un par de horas, fue nuevamente sacado del calabozo y maniatado de pies y manos, siendo arrojado al interior de un estanque de concreto con agua, donde se les daba a los caballos, en ese momento estuvo un lapso de tiempo sumergido, hasta cuando ya se estaba ahogando, fue sacado y luego lo tiraron al calabozo. Posteriormente, hubo una tercera salida del calabozo, nuevamente arrojado maniatado de pies y manos, al interior de un estanque de concreto con agua, pero esta vez perdió el conocimiento, despertando completamente mojado al interior del calabozo y con las muñecas sangrando, ya que fueron amarrados con “pitas” de nylon, las cuales al hacer fuerza cuando se ahogaban, estas cortaban la piel enterrándose en la carne. Seguidamente, luego de alrededor de cuatro días, a eso de las cinco de la madrugada, fue subido junto a los detenidos Noé Cárdenas, Raúl Andrade y

Domingo Álvarez, al jeep color verde, llegando a la Fiscalía Militar y luego fueron derivados a la cárcel de Chin Chin. Continúa relatando su paso por Puerto Montt, cuarte de Investigaciones y cárcel de Chin Chin. A la consulta, si pudo identificar a las personas que lo detuvieron y torturaron, señala que efectivamente, ya que en ese tiempo su hermana Yolanda Haro, convivía con Aurelio Aude, quien era padre del Carabinero José Aude, uno de los funcionarios que lo detuvo y torturó, al igual que los carabineros Cifuentes y Ulloa, nombres que le entregó don Aurelio Aude, una vez que fue dejado en libertad.

A.16 NOÉ ALEJANDRO CÁRDENAS ALVARADO (32 años a la fecha de los hechos, rut: 4.648.491-6) quien declaró a fs. 523 a 524; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 6 de septiembre de 2014, rolante de fs. 523 a 524; (Tomo II) estima que el día 4 de junio del año 1974, alrededor de las 09:30 horas, en circunstancias en que se encontraba en su casa, realizando las labores habituales y acompañando a sus hijos donde la mayor, tenía seis años de edad, llegó hasta su domicilio, un jeep rumano de color amarillo, que era de propiedad en ese tiempo de Indap, pero venía con personal de Carabineros del Sicar, que era un organismo de inteligencia de Carabineros. Recuerda que en ese tiempo, llegaron hasta su hogar los funcionarios de apellidos Cifuentes, Ulloa, Aude y un cuarto que era de Ancud, de quien no recuerda. Quienes iban de civil y empuñaban metralletas. En ese momento, salió a recibirlos y para saber que deseaban, momento en el cual el Carabinero Cifuentes, le respondió con groserías y que lo iban a llevar detenido por marxista y comunista, de forma inmediata le esposaron las manos atrás, lo amordazaron y sin poder volver a ingresar a su hogar, lo llevaron en el mismo vehículo que habían llegado, en dirección a Castro. Una vez que llegaron a la ciudad de Castro, se dirigieron directamente a la Comisaria de Carabineros de esa ciudad, donde ingresaron a los calabozos que eran alrededor de cuatro. Más tarde, alrededor de las 21 horas, recuerda que lo sacaron esposado con las manos atrás y con cadenas en los pies, para luego sacarlo al patio e ingresarlo a las caballerizas, donde había en la tierra dos pozos llenos de excremento animal. En ese momento, lo sentaron solo en una silla con las manos atrás y luego los carabineros Cifuentes y Ulloa comenzaron a preguntarle por el plan z y donde estaban las armas, en ese momento, les respondió que no tenía armas, que eran gente buena y de trabajo y no necesitaban tener ninguna arma, Cifuentes lo golpeo posteriormente con la culata de su fusil, a la vez que Ulloa, que era más grande de estatura, lo agredía con

golpes de puño en el abdomen, esta sesión duró alrededor de seis a siete horas y luego lo regresaron al calabozo. Debe hacer presente que, en esa ocasión, en el mismo calabozo, se encontraban también detenidos Raúl Andrade, Domingo Álvarez y Berny Aros. Posteriormente, luego de alrededor de cuatro días, a eso de las cinco de la madrugada, fue subido junto a otros detenidos al jeep color amarillo, llegando a la cárcel de Chin Chin, aproximadamente a las 09:30 horas de la mañana, donde fueron entregados a personal de gendarmería, quedando detenidos en ese recinto penal. A la pregunta realizada, señala que estuvieron privado de libertad, junto a sus amigos, alrededor de siete meses, deambulando por diversos sectores de la cárcel de Chin Chin, como lo era el patio del agua, la celda de castigo, la celda de la oscuridad y finalmente el cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, donde permanecieron alrededor de seis días.

A.17 HERNÁN ESCOBAR INOSTROZA (34 años a la fecha de los hechos, rut: 4.195.195-8) quien declaró a fs. 530 a 531; (Tomo II), a fs. 736 a 737; (Tomo II).

En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2014, rolante de fs. 530 a 531; (Tomo II). Comienza realizando un resumen de su historia en la institución de Carabineros. Continúa haciendo referencia a lo ocurrido posterior al 11 de septiembre de 1973. A comienzos de 1974 se trasladó a la segunda comisaria de Castro, como subcomisario y grado de capitán. Que recuerde, no funcionaba la comisión civil, no se justificaba y no había tantos Carabineros como para destinarlos a otras labores que no fueran las de orden y seguridad. No recuerda la calle en que estaba ubicada la comisaria, ni al sargento Cifuentes que se le menciona; solo recuerda de un suboficial de apellido Andrade, porque tenía un hijo que era tecnólogo médico y vive en Los Lagos, pertenece como el deponente al Club de Leones. Funcionaba una Fiscalía Militar en Castro, en que el comisario era el Fiscal y el deponente el secretario. La parte política la veía directamente el Servicio de Inteligencia de Puerto Montt. Este tenía su personal que se ocupaba de la detención de personas. Nunca vio que se torturara a alguien en el patio de la comisaria. A la pregunta, en orden a describir la unidad, a mano izquierda estaba la entrada de vehículo, contaban solo con un furgón; no había vehículos requisados. En el fondo del patio estaba la caballeriza, que funcionó como tal cuando tenían caballos, compuesta de una parte central y las naves para cada caballo. Para la época en que estuvo ya no había caballos. Permaneció en esa unidad hasta mediados de 1975, en que fue trasladado a

Santiago, la primera comisaria de Renca, de la prefectura rural. En cuanto a la pregunta, el mayor Torrealba fue reemplazado por el mayor Calderón; y el capitán Hernández, reemplazado por el capitán Escobar. Así, en su primer año estaba el mayor Claudio Calderón Moraga; el teniente Julio Lemaitre Sotomayor y tres tenientes a cargo de las tenencias de Quellón, Dalcahue y Chonchi. Ante la reiteración de la pregunta, no le consta que haya funcionado comisión civil en la segunda comisaria, ni que haya nominado funcionarios para integrarla.

En declaración judicial de fecha 4 de diciembre de 2019, rolante de fs. 736 a 737; (Tomo II) ratifica íntegramente la declaración prestada anteriormente rolante de fs. 530. Se procede a leer la declaración del testigo Carlos Ulises Cifuentes Hernández de fs. 534 y siguientes. El deponente señala que no es tan así porque los procedimientos se recogían y dejaban constancia en el libro de población y ahí se adoptaba el procedimiento que correspondía, y los demás eran constancias. Lo que dice el Carabinero no es completamente efectivo, no siempre le daban cuenta, solo si era algo trascendente. El libro de población uno como subcomisario tenía que leerlo todos los días. Se comunicaba al comisario cuando se trataba de un hecho de importancia para disponer lo que le sea pertinente, por ejemplo si era durante el día no había problema, si es durante la noche y si tenía importancia se le comunicaba al comisario. Se procede a leer en lo pertinente la declaración del testigo José Lucedino Aude Añazco, de fs. 533 y siguientes. El deponente señala que de acuerdo a lo que dice Cifuentes era lo mismo, se remite a lo que dijo anteriormente se acuerda a como se tomaban los procedimientos. Tenía 6 funciones extras en esa época, pasaba poco tiempo en la oficina como para que le informaran todo. No recuerda que haya existido una comisión civil, ellos no hacían labores respecto de la política, la jefatura era de Llanquihue, ellos tenían su personal que hacían las diligencias. Ellos, los funcionarios tenían labor policial preventiva, puntos fijos en gobernación, intendencia, tribunales, para evitar atentados en la noche los robos, también control de tránsito en lo cotidiano. Se procede a leer la declaración del testigo Luis Diógenes Ulloa Bahamondes en lo pertinente de fs. 535. El deponente señala que no existía una comisión civil, en algún momento se podría salir para controlar la ley de alcoholes, o investigación por abigeato, para esas cosas si había comisión civil porque son procedimiento que se prolongan en el espacio y el personal no lo podía hacer todo durante el turno. Con respecto al suceso de José Quintul detenido en marzo de 1974 no recuerda el suceso, no le suena para nada. Finalmente, el tribunal le exhibe el parte número 22, donde se pone a disposición

de la Fiscalía Militar de Puerto Montt a José Quintul y José Quinchen, rolante de fs. 2 y 3 del expediente 97/74 de la Fiscalía Militar de Puerto Montt. El deponente señala que reconoce su firma estampada en el documento que se le exhibe en el acto. No recuerda el parte ni el procedimiento, porque uno llegaba y firmaba, tenía que firmar toda la documentación de la unidad, era un procedimiento habitual, uno verifica que el parte haya estado escrito en el libro y firma.

A.18 GLORIA IRIS QUINTUL MUÑOZ (23 años a la fecha de los hechos, Rut: 7.144.329-9) quien declaró a fs. 675 a 676; (Tomo II) y a fs. 764; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 27 de junio de 2019, rolante de fs. 675 a 676; (Tomo II) atina que, en el año 1974, tenía la edad de 23 años y vivía junto a sus padres de nombres Eliseo Quintul Quintul y Rosa Muñoz Hernández, ambos actualmente fallecidos y su hermano José Raúl, en el mismo inmueble donde reside actualmente. Hace presente que son 7 hermanos. Para el año 1974, su hermano José Raúl, tenía la edad de 31 años y trabajaba cortando madera en un aserradero de Coihuinco, debiendo agregar que era simpatizante del Partido Socialista, no teniendo certeza si se encontraba inscrito en dicho partido. Para la fecha de su detención, ocurrida en mayo de 1974, no recuerda día exacto, había ido con su padre a Castro a efectuar unas compras y al regresar a la casa en horas de la tarde, su madre les comenta que José Raúl, había sido detenido por Carabineros, por lo que, al día siguiente, fueron a la comisaria, y les informan que había sido llevada a la Comisaria de Ancud, enterándose a los días siguientes que su hermano se encontraba recluido en la cárcel de Chin Chin de Puerto Montt. A consecuencia de lo anterior, viajaron a Puerto Montt y cada 15 días, lo iban a visitar a la cárcel Chin Chin y en los tiempos que tuvo para conversar con él, le comentó que lo habían acusado de guerrillero y por tenencia de armas, refiriéndose además que había sido sometido a duras torturas en la Comisaria de Carabineros de Ancud y Puerto Montt. Su hermano, se veía físicamente mal y se comunicaba con mucho dolor, siendo muy pocas las palabras que podía expresar. Posteriormente, su hermano José Raúl, fue trasladado desde la cárcel Chin Chin a la cárcel Ten Ten de Castro, recinto donde permaneció cerca de un año, para luego obtener el beneficio de la reclusión nocturna. Cuando su hermano sale en libertad y comienza a pernoctar en la cárcel Ten Ten, recuerda que él comenzó a presentar problemas en la columna y otros malestares en el cuerpo en el transcurso de los días, lo que significó que no podía trabajar en

labores ejerciendo fuerza. Posteriormente, su estado de salud se fue agravando y fue llevado a diferentes médicos de Puerto Montt, los cuales le manifestaron que debido a la gravedad de su diagnóstico, les recomendaron que lo llevaran a Santiago, donde existía tecnología más avanzada para su recuperación. Recuerda que su hermano fue llevado a Santiago y durante su permanencia en dicha ciudad quedó parapléjico, por lo que regresó a Castro y su estado de salud fue empeorando, falleciendo finalmente el 16 de mayo de 1979, producto de una hemorragia. Con respecto a la consulta, manifiesta que durante el periodo que su hermano estuvo privado de libertad en las cárceles de Chin Chin de Puerto Montt y Ten Ten de Castro, como también durante el tiempo que permaneció con vida después de quedar en libertad, nunca señaló identidades de los Carabineros que lo detuvieron, como tampoco de sus torturadores, haciendo solo referencia a los malos tratos y apremios a los cuales fue sometido.

En declaración judicial de fecha 3 de enero de 2019, rolante de fs. 764; (Tomo II) ratifica en todas sus partes la declaración extrajudicial de fecha 26 de junio de 2019, prestada ante la Policía de Investigaciones de la ciudad de Castro. A la pregunta N°1 ¿de qué Comisaría eran los Carabineros que detuvieron a Raúl? responde que, de Castro. A la pregunta N°2 ¿Supo las identidades de quienes detuvieron a Raúl? Responde que no. A la pregunta N°3 ¿Raúl Contó si sufrió algún tipo de apremio? ¿En qué lugar se llevaron a cabo esos apremios (Comisaría o cárcel?, responde que los apremios fueron en la Comisaria de Ancud y en la Cárcel de Chin Chin de Puerto Montt, eso fue lo que le dijo su hermano Raúl, no refiriéndose a otras cosas. A la pregunta N°4 ¿anterior a su detención, Raúl sufría dolores o tenía algún tipo de enfermedad que le dificultara caminar o hacer su vida con normalidad?, responde que anteriormente a la detención su hermano Raúl, no sufría de ningún tipo de enfermedad, trabajaba normalmente, cortando leña con motosierra, además de trabajar en la agricultura y su vida era normal como cualquier ciudadano. A la pregunta N°5 ¿Raúl había sido buscado anteriormente por carabineros o militares?, responde que es efectivo, Carabineros y no lo encontraron porque andaban trabajando lejos de la casa en la montaña. A la pregunta N°5 ¿conoció a los carabineros Carlos Cifuentes, José Aude, Luis Ulloa y Hernán Escobar? responde que nunca los conoció.

A.19 JOSÉ OCTAVIO QUINTUL MUÑOZ (35 años a la fecha de los hechos, Rut: 4.275.153-7) quien declaró a fs. 679 a 680; (Tomo II) y a fs. 765; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 26 de junio de 2019, rolante de fs. 679 a 680; (Tomo II) habla que para el año 1974, tenía la edad de 35 años, se encontraba casado y vivía donde reside actualmente. Su hermano José Raúl, vivía junto a sus padres, en el mismo sector La Chacra. Hace presente que son 7 hermanos, pero tres se encuentran fallecidos. Para el año 1974, su hermano José Raúl, tenía la edad de 31 años y trabajaba cortando madera en un aserradero de Coihuinco, debiendo agregar que era militante del Partido Socialista. Para la fecha de su detención, ocurrida al parecer en el mes de mayo de 1974, se encontraba trabajando en el campo de La Chacra, enterándose por intermedio de vecinos que su hermano José Raúl había sido detenido por funcionarios de Carabineros de Castro. Recuerda que sus padres y su hermana Gloria, concurrieron al día siguiente a la comisaria, lugar donde les informaron que José Raúl había sido llevado a la Comisaria de Ancud. Recuerda que en su caso, continuo trabajando en el campo, pero no tiene claro si fue a los días o semanas posteriores, fue detenido por personal de Carabineros de Castro, entre ellos uno de apellido Aude y otro de apellido Cifuentes, quienes lo encontraron un revolver en el patio de la casa, por lo que lo llevaron hasta la comisaria y luego lo trasladaron a la cárcel pública de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt, recinto carcelario donde se encuentra con su hermano José Raúl, a quien pudo observar que se encontraba en malas condiciones físicas, logrando conversar con él en varias oportunidades, manifestándole que había sido golpeado duramente durante los interrogatorios a los cuales fue sometido, no entregándole mayores detalles al respecto, ya que no estaba bien de salud. En la cárcel de Chin Chin, estuvo cuatro meses, para luego quedar en libertad, quedando su hermano José Raúl en dicho recinto, pero posteriormente fue trasladado a la cárcel Ten Ten de Castro, recinto donde permaneció cerca de un año, para luego obtener el beneficio de la reclusión nocturna. Cuando su hermano sale en libertad y comienza a dormir en las noches en la cárcel Ten Ten, recuerda que él comenzó a presentar problemas severos en la columna y otras dolencias en el cuerpo en el transcurso de los días, lo que significó que no podía efectuar trabajos de fuerza. Posteriormente, su estado de salud se fue agravando y fue llevado a diferentes médicos de Puerto Montt, los cuales le manifestaron que debido a la gravedad de su diagnóstico le recomendaron que lo llevara a Santiago donde existía tecnología más avanzada

para su recuperación. Recuerda que su hermano fue llevado a Santiago y durante su permanencia en dicha ciudad quedó parapléjico, por lo que regresa a Castro y su estado de salud fue empeorando, falleciendo finalmente el 16 de mayo de 1979, producto de una hemorragia. Con respecto a la consulta realizada, manifiesta que durante el periodo que su hermano estuvo privado de libertad en las cárceles de Chin Chin de Puerto Montt y Ten Ten de Castro, como también durante el tiempo que permaneció con vida después de quedar en libertad, nunca señaló identidades de los Carabineros que lo detuvieron, como tampoco de sus torturadores, haciendo solo referencia a los malos tratos, torturas y apremios a los cuales fue sometido durante los interrogatorios.

En declaración judicial de fecha 3 de enero de 2020, rolante de fs. 765; (Tomo II) ratifica en todas sus partes la declaración extrajudicial de fecha 26 de junio de 2019, prestada ante la Policía de Investigaciones de la ciudad de Castro. A la pregunta realizada, con respecto de que comisaria eran los Carabineros que detuvieron a Raúl, responde que no lo recuerda. A la pregunta de si supo las identidades de quienes detuvieron a Raúl, responde que no lo supo. A la pregunta de si Raúl le contó si sufrió algún tipo de apremio, responde que si, los Carabineros que lo detuvieron en Castro. A la pregunta de si anterior a su detención, Raúl sufría dolor o tenía algún tipo de enfermedad que le dificultara caminar o hacer su vida con normalidad, responde que no, anteriormente a su detención Raúl no sufría ningún tipo de enfermedad y su vida lo realizaba en forma normal trabajando en el campo, cortando leña y trabajando en la agricultura en el campo. A la pregunta realizada, sobre si Raúl había sido buscado anteriormente por Carabineros o militares, responde que, si fue buscando anteriormente, pero no lo encontraron. Y a la pregunta realizada, sobre si conoció a los carabineros Carlos Cifuentes, José Aude, Luis Ulloa y Hernán Escobar, el deponente responde que, si conoció a Carlos Cifuentes y José Aude, a los otros no.

B. DOCUMENTOS:

- | | |
|---|---|
| 1.Certificado de defunción de José Quintul Muñoz | 14. Nómina con personas reclusas en la cárcel de Chin Chin. |
| 2. Informe del Programa Continuación Ley 19.123 | 15. Informe del Servicio Médico Legal |
| 3.Informe de la Fundación Documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad | 16. Informe del Instituto de neurocirugía Asenjo |
| | 17. Informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile |

- | | |
|---|---|
| 4. Informe de Carabineros de Chile | 18. Copia simple de relación de causas con personal que integraron los consejos de guerra años 1973 y 1974 |
| 5. Informe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile | 19. Copia simple de decreto que convoca a consejo de guerra |
| 6. Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación | 20. Informe de la Comandancia en jefe de la Fuerza Aérea de Chile |
| 7. Informe del Hospital de Puerto Montt | 21. Copia de antecedente clínicos de José Quintul Muñoz |
| 8. Informe del Hospital de Castro | 22. Copia autorizada de sentencia de primera instancia rol 54.035. |
| 9. Informe del Centro de detención preventiva de Castro | 23. Copia autorizada de sentencia de segunda instancia rol 54.035 |
| 10. Extracto de filiación y antecedentes de José Raúl Quintul Muñoz | 24. Ordenes de investigar diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile |
| 11. Informe del Tercer Juzgado Militar de Valdivia | |
| 12. Copia del informe del Director regional de Gendarmería de Chile | |
| 13. Informe del Director Regional de Gendarmería de Chile Región de Los Lagos | |

B.1. Certificado de defunción de: José Raúl Quintul Muñoz, de fs. 5, de fs. 107 (Tomo I). Donde se consigna como fecha de defunción el 16 de mayo de 1979 las 13:15 horas, en el Hospital de Castro, como causa de muerte, infarto miocardio, insuficiencia cardiaca descompensada.

B.2. Informe del Programa Continuación Ley 19.123 enviando antecedentes que poseen respecto a la víctima de autos, de fs. 12 a fs. 30 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) Copia certificado de defunción N°2281475 de José Raúl Quintul Muñoz, donde consta fecha de defunción 16 de mayo de 1979 a las 13:15 horas, en el Hospital de Castro.

b) Copia de informe de fecha noviembre de 1976. En el que se expresa que: El señor José Raúl Quintul Muñoz, cédula de identidad N°49543, de Castro, fue detenido, en calidad de reo político, en su lugar de trabajo en Castro, el 2 de abril de 1974, cuatro días después fue trasladado a la cárcel de Puerto Montt, donde permaneció hasta el 26 de septiembre de 1975. En esa fecha fue trasladado a la cárcel de Castro en la que permaneció hasta el 7 de julio de 1976, cuando salió libre definitivamente después de haber cumplido una condena de presidio de ochocientos dos días. Alrededor de un mes después de haber llegado a la prisión de Castro, se agudizaron los dolores a la columna que ya había sentido con intensidad leve en los últimos tres meses en Puerto Montt. Tanto el

médico de Puerto Montt como el de Castro no dieron mayor importancia a esto, ya que lo atribuyeron a la posición corporal mantenida en su trabajo dentro de la prisión (tejer revestimiento de lápices con fibra plástica). Al salir libre, en julio de este año 1976, el dolor era ya muy intensidad, y veinte días después de abandonar la prisión viajó a Santiago con el objeto de hacerse realizar algunos exámenes médicos, pero antes que estos fueran efectuados, el dolor se intensificó repentinamente hasta el punto de hacerse insoportable al más mínimo movimiento corporal. Después fue paulatinamente calmando, pero el 25 de agosto, cuando el dolor ya había disminuido mucho en intensidad, un movimiento brusco realizado por el médico al tratar de sentarlo, intensificó de nuevo el dolor y muy pronto comenzó a notar insensibilidad en las rodillas y dificultad para mover las piernas, terminando en pocos días en una paraplejia fláccida. El primer diagnóstico de los Dres. Eduardo Cornejo y Alberto Croquevielle fue cáncer a la médula. Pero exámenes más detallados de las radiografías por ellos mismos, más otros cancerólogos le condujeron a la conclusión de descartar a posibilidad de cáncer y declararse incompetentes de diagnosticar y en consecuencia también de operar. Ahora bien, a pesar de haber perdido totalmente la movilidad de las piernas y sensibilidad táctil de las mismas, siente una sensación constante como de frío desde la rodilla hasta los pies, aun cuando al tacto de observa que están a la temperatura normal. Además, ante un ruido súbito tiene la sensación de que una corriente eléctrica recorre sus piernas hasta los pies mismos. Por otra parte, cuando hace esfuerzos de mover las piernas, a pesar de no haber ninguna reacción de ellas, se observa si embargo una leve contracción del grueso tendón situado debajo de la rodilla. Entre tanto, como consecuencia de la paraplejia, le ha sobrevenido la pérdida de la función voluntaria de la vejiga y el intestino grueso, con la consecuente dificultad de la vejiga para retener la orina y el intestino grueso realizar la evacuación. Dado el estado estacionario de la enfermedad y los síntomas más arriba descritos se puede afirmar que el enfermo puede recuperar la salud al ser tratado en un centro médico que cuente con mayores recursos científicos que los existentes en Chile.

c) Copia declaración de Héctor Septimio Quintul Muñoz, de fecha 31 de agosto de 1990. En que expresa que su hermano fue detenido un mes de después del golpe militar. Él a esa fecha trabajaba y vivía con sus padres y tenía 36 años, su militancia era socialista, en el cua se desempeñaba como dirigente y se dedicaba a trabajar n la casa, estaba a cargo de ayudar a sus padres para vivir. Cuando lo detienen estaba trabajando en su motosierra, primero la policía fue a

allanar la casa, dando vuelta todo lo que había y preguntan por Raúl Quintún, ahí se le señaló el lugar donde se encontraba y lo van a detener, al día siguiente a su detención lo traen a Puerto Montt a Chin Chin, luego lo trasladan a Castro donde tiene que cumplir una condena de 802 días. A los pocos meses que estuvo en Puerto Montt empezó a sentir un dolor a la columna, lo llevaron al médico de Castro quien tampoco le dio importancia. Cuando salió en libertad ya no podía andar por problemas de columna. A los 20 días que quedó en libertad viajó a Santiago, en busca de mejoría, pero le señalaron que tenía paraplejia, al regresar ya no andaba y quedó en cama ya que se le murió el cuerpo. En Santiago estaba en la casa de un amigo suyo y el declarante tuvo que viajar ya que había que cuidarlo, como quien cuida a una guagua, estuvieron meses en Santiago, luego tuvieron que regresar a Chiloé ya que no tenía remedio, en la casa duró casi tres años en cama, ahí los padres tuvieron que enfrentar la enfermedad para comprarle sus remedios y calmantes, tuvieron que vender lo poquito que tenían en la casa para su mejoría, pero no ocurrió así, ya que el murió producto de la paraplejia. En Santiago no se pidió informe médico. Antes de ir a Santiago lo vio un médico cirujano en Castro quien le señaló que debía de viajar a Santiago. El informe de este médico lo tiene, el nombre del dr. Es Juvenal Hernández. Ellos en total eran 5 hermanos, ahora son 4 vivos. En las personas que detienen a su hermano está el cabo 1ro de apellido Aude (A) de Carabineros. Respecto a los daños sufridos por el grupo familiar, expresó que sus padres quedaron bastante mal, a su madre le vino una enfermedad al cerebro, le atacó al corazón y sus complicaciones, esto les ayudó a envejecer.

d) Certificado de Bernardita Melero Aparicio, Religiosa Filipense y encargada de la pastoral de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Castro, certifica haber conocido al señor José Raúl Quintul Muñoz, por el año 1976. La primera visita fue en casa de su hermano Héctor Quintul, en la ciudad de Castro. Tenía inmovilizado desde la cintura para abajo, después varias veces a visitarle a su casa donde tenía su domicilio en Coihuinco, en el que la comunidad parroquial le ayudaba con ropa y alimentos, con lo poco que por aquel tiempo se podía, hasta el 16 de mayo que falleció. Otorgado en Castro el 21 de abril de 1993.

e) Copia declaración Héctor Septimio Quintul Muñoz, de fecha 23 de abril de 1993. Ratifica la denuncia formulada relativa a la muerte de José Raúl Quintul Muñoz. Su hermano estuvo detenido en el presidio de Chin Chin, de Puerto Montt entre el 21 de abril de 1974 hasta el mes de julio de 1976. Durante el

periodo de prisión fue torturado en forma reiterada a consecuencia de lo cual sufrió severos daños físicos y especialmente en la columna vertebral a consecuencia de lo cual quedó invalido de piernas y falleció el 16 de mayo de 1979 debido a las múltiples secuelas de la tortura. Fueron testigos de los actos de tortura sus compañeros de celda Carmelo Quinchen Gómez, José Sandoval, Arnoldo Coyul, Mario Contreras, César Leiva. Su hermano José Raúl Quintul Muñoz era del partido socialista, dirigente del JAP. Fue tratado médicamente por el doctor Juvenal Hernández, el cual diagnosticó paraplejia flácida por sección medular transversa completa aplastamiento vertebral en d11 y de posible etiología neoplásica. (25/12/77). Y el doctor Núñez el año 1979 días antes del fallecimiento.

f) Copia certificado otorgado por César Vladimir Leiva Garrido, de fecha 26 de abril de 1993. Certificado de fecha 26 de abril de 1993. Declara que conoció personalmente a don José Raúl Quintul Muñoz durante el año 1974, mientras permaneció detenido como preso político en la cárcel de Chin Chin, en Puerto Montt, donde el citado José Raúl Quintul Muñoz se encontraba en la misma condición. Que le consta que mientras esta persona permaneció recluida en dicho recinto carcelario, sufrió permanentes y continuos dolores, tanto a su columna, lo que muchas veces le impedía caminar y debió pasar largos periodos en cama, como de su estómago, al parecer aquejado de dolores producto de heridas internas por haber sido golpeado por fuerzas policiales al momento de ser detenido. Que le consta que el citado José Raúl Quintul Muñoz falleció posteriormente producto de estas lesiones. Lo que declara libre y voluntariamente, a fin de colaborar en la investigación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Castro, 26 de abril de 1993.

g) Copia declaración privada de Mario Enrique Contreras Vega, de fecha 26 de abril de 1993, Chileno, cédula de identidad N° 5.264.360-0, de profesión agricultor, y actualmente Concejal de I. Municipalidad de Castro, quien voluntariamente declara lo siguiente: que conoció personalmente a don José Raúl Quintul Muñoz, de quien le consta que fue detenido por fuerzas policiales de Castro en los primeros meses de 1974 t trasladado a la cárcel de Chin Chin, en Puerto Montt. Que a esa unidad carcelaria llegó en evidente estado de deterioro físico, en calidad de semi-invalido ya que habría sido ferozmente golpeado por las fuerzas policiales, los que le dañaron la columna vertebral. Que permaneció recluido en la cárcel de Puerto Montt, sufrió continuamente por los daños recibidos, de lo que jamás pudo recuperarse, ya que dichas lesiones falleció en

1979. Que lo que declara le consta personalmente por haber permanecido en la cárcel conjuntamente con él y muchos otros presos políticos de la época.

h) Certificado de José Del Carmen Quinchén Gómez, de fecha 27 de abril de 1993. Certificado de fecha 27 de abril de 1993, chileno, cédula de identidad N° 2.768.197-2, domiciliado en la comuna de Castro, sector Ten-Ten Alto, de profesión obrero de la construcción, certifica que : en el mes de marzo de 1974 fue detenido por miembros del cuerpo de carabineros de Chile, Comisaría de Castro, en esta localidad, junto con Raúl Quintul Muñoz, quien fue golpeado, torturado y flagelado por agentes policiales, causándole graves daños físicos, tanto en el estómago como en la columna, de lo que sufrió todo el tiempo que estuvo detenido, ya que nunca fue atendido médicamente de esos males, mientras estuvo preso. Certifica, además, que ambos fueron condenados a la pena de 802 días de cárcel, siendo liberados aproximadamente en junio o julio de 1976. Lo que declara bajo petición de los familiares de José Raúl Quintul Muñoz, para ser presentado a la Comisión de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

i) Copia declaración ante la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de María Helvecia Paillacar Paillacar de fecha 28 de mayo de 1993. En lo principal ratifica todas las declaraciones anteriores. El extenso informe médico entregado fue escrito por Eliecer Paillacar, primo de ella y profesor universitario en cuyo domicilio de Stgo. Se hospedaron cuando su cuñado estuvo internado en Santiago. El contenido fue descrito y dictado por el propio afectado dado que en esos momentos estaba ya impedido de escribir a máquina por cuánto no podía sentarse. Se deja constancia que en ese acto la sra. María Helvecia Paillacar Paillacar muestra todos los originales que corresponden a la documentación fotocopiada que recibió hace unos días de parte del asesor jurídico de esa gobernación.

j) Resumen Historia Clínica de José Raúl Quintul Muñoz, de fecha 26 de abril de 1993. Esta consignada su hospitalización el 15.05.79, por cuadro de hemorragia digestiva alta y paraplejia. Fue controlado por el médico ese mismo día 15.05.79. a las 17:30 hrs. 19 hrs, 21 y 23 hrs. Con agravamiento progresivo. Última evaluación esta consignada el 16-05.79 a las 08:30 hrs. Con paciente grave. En la caratula se consigna su fallecimiento ese día a las 13:15 hrs.

k) Certificado médico de José Raúl Quintul Muñoz, emitido por el médico Juvenal Hernández Vidal, con fecha 25 de diciembre de 1977. Certifica haber examinado profesionalmente al señor José Raúl Quintul Muñoz de 35 años

de edad, en su domicilio, en Castro, el día 23 de diciembre de año en curso, a petición de los familiares con objeto de proceder a trasladarlo a un centro especializado si fuese necesario. El resultado clínico es coincidente respecto al diagnóstico practicado hace algunos meses en Santiago y corresponde a una afección neuroquirúrgica que requiere obligadamente de estudio y tratamiento especializado. Se recomienda, por ende, traslado urgente a un servicio de neurocirugía. El paciente presenta una paraplejia flácida por sección medular transversa completa por aplastamiento vertebral en D11 y de posible etiología neoplásica.

l) Certificado de Gendarmería de Chile. Especificando que don José Raúl Quintul Muñoz, fue condenado a las penas de 260 días, más 540 días, por el delito de tenencia ilegal de armas, por la 1ra Fiscalía Militar de Puerto Montt. Las condenas fueron cumplidas en su totalidad según los libros de archivos que obran en esa unidad penal, empezando la misma con fecha 26 de abril de 1974 y terminando con fecha 03 de julio de 1976.

m) Resumen de ficha clínica N°253514 del Hospital Puerto Montt de Raúl Quintul Muñoz. Donde consta que el paciente hospitalizado el 05 de agosto de 1978 con los diagnósticos de paraplejia de 2 años de evolución, masas abdominales palpables en hemiabdomen inferior. La ficha clínica no tiene epicrisis ni diagnóstico ni fecha de alta.

B.3. Informe de la Fundación Documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad, de fs. 37 a fs. 40 (Tomo I); que contiene Informe sobre calificación de víctima de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, en lo pertinente consta que José Raúl Quintul Muñoz, el Consejo Superior llegó a la convicción que la muerte de José Raúl Quintul Muñoz, influyeron decisivamente las tortura a que fue sometido durante su detención por agentes del Estado y a la falta de atención médica oportuna y eficaz. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

B.4. Informe de Carabineros de Chile, de fs. 42 (Tomo I), de f. 804, de fs. 806 (Tomo II), que indica que no existen antecedentes en la Institución acerca del ciudadano José Raúl Quintul Muñoz.

B.5. Informe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile de fs. 44 a fs. 45 (Tomo I). En que indican que revisados los libros de Registro de causas judiciales, instruidas por dicho Tribunal de Aviación de Tiempo de Paz, en ellos no figura la información requerida. De fs. 596 a fs. 601(Tomo II);

B.6. Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación de fs. 92, de fs. 94, de fs. 96, de fs. 131 a fs. 133 (Tomo I), de fs. 669 a fs. 670 (Tomo II); que indican antecedentes familiares de José Raúl Quintul Muñoz, consignándose en el primero el nombre de sus padres: Eliseo Quintul Quintul, de su madre, Rosa Muñoz Hernández. En el informe de fs. 131 y siguientes se especifica, además del nombre de sus padres, el nombre de sus hermanos: Héctor Septimio, Gloria Iris, José Osvaldo, Olga, Florencio Del Carmen y José Octavio, todos Quintul Muñoz.

B.7. Informe del Hospital de Puerto Montt de fs. 102, y fs. 300 (Tomo I); donde se indica que en su establecimiento no existen antecedentes clínicos de la víctima José Raúl Quintul Muñoz.

B.8. Informe del Hospital de Castro de fs. 103 (Tomo I); indicando que por instrucción ministerial las fichas clínicas se resguardan por un lapso de 15 años contados desde la última atención efectuada al paciente.

B.9. Informe del Centro de detención preventiva de Castro de f. 105 (Tomo I); señalando que no se encuentran registros de las sentencias indicadas.

B.10. Extracto de filiación y antecedentes de José Raúl Quintul Muñoz de fs. 108 (Tomo I). De Carlos Ulises Cifuentes Hernández de fs. 770 a fs. 771 (Tomo II), de Luis Diógenes Ulloa Bahamonde de fs. 772 a fs. 773 (Tomo II);

B.11. Informe del Tercer Juzgado Militar de Valdivia de fs. 128 (Tomo I), certificando que en ese III Juzgado Militar de Concepción y IV Juzgado Militar de Valdivia, no existe ningún antecedente que diga relación con la causa en que se habría condenado a José Raúl Quintul Muñoz en el año 1974.

B.12. Copia del informe del Director regional de Gendarmería de Chile que adjunta planilla con datos estadísticos de ciudadanos ingresados y egresados del Centro de cumplimiento penitenciario de Puerto Montt con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 de fs. 165 a fs. 169 (Tomo I), figurando en el número 315 José Raúl Quintul Muñoz, por el delito de tenencia ilegal de armas, con una condena de 250 días más 540 días, con fecha de ingreso 26 de abril de 1974.

B.13. Informe del Director Regional de Gendarmería de Chile Región de Los Lagos enviando antecedentes de la víctima de autos, de fs. 189 a fs. 190 (Tomo I), adjuntando certificado de permanencia, otorgado el 26 de noviembre de 2012, donde consta el nombre de José Raúl Quintul Muñoz, Tribunal 1° Fiscalía Militar, delito Tenencia Ilegal de arma de fuego, condena: 260 días + 540 días, fecha de ingreso 26/04/1974, observaciones: con fecha 26/09/1975 es trasladado a Chaitén. Lo anterior es firmado por Luis González Báez, Teniente Coronel de Gendarmería.

B.14. Nómina con personas recluidas en la cárcel de Chin Chin correspondiente al año 1974 a fs. 409 (Tomo I); Mismo documento señalado en B.12.

B.15. Informe del Servicio Médico Legal dando respuesta a consulta médico legal N° 2118-2014, de fs. 439 a fs. 472 (Tomo I), que consigna como conclusiones: dado que los elementos de juicio con que se cuentan son insuficientes, el perito que suscribe requiere de los antecedentes clínicos del Instituto de Neurocirugía, a fin de expedir informe de lesiones.

B.16. Informe del Instituto de neurocirugía Asenjo de fs. 478 (Tomo I), informando que en la institución no se encontraron registros referentes al paciente (José Raúl Quintul Muñoz).

B.17. Informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile de fs. 630 (Tomo II), señalando que no figura la causa rol N° 97-74, como tampoco antecedentes relacionados con José Quintul Muñoz.

B.18. Copia simple de relación de causas con personal que integraron los consejos de guerra años 1973 y 1974 en la Jefatura de zona en Estado de Sitio de Llanquihue y Chiloé de fs. 633 a fs. 642 (Tomo II); figura bajo el proceso 97-74, José Quintul Muñoz y otros por Tenencia Ilegal de Armas de fuego y otros.

B.19. Copia simple de decreto que convoca a consejo de guerra para conocer del proceso 97-74 a fs. 644 (Tomo II), seguido contra José Raúl Quintul Muñoz.

B.20. Informe de la Comandancia en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el que remite ejemplar original de la causa rol N° 97-74, de fs. 649 (Tomo II), remitiendo ejemplar de causa rol N°97-74, compuesta de 45 fojas útiles, seguida en contra de José Raúl Quintul Muñoz. En el referido expediente consta:

a.- Fs. 2 parte N°22, del 23 de abril de 1974, remitido por Carabineros de Chile, Prefectura de Chiloé a la Fiscalía Militar en tiempo de Guerra Puerto Montt. En él se consigna que *“José Raúl Quintul Muñoz, 30 años, soltero, Chileno, agricultor, básicos, carnet de identidad N°49.543 de Castro, domiciliado en la localidad de Coihuinco, presidente de núcleo del ex partido socialista, de la localidad de Chacra.”* Posteriormente se refiere a otros detenidos, para continuar indicando *“interrogados ambos detenidos por separado, libre y espontáneamente manifestaron: que el día 12 de septiembre de 1973, después del pronunciamiento militar, se concertaron para huir a la localidad de La Chacra, en compañía de Carlos René Verategua Vera, domiciliado en P.A. Cerda N°1010, dirigente y activista del ex partido comunista, en la localidad indicada, concurrieron al*

domicilio de Gilberto Román Cruces, donde permanecieron tres días, lugar donde se pusieron de acuerdo los tres, para reclutar habitantes de la localidad, para avanzar con estos hacia Castro, con el propósito de atacar a las Fuerzas Armadas, las que habían asumido el poder de la Nación, con respecto al dueño de casa, nada le dieron a conocer sobre sus planes, por desconocer su tenencia política. Agregaron que como no tuvieron apoyo de los pobladores en el plan que tenían previsto, regresaron a sus respectivos domicilios. Allanados los domicilios de los detenidos ya individualizados, a Quintul, en el interior del inmueble no se le encontró armas, ni otras especies, pero sí en unos matorrales próximos a su casa habitación, oculto en el hueco de un árbol, se le encontró lo siguiente: Un revolver cal. 22 mm., corto, marca "Pasper", industria Argentina, N°120043, empuñadura material plástico, color café, con 41 balas, cal. 22 mm., largas, marca O-A, y 27 cortas, misma marca y calibre, un carnet de material plástico, color rojo, de identificación del ex partido socialista y 21 textos de diferentes tamaño y materias de literatura marxista."

b.- **fs. 6**, carnet de José Quintul Muñoz del partido socialista, con fecha de expedición 3-8-72.

c.- **fs. 27**, declaración de Carlos Ulises Cifuentes Hernández, prestada en Castro el 28 de mayo de 1974, en que expresa *"Ratifico en su totalidad el parte N°22 del 23 de abril del año 1974, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, por el que se pone a disposición de la Fiscalía Militar de Puerto Montt, al detenido por ocultamiento de armas de fuego, munición y literatura marxista, José Raúl Quintul Muñoz y el detenido por la misma causa José Del Carmen Quinchen Gómez. Además consta declaración de la misma fecha de Luis Ulloa Bahamonde refiriendo "Ratifico en su totalidad el parte N°22 del 23 de abril del año 1974, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, por el que se pone a disposición de la Fiscalía Militar de Puerto Montt, a los detenidos José Raúl Quintul Muñoz y José Quinchen Gómez". Por su lado en declaración de la misma fecha José Lucedino Aude Añazco comenta: "Ratifico en su totalidad el parte N°22 del 23 de abril del año 1974, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, por el que se pone a disposición de la Fiscalía Militar de Puerto Montt, a los detenidos José Raúl Quintul Muñoz y José Del Carmen Quinchen Gómez"*

B.21. Copia de antecedente clínicos de José Quintul Muñoz de fs. 681 a fs. 708 (Tomo II); compuesto por:

a) Informe expedido en Santiago, con fecha noviembre de 1976. Documento que se encuentra reseñado en el punto B2.

- b) Certificado de fecha 26 de abril de 1993, reseñado en el punto B2.
- c) Certificado de fecha 27 de abril de 1993, de José Del Carmen Quinchén Gómez. Reseñado en el punto B2.
- d) Declaración privada de don Mario Enrique Contreras Vega, reseñado en el punto B2.
- e) Resumen de historia clínica de José Raúl Quintul Muñoz. Ya reseñado en el punto B2
- f) Certificado Médico de doctor Juvenal Hernández Vidal de fecha 25 de diciembre de 1977. Castro Chiloé. Reseñado en el punto B2.
- g) copia ficha clínica N°24.663 de José Raúl Quintul Muñoz.
- h) Certificado de Gendarmería de Chile, de fecha 14 de septiembre de 1992, Centro de Detención Preventiva de Castro donde indica que José Raúl Quintul Muñoz, fue condenado a las penas de 260 días, más 540 días por el delito de tenencia ilegal de armas, por la 1ª Fiscalía Militar de Puerto Montt. Las condenas fueron cumplidas en su totalidad según los libros de archivos que obran en esa unidad penal, empezando la misma con fecha 26 de abril de 1974 y terminando con fecha 03 de julio de 1976.

B.22. Copia autorizada de sentencia de primera instancia dictada con fecha 23 de diciembre de dos mil diecisiete en causa rol 54.035 del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, de fs. 828 a fs. 928 (Tomo III);, en que se condenó a Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Diógenes Ulloa Bahamonde por los delitos de apremios ilegítimos previstos en el artículo 150 N°1 del Código Penal (vigente a la época de los hechos) en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, César Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado y Werne Víctor Haro Oyarzún, perpetrados en la comuna de Castro, entre los meses de septiembre de 1973 y septiembre de 1974, en grado de consumado.

B.23. Copia autorizada de sentencia de segunda instancia dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco en causa rol 54.035 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt de fs. 929 a fs. 930 (Tomo III), en que ese confirma la sentencia de fecha 23 de diciembre del año 2017.

B.24. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) de fs. 9 a fs.11, en lo pertinente solicita agilizar diligencias para continuar con la investigación.

b) de fs. 48 a fs. 79, contiene nómina del personal que componía la dotación de la Comisaría de Castro entre los meses de octubre de 1973 y abril de 1974. Asimismo contiene la declaración de familiares de la víctima y de testigos.

c) de fs. 118 a fs. 125 (Tomo I), contiene declaración de ex funcionarios de Carabineros de Chile.

d) de fs. 135 a fs. 149 (Tomo I), contiene declaración de testigos y ex funcionarios de Carabineros de Chile.

f) de fs. 284 a fs. 292 (Tomo I), contiene declaraciones de testigos.

g) de fs. 338 a fs. 347 (Tomo I), contiene declaración de ex funcionarios de Carabineros de Chile.

h) de fs. 350 a fs. 360 (Tomo I) , contiene declaración de acusado.

i) de fs. 502 a 505 (Tomo II), informa reprogramación de diligencias investigativas.

j) de fs. 511 a fs. 527 (Tomo II), contiene declaraciones de testigos.

k) de fs. 541 a fs. 546 (Tomo II), contiene antecedentes médico-criminalísticos, referentes a la víctima.

l) de fs. 653 a fs. 654 (Tomo II), contiene individualización de testigo, solicita diligencia investigativa.

m) de fs. 720 a fs. 729 (Tomo II), contiene declaraciones de testigos.

n) de fs. 778 a fs. 793 (Tomo II), contiene declaraciones de ex funcionarios de Carabineros.

ñ) de fs. 798 a fs. 801 (Tomo II), contiene ubicación de testigos.

o) de fs. 808 a fs. 809, de fs. (Tomo II), contiene ubicación de testigo.

p) de fs. 915 a 920 (Tomo III); informa que se dejó en espera de citación a ex funcionarios de Carabineros de Chile.

9°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que a partir del 11 de septiembre de 1973, a raíz de los sucesos acaecidos en el país, en todas las comisarías se formó un grupo operativo denominado “comisión civil”, dedicado a labores de inteligencia que consistían en averiguar situaciones de búsqueda de información respecto de grupos violentistas,

detención de personas que estaban consideradas en los bandos militares, entre otras; es decir, eran labores que escapaban a los procedimientos comunes policiales [Lo anterior consta en causas rol 113.987 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, rol 14-2013 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, rol 45.359 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, entre otras, todas seguidas por este Tribunal y que son de público conocimiento.]

En el caso de la Segunda Comisaría de Castro, tal comisión civil estuvo compuesta por el Sargento Carlos Ulises Cifuentes Hernández, el Cabo Primero Luis Diógenes Ulloa Bahamonde y el Cabo Segundo José Lucendino Aude Añazco (fallecido según consta en certificado de defunción de fs. 673, del tomo II), siendo liderada por el primero de los mencionados [según consta de declaraciones de Héctor Vargas Gallardo de fs. 113 (Tomo I), de José Cárdenas Díaz de fs. 115 (Tomo I), de Rubén Oyarzún Cárdenas de fs. 344 (Tomo I), de Luis Ulloa Bahamonde fs. 404 y 535 (tomo I y II respectivamente), de José Lucedino Aude Añazco 406 (Tomo I) entre otros antecedentes].

B.- Que entre las labores que realizaba esta comisión civil estaban la de efectuar detenciones, allanamientos en búsqueda de literatura de carácter político y otros procedimientos dentro del territorio jurisdiccional de la unidad.

Las detenciones efectuadas por esta comisión civil, eran realizadas sin exhibir orden judicial, para posteriormente conducir a los detenidos hasta las caballerizas de la 2° Comisaría de Castro, lugar donde eran interrogados, golpeados, sometidos a simulacros de fusilamientos y torturados, especialmente con el llamado “submarino”, tortura que consistía en sumergir la cabeza de los detenidos en un tambor con agua en descomposición, todo lo cual era realizado por Carlos Cifuentes Hernández, Luis Ulloa Bahamonde y José Aude Añazco [tal como consta en declaraciones de Cesar Leiva Garrido de fs. 73 y fs. 304 (Tomo I), de Mario Contreras Vega de fs. 304, de Domingo Álvarez Cárdenas de fs. 411 (Tomo I), de Raúl Andrade Oyarzún de fs. 421 (tomo I), de Werne Aro Oyarzún de fs. 522 (tomo II), entre otros antecedentes]

C.- Que el grupo integrado por Cifuentes, Aude y Ulloa, en un día del mes de abril del año 1974, se dirigió hasta el sector rural Las Chacras, ubicado en la ciudad de Castro, en búsqueda del domicilio de José Quintul Muñoz, militante socialista, con el objetivo de detenerlo debido a una denuncia en su contra que decía relación con que este tendría armas de fuego en su poder.

Una vez en el domicilio del Sr. Quintul, allanaron la casa y lo detuvieron sin orden judicial aparente, trasladándolo hasta la 2° Comisaría de

Castro, lugar donde fue interrogado y duramente torturado por sus aprehensores. Posteriormente fue trasladado hasta la ciudad de Puerto Montt, donde con fecha 22 de abril de 1974 fue puesto a disposición de la Fiscalía Militar, siendo condenado por un Consejo de Guerra, a cumplir una pena de 260 días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de tenencia ilegal de armas y 540 días de presidio menor en su grado mínimo, por su responsabilidad como autor del delito de porte ilegal de armas de fuego (según se desprende de expediente militar causa rol N° 97-74, traído a la vista a fs. 649 del tomo II). Dicha condena fue cumplida por la víctima en la cárcel de Chin Chin de la ciudad de Puerto Montt, lugar donde se le vio en muy mal estado, con permanentes dolores en su columna y dificultad para caminar. Lo anterior producto de las torturas sufridas previo a llegar al indicado Centro de cumplimiento penitenciario. [Como consta en declaraciones de Héctor Quintul Muñoz de fs. 65 (Tomo I), de Mario Contreras Vega de fs. 71, 87 y 304 (Tomo I), de César Leiva Garrido de fs. 73 (Tomo I), de Domingo Álvarez Cárdenas de fs. 411 (Tomo I), de Jaime Moraga Zamorano de fs. 488 (Tomo I), de José Lucedino Aude Añazco de fs. 533 (Tomo II), de Carlos Cifuentes Hernández de fs. 534 (Tomo II) entre otros antecedentes].

La víctima terminó de cumplir su condena en la prisión de Castro, en el mes de julio de 1976, fecha en la cual ya se encontraba imposibilitado de caminar por sí solo, siendo diagnosticado finalmente con una “paraplejía flácida por sección medular transversa completa por aplastamiento vertebral en D11 y de posible etiología neoplástica” (según consta en certificado médico de fs. 20 del tomo I), falleciendo finalmente en la ciudad de Castro el 16 de mayo del año 1979, producto de un infarto al miocardio (según consta de certificado de defunción de fs. 107 del tomo I).

10°) Calificación. Que los hechos antes reseñados, en esta etapa procesal, constituyen el delito de **detención ilegal y apremios ilegítimos**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **José Quintul Muñoz**, previstos y sancionados en los artículos 148 y 150 N° 1 del Código Penal vigentes a la época de los hechos.

11°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de **lesa humanidad**. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitruftuén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitruftuén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

X. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera,

Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

Y. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Z. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

LL.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019.

P.16 Causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado de Alejandro Ancao Paine, sentencia de 03 de septiembre de 2021. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

12°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad"

plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

13°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más

amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla

de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michele Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

C. DECLARACIONES INDAGATORIAS

14°) Que prestando declaración indagatoria **CARLOS ULISES CIFUENTES HERNÁNDEZ**, quien declaró de fs. 359 a fs. 360, de fs. 391 a fs. 394 (Tomo I), de fs. 534 (Tomo II);.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de abril de 2013, rolante a **fs. 359 a fs. 360 (Tomo I)**, aduce que en el año 1965 ingresó a Carabineros de Chile, específicamente a la Segunda Comisaría de Santiago, realizando el curso de instrucción en la 16° Comisaría de Santiago. Luego regresó a la Segunda Comisaría de Santiago y le correspondió servir en diversas unidades del país, entre ella recuerda la 13° Comisaría de Ñuñoa, la Escuela de Suboficiales de Carabineros, la Cuarta Comisaría de Chaitén, y la Segunda Comisaría de Castro, donde finalizó su carrera en el año 1980. Hace presente que no recuerda las fechas y plazo en el que estuvo en esas unidades, debido al tiempo transcurrido. Sobre el tiempo que estuvo en Castro, inicialmente cumplió funciones de orden y seguridad, pero un momento fue designado por el comisario de apellidos Torrealba Guerrero, para estar a cargo de una comisión civil, la cual estaba integrada por los cabos José Aude Añazco y Luis Ulloa Bahamonde. Su función principal era dar cumplimiento a instrucciones que llegaban de la Prefectura y del mando, entre ellas estaba la incautación de armas de fuego en manos de particulares. En relación a la detención del ciudadano José Raúl Quintul Muñoz, lo recuerda como un activista político, al parecer militante de izquierda, al parecer residía en el sector Las Chacras a quien no recuerda haber detenido, interrogado, ni menos haberle agredido ni torturado. Refiere que efectivamente realizaron detenciones de personas, allanamientos de inmuebles e interrogatorios a sujetos, pero siempre por orden del mando o debido a una investigación que se realizaba con antelación. Los interrogatorios los realizaban entre los tres funcionarios y puede afirmar que nunca se golpeó, apremió y/o torturó a personas en su presencia. Los detenidos de la comisión civil, una vez que llegaban

a la Comisaría, los ingresaban a los registros de la guardia, luego los interrogaban y realizaban el trámite administrativo, para luego dejarlo en los calabozos, bajo la responsabilidad de la guardia. Durante el tiempo que estuvo en la comisión civil no recuerda haber detenido a personas por razones políticas, sólo efectuaban detenciones por delitos determinados, pero es probable que haya ocurrido en cumplimiento a una orden del mando de la unidad. En ese tiempo trabajaban preferentemente de día y no tenían vehículos para trabajar. Expresa sobre las agresiones y torturas a las que habría sido sometida la persona de José Raúl Quintul Muñoz, por Carabineros de Castro, reitera que no recuerda haberlo detenido, pero en el caso que así haya ocurrido y por el tiempo transcurrido no lo recuerde, es imposible que ellos los golpearan, ya que la Comisaría siempre estaba con funcionarios y los jefes de ese tiempo, no habrían permitido que ello ocurriera. No puede asegurar que pudo haber sucedido alguna agresión, después de haber entregado el detenido a la guardia, una vez que ingresó a los calabozos. Señala que tanto las armas incautadas, como también los detenidos eran trasladados por Carabineros de la Segunda Comisaría de Castro y de uniforme hasta la ciudad de Puerto Montt, a disposición de la Fiscalía Militar, quien en definitiva decidía el destino de los detenidos. Las armas que se incautaron en la ciudad de Castro, fueron pocas, solamente armas de puño y preferentemente revólveres argentinos de calibre 22. Cuando realizaba los procedimientos, se identificaba con su nombre y jamás señalaba que su apellido era Villalobos, ya que era conocido en la ciudad como Carabinero, durante los 15 años que estuvo allí.

En **declaración judicial prestada de fs. 391 a fs. 394 (Tomo I)**, el 18 de noviembre de 2013, ratifica íntegramente su declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones de Chile y que le fue leída. Preguntado sobre en qué fecha llegó a la Comisaría de Castro, cuánto tiempo permaneció cumpliendo funciones en dicho lugar responde que a la Comisaría de Castro llegó en el año 1966, de Chaitén lo trasladaron a Castro. Estuvo hasta el año 1980 dependiendo de esa Comisaría. Algunas veces fue a reemplazar a retenes, porque como son islas y en cada isla hay un retén, muchas veces le tocó hacer reemplazos, con motivo de vacaciones de los funcionarios. Sobre quienes integraban la comisaría, expresa que la integraban el mayor Hernán Olave, Calderón Moraga, Juan Aguilera Paredes, un capitán González Escobar, Ricardo Hernández Cáceres, carabinero Hernández Bórquez, Luis Ulloa Bahamonde, José Aude Añazco, Pérez, Fermín Aravena, Pacheco, y No recuerda otros nombres más. Cree que la Comisaría la componían como 70, pero estaban todos

destacados en distintos lugares de la isla. Sobre qué funciones cumplió en la Comisaría de Castro cuando llegó, refiere: Servicio a la Calle de orden y seguridad, servicios por turnos, que es lo que hace usualmente un carabinero. Sobre la fecha en que lo designaron en la comisión civil, cree que fue en el año 1974, más o menos, no recuerda en que mes. El año 1975 estuvo como jefe de tenencia de Dalcahue, de principios de año hasta como por mayo, cuando llegó un teniente a hacerse cargo. Preguntado sobre cuáles fueron sus funciones relata que su función de fiscalizar a las personas que llegaban relegadas a la isla por razones políticas, era eran gente del norte, se acuerda que eran de Antofagasta, un doctor, un abogado. El abogado era de apellido Rojo, el doctor no se acuerda. Las personas relegadas eran como 10 ó 15. Ellos llevaban un libro de registro, en que las personas debían firmar todas las semanas, el día sábado. Ellos también iban a sus domicilios para revisar que estuvieran allí. También revisaban los antecedentes de las personas que postulaban a cargos públicos, preferentemente políticos, que era lo que pedían las autoridades. También cumplían órdenes judiciales referentes a delitos comunes que se cometían, entre los cuales se encontraban, a modo de ejemplo, robo de diferentes índoles, animales y diferentes especies. Interrogado sobre quienes integraban la comisión civil atina que la integraban el deponente y los funcionarios que señaló en la declaración policial, es decir, el cabo José Aude Añazco y Luis Ulloa Bahamonde, que le parece que también era cabo. Indagado sobre si detuvo gente por motivos políticos, el declarante afirma que él no en particular, pero se detuvo gente, se hacía operativos a cargo del jefe o capitán, que eran allanamientos en búsqueda de literatura de carácter político o marxista como se llamaba en la época; se incautaban cosas, pero en esa época no se detuvo a nadie. Pero cuando ocurrió el pronunciamiento militar, cree que hubo personas detenidas en la Comisaría, en el casino, personas que posteriormente fueron llevadas a Puerto Montt, a veces en helicóptero o a veces en vehículos. No tiene claro a quienes pertenecían los helicópteros, ni los vehículos. Carabineros en ese entonces, en Castro, no operaba ningún helicóptero. Inquirido sobre si interrogó, cuáles eran los procedimientos de los interrogatorios, junto a quienes los realizó, refiere que si interrogó personas, el procedimiento era verbal, de acuerdo a las denuncias que había. Había dos bandos, se refiere a los civiles, unos que apoyaban y los otros que no, y en virtud de esto acudían a la Comisaría a denunciar, por ejemplo a decir este fulano tiene armas. Eso lo denunciaba de forma confidencial al jefe de la unidad, que era generalmente al mayor o al segundo jefe que era el capitán. A

veces las personas entregaban las armas y ellos las dejaban en la guardia detenidos y se hacía el procedimiento dispuesto legalmente. El procedimiento lo hacían los tres que conformaban la comisión civil. Nunca hubo apremios de su parte, ni lo admitió delante de sus colegas, en la época que fue parte de la comisión civil, parece que era Sargento Primero. En lo relativo a su en la Comisaría de Castro hubo detenidos, por qué clases de delito, qué trato de les daba, en qué condiciones se mantenían, blasona, Hubo detenidos por diferentes delitos, como sucede en una comisaría, agresiones, peleas, riñas. A los detenidos se les trataba de acuerdo al procedimiento establecido legalmente y se les colocaba a disposición de los tribunales, se mantenían en la unidad. Todos los detenidos pasaban al calabozo en espera de ser puestos a primera hora al tribunal, que es el procedimiento legal. En lo referente a cerca de la detención de José Raúl Quintul Muñoz, detenido en el periodo en que cumplía funciones en Castro, cuenta que fue un detenido que lo denunciaron porque tenía un revólver. Fueron donde el y este caballero dijo que no tenía revólver. Lo detuvieron ellos, lo llevaron a la Comisaría, pasó detenido por sospecha, porque en ese entonces estaba la ley de sospecha. Posteriormente él fue a ver a la persona que lo había denunciado, como era el revólver, a adquirir más antecedentes. Esta persona le afirma que evidentemente tiene un revolver. Anteriormente en el interrogatorio le dijo a Quintul que entregara el arma y le indicó el procedimiento que iba a tener, que lo iba a poner a disposición de la Fiscalía en Puerto Montt, que era mejor para él que entregara el arma. Una vez que volvieron con sus colegas de hablar con la persona que lo había denunciado, volvía a interrogar a Quintul, esto como una hora después. Ahí ese señor recapacitó y dijo que tenía el arma escondida cerca de unos matorrales cerca de su domicilio. Fueron nuevamente con él, encontraron el arma y se hizo el procedimiento, se entregó el a la comisaría como infractor de la ley de control de armas y explosivos. Ahí terminó el procedimiento con este señor en lo que al declarante concierne. Después no tuvo más contacto con él. No sabe cuándo lo mandaron a Puerto Montt, ni como lo mandaron. No recuerda el nombre de quien estaba a cargo de la Comisaría al momento de la detención de Quintul. En los procedimientos siempre andaban los tres que mencionó anteriormente. Nunca supo lo que le había sucedido a Quintul. Por eso le sorprendió cuando lo interrogaron a la Policía de Investigaciones en abril. Incluso una vez que él se jubiló estuvo cuatro años más en Castro y nunca supo de eso. La persona que denunció a Quintul fue un ex sargento de carabineros llamado

Alejandrino Díaz Haro. Estos procedimientos que se adoptaron quedaron registrados en los libros de guardia de la unidad, es decir, la Comisaría.

En **declaración judicial de fs. 534 (Tomo II)** de fecha 19 de noviembre de 2014 y ampliando su declaración anterior, respecto a la persona de Raúl Quintul Muñoz, a quien se le menciona, indica que aproximadamente en el año 1974, no recuerda la fecha exacta, en horas de la mañana, fue en compañía de los cabos Aude y Ulloa, al sector rural de Las Chacras, ubicado a unos cinco kilómetros de esa ciudad (Castro), con la intención de ubicar y detener a Raúl Quintul, debido a que se había recepcionado en la Comisaría una denuncia, no recuerda si fue de manera formal o anónima, que esta persona tenía armas de fuego en su poder, por este motivo llegaron al domicilio de Quintul, donde lo ubicaron en su hogar y le consultaron por las armas que supuestamente tenía, pero este negó tal situación y por ello y debido a que estaba vigente la detención por sospecha en ese tiempo, fue detenido y trasladado por su personal a la Comisaría de Castro. Una vez en ese recinto policial, se efectuaron los registros reglamentarios en el servicio de guardia y luego fue derivado, supone, a los calabozos. Posteriormente en horas de la tarde el detenido Quintul fue nuevamente sacado de los calabozos e interrogado por su persona en el recinto de guardia de la unidad, donde el detenido en forma libre y espontánea, sin ningún tipo de golpes, ni apremios ilegítimos, reconoció tener un revolver, agregando que lo tenía oculto en unos matorrales cerca de su hogar, por ellos su patrulla, junto con el detenido, concurren al sector indicado por éste, donde efectivamente encontraron oculto un revólver, al parecer recuerda de calibre 22, por ello nuevamente regresaron a la Comisaría de Castro, donde se realizó la documentación necesaria y el detenido Quintul Muñoz, fue puesto a disposición de la Fiscalía Militar de Puerto Montt, al día siguiente, siendo trasladado, por otros funcionarios de uniforme, ya que ellos solo entregaban los detenidos y el procedimiento finiquitado al Suboficial de guardia, quien continuaba con el trámite. No recuerda como era físicamente el detenido Raúl Quintul Muñoz. Expresa en orden a si el detenido Quintul fue sometido a malos tratos o apremios ilegítimos, por su parte o de otros funcionarios integrantes de su patrulla, su respuesta es negativa. La cuenta del procedimiento en cada caso la rendía el ante el subcomisario, que en esa época era el Capitán Escobar y este a su vez la traspasaba al Comisario, el Mayor Calderón Moraga.

15°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **CARLOS ULISES CIFUENTES HERNANDEZ**, quien fue sometido a proceso a **fs. 881 a 914 (Tomo III)**, con fecha 07 de abril de 2021. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1.090 a 1.117 (Tomo III)**, con fecha 02 de octubre de 2021, como autor de los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos** en su carácter de lesa humanidad en la persona de José Raúl Quintul Muñoz, perpetrados en la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, en el mes de abril de 1974; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

A) DECLARACIONES

a.1) MARÍA HELVECIA PAILLACAR PAILLACAR

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2011, rolante de fs. 68 a 70; (Tomo I) dice que fue cuñada de José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció el día 16 de mayo de 1979, en el hospital de Castro. Es el caso que para el año 1973, residía en el sector de Rilán, comuna de Castro. En ese tiempo, siendo el año 1974, mantenía una relación sentimental con Héctor Septimio Quintul Muñoz y en aquella época la deponente vivía en este domicilio, en compañía de su madre, siendo como parte de la familia de Héctor. Más tarde, en el mes de mayo del año 1974, se enteró que José Raúl fue detenido por Carabineros de Castro, quienes llegaron a la casa de la familia, ubicada en el sector Coihuinco, dijeron que andaban buscando a Raúl. En ese momento, estas personas comenzaron a registrar toda la casa, a la vez que causaban destrozos y rompían todo lo que había su paso, aduciendo que andaban buscando armas. Posteriormente, los Carabineros fueron a buscar a don Eliseo quien era el padre de Héctor y José Raúl, a quien trajeron desde el campo donde estaba trabajando, apuntando con las armas que portaban los Carabineros, quienes no conformes con su avanzada edad, lo amenazaron y consultaron donde estaba Raúl, en ese minuto se les dijo que estaba trabajando en el campo de Hernán Rehbein, lugar cercano a la casa, por ellos los Carabineros se fueron del lugar, supuestamente en

busca de José Raúl. Posteriormente, luego de un rato, llegó Raúl a la casa, acompañado de los Carabineros, quienes fueron a detenerlo y lo encontraron cortando leña con una motosierra en el campo. En ese minuto, Raúl dejó la motosierra en la casa y se fue detenido con estos funcionarios a la Comisaria de Castro. Todo lo narrado en la actualidad, se lo contó su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz. En ese tiempo, su suegro recorrió varios lugares de Castro, en busca de Raúl, pero no podía dar con su paradero, por ello le solicitó ayuda a un sacerdote de la iglesia de los Sagrados Corazones, quien no recuerda su nombre, pero actualmente se encuentra al parecer fuera del país. Fue esta persona quien finalmente encontró a Raúl, en la cárcel de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt, ya que estaba cumpliendo una condena por Infracción a la Ley de Armas, siendo visitado por la deponente cada quince días, con la finalidad de llevarle víveres y cosas para su estadía. Hace presente que durante el tiempo en que Raúl estuvo detenido en Carabineros, y en la cárcel de Puerto Montt, fue duramente torturado, lo colgaban y golpeaban, sin tener compasión. Durante las visitas, Raúl le contaba a su hermano lo que sucedía, dándose cuenta de que estaba muy mal físicamente. Más tarde, luego de un año aproximadamente Raúl fue trasladado desde la cárcel de Chin Chin, hasta el recinto penal de Castro, donde estuvo alrededor de un año más, hasta que fue dejado en libertad. Una vez que José Raúl salió de la cárcel, caminaba con mucho dolor y estaba perturbado de mente, ya que no reconocía su casa o para donde tenía que ir. Por esos días, sus dolores se hicieron muy fuertes e imposibles de resistir, siendo atendido por el doctor Juvenal Hernández quien señaló que, debido a los malos tratos y las torturas recibidas, tenía múltiples lesiones en su cuerpo, por lo que el médico aconsejó que lo trasladaran hasta Santiago, a fin de que, con mayores adelantos médicos, pudieran ayudarlo en su recuperación. Posteriormente debido a que Raúl no mejoraba, no dormía en la noche y gritaba de dolor de la cintura, es que su esposo viajó en bus con su hermano hasta Santiago, recorriendo varios centros médicos y siendo atendido en hospitales, sin lograr mejorar a Raúl. Un día mientras estaba sentado en la casa donde vivían en Santiago, en un momento éste se cayó de la silla y nunca más volvió a ponerse de pie, quedando parapléjico, regresando en esas condiciones a Castro, para ello su marido tuvo que volverse en avión a Puerto Montt y desde allí, en avioneta hasta Castro. Más tarde, su esposo nuevamente trasladó a su cuñado Raúl, esta vez a la ciudad de Puerto Montt, siendo atendido y operado en dos oportunidades en el hospital de la ciudad, regresando luego a su hogar. Seguidamente, la vida de Raúl fue muy complicada,

ya que sufría mucho por las lesiones que tenía, permaneciendo alrededor de dos años en la casa, falleciendo luego de una hemorragia interna, después de padecer por cinco años, las consecuencias de las torturas que fue sometido, durante el tiempo en que estuvo detenido. Es necesario agregar que, los Carabineros que estuvieron en la casa de sus suegros y que detuvieron a Raúl, estuvo uno de nombre José Aude y había otro de apellido Oyarzún, esto conforme a lo que le comentó su cuñada. Señala, además, que la mujer que inventó que su cuñado tenía armas y denunció este hecho a los Carabineros, fue una vecina del campo, de nombre Ana Hernández, quien tenía simpatía con el Gobierno Militar y actualmente se encuentra fallecida.

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 302 a 303 Vta; (Tomo I) Explaya que en mayo de 1974, la llamó por teléfono su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz, quien vivía allí con su padre José Eliseo Quintul Quintul y su mamá María Rosa Muñoz Hernández, actualmente fallecidos, al igual que tres de sus 6 hijos para informarle que habían ido funcionarios de Carabineros en busca de José Raúl, registraron la casa, provocaron destrozos, hicieron pedazos los colchones buscando armamento, ya que estaba denunciado por tener armamento y ser dirigente socialista. A causa de esto a la finada Rosa le dio un ataque al corazón y tuvieron que llevarla al médico. Posteriormente, Carabineros con armas pasaron a la casa, preguntando por don Eliseo, su cuñada les dijo que estaba cortando leña en un lugar cercano a la casa y fueron a buscarlo y le preguntaron dónde estaba José Raúl, les dijo que estaba trabajando donde su prima Ermelinda Gallardo, con motosierra. Ella estaba casada con Hernán Rehbein. Luego de un rato, llegó Raúl a la casa, acompañado de los Carabineros, dejó la motosierra en la casa y se fue detenido con los Carabineros a la comisaria de Castro. Todo lo narrado se lo contó su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz, a medida que iban ocurriendo estos hechos. Después que José Raúl fue detenido, su suegro recorrió varios lugares de la ciudad de Castro, buscándolo, pero no podía dar con su paradero, por ello le pidió ayuda a un sacerdote de la Iglesia de los Sagrados Corazones, de quien no recuerda su nombre, pero actualmente se encuentra viviendo fuera del país. Fue esta persona que finalmente encontró a Raúl en la cárcel de Chin Chin, ya que estaba cumpliendo una condena por infracción a la Ley de Armas. Una vez que supieron su paradero, sus familiares lo visitaron cada quince días, con la finalidad de llevarle víveres y cosas para su estadía. Hace presente, que durante el tiempo en que Raúl, estuvo detenido en Carabineros y en la cárcel de Puerto Montt fue duramente torturado, lo colgaban y

golpeaban y hasta lo hacían comer excrementos. Todo esto lo sabe por los dichos de Mario Contreras, César Leiva y otros que estuvieron también detenidos al igual que su cuñado. Además, durante las visitas, Raúl le contaba a Héctor, su marido, lo que sucedía, dándose este cuenta que estaba muy mal físicamente. Más tarde, luego de un año aproximadamente, Raúl fue trasladado desde la cárcel de Chin Chin, hasta el recinto penal de Ten Tén, en Castro, donde estuvo alrededor de un año más, hasta que fue dejado en libertad. Cuando José Raúl fue detenido era un hombre joven, sano, de mente clara, alto de estatura, más o menos 1,65 cm, no sabe especificarlo, pero una vez que salió de la cárcel, caminaba con mucho dolor y estaba perturbado de su mente, ya que no reconocía su casa o no sabía para donde tenía que ir. Por esos días, sus dolores se fueron haciendo muy fuertes e imposibles de resistir, fue atendido por el doctor Juvenal Hernández, quien señaló que debido a los malos tratos y torturas recibidas, tenía complicaciones con su cuerpo, por lo que aconsejó que lo trasladaran a Santiago, a fin de que con mayores adelantos médicos, pudieran ayudarlo con su recuperación. Posteriormente, debido a que Raúl no mejoraba, no dormía en la noche y gritaba de dolor de la cintura, es que su esposo lo llevó en bus hasta Santiago, recorriendo varios centros médicos y fue atendido en hospitales, sin lograr mejoría. Un día, mientras estaba sentado en la casa donde estaban alojando en Santiago, se cayó de la silla y nunca más volvió a ponerse de pie, quedando parapléjico, regresando en esas condiciones a Castro, para ello su marido tuvo que llevarlo en avión devuelta a Puerto Montt y desde allí, en avioneta hasta Castro. Más tarde, su esposo nuevamente trasladó a Raúl al hospital de Puerto Montt, lo operaron en dos oportunidades, regresando luego a su hogar. Después permaneció alrededor de dos años en la casa, falleciendo de una hemorragia interna, después de padecer por cinco años, las consecuencias de las torturadas a las que fue sometido. En varias ocasiones se entrevistó con la señora Felicia Cárdenas, en la gobernación y estaba relacionada con los Derechos Humanos y las personas que habían sido perseguidas por Carabineros. Entre los Carabineros que detuvieron a Raúl, existía uno de nombre José Aude y otro de apellido Oyarzún, esto conforme a lo que le contó su cuñada Gloria Iris Quintul, quien los reconoció cuando fueron en busca de José Raúl. Señala, además, que la mujer que inventó que su cuñado tenía armas y denunció este hecho a Carabineros, fue una vecina del campo, de nombre Ana Hernández, que vivía en Couhuinco, quien tenía simpatía con el Gobierno Militar y actualmente se encuentra fallecida.

a.2.) MARIO ENRIQUE CONTRERAS VEGA.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de fs. 71 a 72; (Tomo I) dice que para el año 1973, era comerciante y dirigente político del partido Comunista de Chile, siendo detenido con fecha 31 de diciembre de 1973, por Carabineros de Castro, supuestamente por reorganizar la resistencia al Gobierno Militar. Por lo anterior, fue enviado a la cárcel de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt, encontrándose con varias personas en la ciudad de Castro, entre las que recuerda a Raúl Quintul y Carmelo Quinchen Gómez, siendo compañero de celda de este último. En ese tiempo, todos tomaron conocimiento de los daños físicos que tenía Raúl Quintul, secuelas de las torturas a las que fue sometido antes de llegar a la cárcel, ya que habitualmente este se encontraba acostado y en ocasiones eran los compañeros quienes lo llevaban al baño. Es necesario agregar que a Carmelo Quinchen y a Raúl Quintul, los pasaron a consejo de guerra y fueron condenados al parecer por infracción a la Ley de Armas, a una pena si mal no recuerda de 22 meses. Posteriormente, un día en que se encontraban en la cárcel de Chin Chin, Quinchen y Quintul, fueron trasladados hasta la cárcel de Castro, mientras que el deponente permaneció en Puerto Montt, siendo dejado en libertad, con fecha 19 de diciembre de 1975. Una vez en libertad, se trasladó a vivir a la ciudad de Ancud, perdiendo todo contacto con la gente de Castro, hasta el año 1982, fecha en que regresó a la ciudad. Indica que se enteró de la muerte de Raúl Quintul, en una de las ocasiones que viajó a visitar a su familia a Castro, sin tener mayores noticias de su fallecimiento. Finalmente, agrega que por lo que recuerda, Raúl Quintul, presentaba lesiones en la parte baja de la espalda, especialmente heridas que se infectaron y estas lesiones le impedían poder desplazarse con normalidad, es más, en una ocasión se enteró que había quedado inválido y que permanecía en su domicilio acostado todo el día, esto sin duda lo ocasionó las torturas a las que fue sometido durante su detención.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2011, rolante de fs. 87; (Tomo I) señala que ratifica en todas sus partes lo que declaró ante la Policía de Investigaciones con fecha 18 de mayo de 2011. Y tiene entendido que las heridas que José Raúl Quintul Muñoz, tenía en el coxis alcanzaban el nivel de fracturas lo que le impedía ponerse de pie, caminar, en resumen, valerse por sus propios medios. José Quintul nunca fue atendido por las lesiones que presentaba, no fue llevado a ninguna posta, menos aún a un hospital. Sabe también que José Quintul falleció en su domicilio, había cumplido una pena de cárcel, y supone que la causa de muerte es producto de las lesiones sufridas estando privado de

libertad en calidad de detenido político. Le consta lo que dice porque estuvo detenido la primera vez desde el 31 de diciembre al 10 de febrero de 1974, y luego la segunda, desde el 28 de mayo hasta el 19 de diciembre de 1975, cree que en su segundo periodo de detención se encontró con José Quintul quien ya estaba entre los detenidos y dado que compartió celda con su compañero de causa don José Carmelo Quinchen Gómez, pudo conocer a José Quintul e inclusive atenderlo cuando no era capaz por sí mismo movilizarse, descender o ascender escaleras e inclusive realizar sus necesidades en el baño.

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 304 a 306; (Tomo I). Fue detenido primeramente por personal de Carabineros, cuando estaba en su trabajo en una empresa llamada Importado Austral, por un grupo dirigido en aquel entonces por el sargento primero de apellido Cifuentes e integrado por el entonces cabo José Aude y un Carabinero de apellido Ulloa. Esto ocurrió en la mañana del 13 de septiembre de 1973. No le exhibieron orden ni el motivo. Circulaba una lista de personas que debían presentarse en la comisaria, personas que realizaban actividades sociales de relevancia. Lo condujeron a la segunda comisaria de Carabineros en Castro, había otros detenidos y a todos los mantuvieron sentados en el piso, permaneció en esa situación durante diez días, se alimentaban con la comida que le llevaban de sus casas. Desde luego, nunca pudo bañarse, para el aseo personal utilizaban un único lavamanos y para sus necesidades existía un baño común al cual los sacaban por turno. Le parece recordar que lo interrogaron en la misma guardia, pero sin mayores formalidades. Donde estaban las armas, quien era el responsable de ellas, quien manejaba la lista del plan z, eran las preguntas recurrentes. Recuerda que circulaba un afiche dirigido a la tropa que decía “tú también estabas en la lista”, es decir, sugería que ellos y su familia iban a ser muertos

Después, se dijo que en algo de los libros había dos paquetes con balas de calibre 22, y lo trasladaron a Puerto Montt, a la cárcel de Chin Chin. Esta estaba llena, fue interrogado en la Fiscalía y después le dieron la orden de libertad

En Castro, a Pedro Quelincoy lo condujeron a las caballerizas de la Comisaria y allí lo sometieron al llamado “submarino”, un tambor petróleo vacío, lleno de agua podrida, en el cual lo sumergían. Cuando lo subieron al furgón que los llevaría a Ancud iba muy maltraer, y falleció a causa de un cáncer pulmonar. Con relación a José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció posterior a 1973, por las circunstancias que ha narrado, estuvo privado de libertad en la cárcel de Chin Chin, encontrándose con varias personas de la ciudad de Castro, entre las que

aparte de las que nombró, recuerda a Raúl Quintul y a Carmelo Quinchen Gómez, quien era su compañero de celda. Quinchén le relató las circunstancias en que ambos fueron detenidos. Resulta que aquel había comprado un revolver de aquellos procedentes de Argentina, calibre 22. A raíz de las informaciones que circulaban sobre personas detenidas se asustó y acudió a Quintul, con quien ocultaron el arma en un pozo seco que había en el predio de éste, y se ocultaron en algún bosque. Eso los hizo sospechosos y alguien los denunció, así es que se fueron detenidos por los funcionarios de Carabineros que ha mencionado y que los llevaron amarrados a la ciudad y luego trasladados a Puerto Montt junto con el arma, fueron sometidos a consejo de guerra y condenados. Dice que lo vio en Chin Chin, presentaba en su cuerpo huellas de culatazos, sobre todo en la parte baja de la espalda, y eso casi lo discapacita. Por ello tenía mucha dificultad para defecar en la taza turca en que hacían sus necesidades, y en muchas ocasiones lo ayudó apoyándolo entre dos personas. Por eso vio sus magulladuras y señales recientes de maltrato que impresionaban como culatazos. Quinchen le dijo que se los habían propinado los Carabineros en Castro. Como dijo, presentaba lesiones en la parte baja de la espalda, específicamente heridas, que se infectaron y estas lesiones le impedían poder desplazarse con normalidad. Por cierto, tanto Quintul como Quinche están muertos. Como señaló, los pasaron a consejo de guerra y fueron condenados al parecer por infracción a la Ley de Armas, a una pena que si mal no recuerda fue de 22 meses de presidio. Posteriormente, un día en que estaban en la cárcel de Chin Chin, Quinchen y Quintul fueron trasladados hasta la cárcel de Castro, mientras que el deponente permaneció en Puerto Montt, quedando en libertad el 19 de diciembre de 1975. En una de las ocasiones en que viajó a visitar a su familia en Castro, se enteró de la muerte de Raúl Quintul, sin tener mayores noticias de su fallecimiento. En una ocasión se enteró que había quedado inválido y que permanecía en su casa acostado todo el día.

a.3) CÉSAR VLADIMIR LEIVA GARRIDO

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2011, rolante de fs. 73 a 74; (Tomo I) explaya que recuerda para el mes de junio del año 1973, llegó a la ciudad de Castro proveniente de Valdivia, siendo detenido el día 27 de mayo del año 1974, por personal de Carabineros de civil de Castro, sin identificación, en su domicilio particular. En ese tiempo, permaneció tres días en la comisaría de Carabineros de Castro, donde fue golpeado, torturado y sometido a simulacro de fusilamiento, hasta que fue enviado a la ciudad de Ancud y luego a la

cárcel de Chin Chin, Puerto Montt. Una vez en la cárcel, conoció en ese lugar a Carmelo Quinchen y José Quintul, quienes estaban detenidos al igual que el deponente y eran originarios de la ciudad de Castro. Recuerda que, en esa época, estaban ubicados en celdas, junto a unas quince o veinte personas, donde el alimento que les entregaban era incomible y no contaban con atenciones médicas o asistencia de paramédicos. Es necesario indicar que José Quintul, quedó muy afectado físicamente sufría de afecciones al pecho y/o pulmón, acrecentado por la humedad, la nula atención médica y las torturas a las que fue sometido, en su trayecto hasta la cárcel de Chin Chin, los hacía pensar que podría tener tuberculosis, ya que la mayoría de las veces no era capaz de levantarse. Por ello, el deponente cuando tenía la oportunidad de salir al patio, cuando había sol, lo sacaban a la fuerza, tratando de que pudiera con esta acción, mejorar en algo su estado. Un día, José Quintul y Carmelo Quinchen, fueron sacados de la cárcel de Chin Chin y en un primer momento pensó que habían quedado en libertad, pero luego de unos días se informó que habían sido trasladados hasta la cárcel de la ciudad de Castro. Una vez que fue dejado en libertad desde la cárcel de Chin Chin, se le informó de la muerte de José Quintul, quien falleció en la ciudad de Castro, debido a problemas pulmonares y las secuelas producto de las torturas a las que fue sometido. Finalmente, indica que cuando fue detenido por Carabineros de Castro, recuerda que fue interrogado y torturado por un funcionario de apellido Cifuentes, quien se hacía llamar de apellido Villalobos, otro funcionario de nombre José Adué y otra persona de quien no recuerda su apellido, pero fue concejal de la comuna de Quemchi, en el año 1990 aproximadamente.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2011, rolante de fs. 84 a 86; (Tomo I). El 27 de mayo de 1974, se encontraba en su domicilio ubicado en calle Galvarino Riveros número 721, en Castro, y daba almuerzo a su hijo mayor a quien le faltaban tres días para cumplir dos años cuando escucha que golpean la puerta, al abrir se encuentra con tres hombres vestidos de civil quienes le preguntaron por un señor Pérez, ahí les respondió que no lo conocía y le pidieron la cédula de identidad lo que le pareció extraño que persona vestidas de civil hicieran este cometido y les respondió que para qué, les dio su nombre y les explico que vivía en ese lugar por varios meses. Insistieron y ante tal situación, les mostró la cédula, estaba presente la señora del deponente y cuando entregó su carnet a la persona que se hacía llamar Cifuentes, vio su identificación y le señaló que tenía que acompañarlos porque debía hacer una declaración explicándole a la señora del deponente que no se preocupara por qué este iba a volver ligero. 19

meses después volvió. Desde su casa fue llevado a la comisaria de Carabineros de Castro, entrando en ella fue golpeado y le manifestaron “ahora vas a hablar y te vas a encontrar con nosotros”, fue golpeado con los puños en las costillas y en distintas partes del cuerpo, le sacaron la ropa dejándolo en pantalones y de allí a una pesebrera que estaba detrás de la comisaria, al rato y estando en esa dependencia escuchó la voz de alguien que gritaba “a qué hora vamos a fusilar a este comunista” esa persona se apodaba “corazón de escarcha” y después lo fueron a sacar y los mismos individuos que llegaron a su domicilio se encargaron de amarrarlo con las manos en la espalda y nuevamente lo golpearon de manera muy distendida sin hacer preguntas ni decir nada, solo golpear y cuando lo soltaron de nuevo lo encerraron en la pesebrera; en la tarde del día de su detención lo soltaron y le preguntaban por un señor de apellido Mansilla que después supo que se trataba de un funcionario del Servicio de Seguro Social, ahí se confundió porque el deponente conoció a un señor de apellido Mansilla que era comerciante y le preguntó si estaba vivo ante lo cual nuevamente le cayeron golpes diciéndole “sí, tal por cual... está vivo”. Durante la noche lo sacaron de nuevo lo golpearon y la comida que le llevó su señora le mostraron y se la devolvieron manifestándole que no quería comer, de esto, se enteró tiempo después por que la señora del deponente le contó al igual que supo que llegaron a su hogar y registraron todo en busca de armas, quemaron libros y entre ellos quedaron uno que se titulaba “arme y desarme” y por el cual lo trasladaron como detenido a Chin Chin en Puerto Montt. La misma noche de su detención calcula, por el silencio reinante, debe haber sido las diez de la noche lo sacaron y lo metieron en un jeep, atado de manos, lo tiraron al suelo del vehículo por la puerta trasera dejándolo ahí por no sabe cuánto tiempo pero escuchó que fuera del vehículo arrastraban a alguien, escuchó quejidos, enterándose después que se trataba de don Pedro Quelincoy de la Torre, a él lo conocía porque fue delegado de gobierno en Chonchi y después lo devolvieron a la pesebrera hasta el día siguiente que lo sacaron temprano preguntándole a quien tenía que matar, naturalmente para eso no tenía respuesta, por lo que lo involucraron en el plan z, este fue el gran invento que hicieron para justificar tanta detención. Los tres días que estuvo detenido en Castro la rutina fue la misma, preguntas y golpes salvo una noche que lo sacaron, lo tiraron en un jeep y lo llevaron vendado a un lugar desconocido en donde lo pusieron de pie, lo ataron a un árbol y le ordenaron fuego y dispararon al aire, en el fondo la intencionalidad era intimidar, maltratar y un sinfín de sentimientos contradictorios

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 307 a 309 Vta; (Tomo I), El 24 de mayo de 1974 fue detenido por personal de Carabineros de Castro, vestidos de civil, sin identificación, en su domicilio particular. Golpearon la puerta, abrió y vio a tres personas, de las cuales reconoció a José Aude, a quien antes había visto de uniforme; preguntaron por un tal Pérez, le dijo que no vivía ahí, uno de los sujetos sacó su revólver, le apuntó y le pidió que exhibiera el carnet, lo que hizo, y a continuación lo detuvieron al deponente y a su amigo, sin preguntarle a este nombre ni nada. A su señora le dijeron que se trataba de hacer una declaración y que volvía prontamente. Los trasladaron caminando hasta la comisaria de Carabineros, los separaron, al deponente lo pusieron en una caballeriza, le sacaron la ropa, lo dejaron en puro pantalón, descalzo. Se fueron, después volvieron dos, uno de ellos le ató las manos a la espalda con una pitilla, con nudo que se va apretando a medida que uno las mueve y luego comenzaron los golpes de manos y de pie, con mano empuñada, fundamentalmente en el estómago y pecho, la cara no se la tocaron hasta el final. En esto no participó José Aude, él solo observaba y tomaba nota, pero se le escapó el apellido de uno de ellos, Cifuentes; el otro era Ulloa. Desde luego, nunca le exhibieron orden de detención ni lo dejaron los motivos de esta; en ese tiempo había toque de queda desde las 16:30 a 17 hrs. Hasta las 06:00 AM. Permaneció tres días en la caballeriza de la comisaria de Carabineros, el primer día su cónyuge, Bernardita Irene Caro Rojas, enfermera y matrona, de su domicilio le llevó comida, pero le dijeron que el deponente no quería comer, al segundo día botaron la comida delante del deponente; durante todo ese lapso no le permitieron asearse, sus necesidades las realizaba ahí mismo, en el suelo. En el sitio había un bebedero de los animales, una tinaja de cemento, llena de agua putrefacta porque ya no usaban caballos y en esa agua le sumergieron la cabeza en varias oportunidades. Fue en Chin Chin donde conoció a Carmelo Quinchen y a José Quintul, quienes estaban detenidos al igual que el deponente y eran originarios de la ciudad de Castro. Recuerda que en esa época, estaban ubicados en celdas, junto a unas quince o veinte personas, donde el alimento que les entregaban, era incomible y no contaban con atención médica ni asistencia de paramédicos. José Quintul, quedó muy afectado físicamente, sufría de afecciones al pecho y/o pulmón, acrecentado por la humedad, la nula atención médica y las torturas a las que había sido sometido en su trayecto hasta la cárcel de Chin Chin, los hacía pensar que podría tener tuberculosis, ya que la mayoría de las veces no era capaz de levantarse. Principalmente Carmelo Quinchen y Rodemil Cárdenas le

ayudaban a hacer sus necesidades en la taza turca, pues no podía sostenerse. A veces lo examinaba el doctor Nofal Abud, que también estaba detenido. Cuando tenían la oportunidad de salir al patio, en días soleados, lo sacaban a la fuerza, tratando de que pudiera con esta acción, mejorar en algo su estado. Un día, José Quintul y Carmelo Quinchen fueron sacados de la cárcel de Chin Chin, en un primer momento pensó que habían quedado en libertad, pero luego de unos días se informó que habían sido trasladados hasta la cárcel de Castro. Una vez que fue dejado en libertad, se enteró de la muerte de José Quintul, quien falleció en Castro, debido a problemas pulmonares y las secuelas producto de las torturas a las que fue sometido. Eso es lo que pensaban, pero nunca supieron las causas directas de su muerte.

a.4) JOSÉ LUCEDINO AUDE AÑAZCO

En declaración extrajudicial de fecha 23 de febrero de 2013, rolante de fs. 342 a 343; (Tomo I) Con respecto a los hechos por los cuales se le consulta, indica que no recuerda fecha exacta, cuando un día llegó el sargento Cifuentes y le ordena junto con Ulloa, que lo acompañaran a la población, para lo cual se trasladaron en un vehículo que conducía Ulloa, se fueron en dirección al sector alto de Castro, específicamente a Coiguinico, lugar en el cual se detuvieron a las afuera de una vivienda y descendieron los tres uniformados del carro policial. El sargento Cifuentes, recuerda que golpeo la puerta y lo atendió una mujer joven, a quien se le consultó por una persona de José Raúl Quintul Muñoz, no pudiendo escuchar cual fue su respuesta ya que el deponente se encontraba a metros de ellos, pero le parece mucho que dio indicaciones del lugar donde este señor se encontraba, por lo que procedieron a caminar unos metros e ingresaron en unos campos, en el cual dieron con esta persona que al parecer se encontraba trabajando la tierra. Inmediatamente el sargento Cifuentes, lo increpa diciéndole que le indicara donde estaban las armas, sin mayor resistencia el señor Quintul hizo entrega de un pequeño revolver que escondía dentro de los matorrales. Acto seguido, fue trasladado hasta la segunda comisaria de Castro, lugar donde permaneció en calidad de detenido por el delito de Porte de Arma, dando paso al trámite policial correspondiente. Indica que efectivamente fue integrante de la comisión civil de Carabineros de la segunda comisaria de Castro, sección que estaba a cargo de sargento Cifuentes, Ulloa y el deponente, su misión consistía en el control y obtención de antecedentes delictuales.

En declaración judicial de fecha 12 de marzo de 2014, rolante de fs. 406 a 408; (Tomo I. No recuerda la fecha exacta, por octubre o noviembre de 1973 pasó a integrar la comisión civil, eran solo tres; el jefe, sargento Carlos Cifuentes Hernández, el cabo primero Ulloa y el deponente. Les correspondía fiscalizar el cumplimiento de la ley de alcoholes, hurtos, robos. A la pregunta, no controlaban ley de armas, a veces les ordenaban realizarlo, y es lo que ocurrió con el señor Quintul, a quien le ordenaron ir a detener en el sector Cohuinco, ubicado en la cordillera de la Isla de Chiloé, hacia el oeste. No recuerda la fecha exacta, si a fines de 1973 o en el transcurso de 1974, al sargento Cifuentes, seguramente el comisario, le dio la orden de ir a detener a José Quintul, por una denuncia de infracción de ley de armas, así es que fueron en su búsqueda. Como señaló a los policiales, recuerda que Cifuentes golpeó la puerta de su casa, lo atendió una mujer joven, la que le indicó donde se encontraba, estaba en un lugar retirado de la casa, trabajando en la tierra. El sargento Cifuentes habló con él, hizo entrega de un revolver calibre 22, no sabe la marca, que tenía oculto bajo unos matorrales. A la pregunta, no sabe que explicación dio acerca de por qué tenía esa arma con él, ya que conversó solo con Cifuentes. Que recuerda el deponente no allanaron su casa. En ningún momento lo golpearon, pasó a la casa a buscar un documento, no sabe, lo trajeron a la comisaria y lo entregaron al oficial de guardia, confeccionaron el parte correspondiente y al día siguiente lo enviaron a Puerto Montt. El personal de uniforme de la comisaria hacia el traslado de detenidos, en el furgón de Carabineros. Estas misiones, como la que refiere, la cumplían vestidos de civil, portaban revólver de cargo fiscal, marca Colt, especial. El ruby extra 32, llegó después como arma de servicio. Llegaban personas a la comisaría, denunciaban a alguien y Cifuentes ordenaba que había que concurrir a tal o cual parte. No contaban con orden judicial alguna. Solo procedía obedeciendo la orden de su superior jerárquico. Traían a la persona así detenida y procedían a interrogarla de la manera que se indica en esas declaraciones.

En declaración judicial de fecha 19 de noviembre de 2014, rolante de fs. 533 a 533 vta; (Tomo II) ampliando su declaración, con respecto a Raúl Quintul Muñoz, señala que aproximadamente en el año 1974, recuerda haber concurrido en compañía del suboficial Cifuentes y el cabo Ulloa; al sector rural Coihuinco, dentro de la jurisdicción de Castro, con la finalidad de ubicar y detener a Raúl Quintul, debido a que el suboficial Cifuentes, decía que esta persona debía entregar unas armas que supuestamente tenía en su poder. Una vez que llegaron a su domicilio, preguntaron por el señor Quintul a la persona que los atendió,

diciéndole que no se encontraba en la casa, indicándoles que estaba trabajando en el campo y les dio las señas donde se encontraba. Conforme a lo anterior, se trasladaron a ese lugar, donde lo vieron a la distancia y lo llamaron que se acercara donde se encontraban. Al llegar Quintul, el suboficial Cifuentes le preguntó por las armas que supuestamente tenía, diciendo esta persona que solo tenía un revolver, por ello los condujo hasta un sector del mismo campo, donde detrás de unos arbustos, tenía oculto un revolver Argentino, calibre 22, el cual entregó en ese momento y conforme a ello, fue detenido y trasladado hasta la segunda comisaria de Castro, a fin de ser puesto a disposición de la Fiscalía Militar en Puerto Montt. Una vez que llegaron a la comisaria de Castro, nuevamente se interrogó a Quintul, esta vez al interior de la unidad policial, en las dependencias destinadas a casino, donde se ubicó al detenido sentado en una silla y se le preguntó insistentemente por las otras armas de fuego que supuestamente conforme a la información que tenía el suboficial Cifuentes, el señor Quintul mantenía en su poder, pero no obstante a los golpes, “palmetazos” con la mano abierta que le daban a Quintul, no entregó ninguna otra arma de fuego, por ello se siguió el procedimiento normal. La totalidad de las diligencias policiales que realizaban como comisión civil, se realizaban bajo las órdenes del comisario de la unidad, mayor Claudio Calderón Moraga y el subcomisario, el capitán Hernán Escobar Inostroza. Una vez que regresaron a la comisaria, le informaron de las novedades existentes, ósea si se había dado cumplimiento a lo ordenado y si se tuvo resultado positivo, este informe lo daba directamente el suboficial Cifuentes, quien era el funcionario más antiguo y se entendía directamente con la jefatura. Recuerda a Raúl Quintul, como una persona que medía 1,65 de estatura, tenía unos 30 a 35 años de edad, contextura delgada, pelo negro y corto. A la pregunta, en orden a si fue sometido a malos tratos o apremios ilegítimos, a parte de los palmetazos que mencionó, su respuesta es negativa. Por lo demás, a Quintul lo detuvieron alrededor del mediodía y al día siguiente en la mañana fue trasladado a Puerto Montt en vehículo de Carabineros, y pasó la noche dentro del cuartel.

a.5) DOMINGO ÁLVAREZ CÁRDENAS

En declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2014, rolante de fs. 411 a 412; (Tomo I) aduce que fue detenido por Carabineros de Castro que vestían de civil y que identifica como de apellidos Cifuentes, Ulloa y Aude, quienes lo trasladaron hasta la segunda comisaria de Carabineros de Castro, allí fue

interrogado por ellos en un patio del cuartel, donde había tambores con agua descompuesta en los cuales fue sumergido en varias ocasiones durante la noche por el Carabinero Aude. Al día siguiente, en un camión lo llevaron a su casa y revolvieron todo en busca de armas. Desde luego, no le mostraron ninguna orden. Dice que tenía un revolver de esos conocidos como “mata gatos” que le había regalado su hermano Armando que vivía y trabajaba en Argentina y le llevo ese regalo. Les entregó el arma que era un revolver chico y por esto fue condenado después a 540 días de presidio. Cree que estuvo detenido como ocho días en Castro y luego fue trasladado a Puerto Montt junto con Raúl Andrade, Berny Aros y Noé Cárdenas. Con relación a la pregunta, si conoció a José Quintul Muñoz cuando estuvieron en la cárcel de Chin Chin. Dice que a él también lo torturaron mucho y se encontraba en muy malas condiciones, cuando salió él quedó todavía allí y cuando estuvo en libertad murió al poco tiempo después.

b) DOCUMENTOS

b.1) Informe del Programa Continuación Ley 19.123 enviando antecedentes que poseen respecto a la víctima de autos, de fs. 12 a fs. 30 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente manera:

a) Copia certificado de defunción N°2281475 de José Raúl Quintul Muñoz, donde consta fecha de defunción 16 de mayo de 1979 a las 13:15 horas, en el Hospital de Castro.

b) Copia de informe de fecha noviembre de 1976. En el que se expresa que: El señor José Raúl Quintul Muñoz, cédula de identidad N°49543, de Castro, fue detenido, en calidad de reo político, en su lugar de trabajo en Castro, el 2 de abril de 1974, cuatro días después fue trasladado a la cárcel de Puerto Montt, donde permaneció hasta el 26 de septiembre de 1975. En esa fecha fue trasladado a la cárcel de Castro en la que permaneció hasta el 7 de julio de 1976, cuando salió libre definitivamente después de haber cumplido una condena de presidio de ochocientos dos días. Alrededor de un mes después de haber llegado a la prisión de Castro, se agudizaron los dolores a la columna que ya había sentido con intensidad leve en los últimos tres meses en Puerto Montt. Tanto el médico de Puerto Montt como el de Castro no dieron mayor importancia a esto, ya que lo atribuyeron a la posición corporal mantenida en su trabajo dentro de la prisión (tejer revestimiento de lápices con fibra plástica). Al salir libre, en julio de este año 1976, el dolor era ya muy intensidad, y veinte días después de

abandonar la prisión viajó a Santiago con el objeto de hacerse realizar algunos exámenes médicos, pero antes que estos fueran efectuados, el dolor se intensificó repentinamente hasta el punto de hacerse insoportable al más mínimo movimiento corporal. Después fue paulatinamente calmando, pero el 25 de agosto, cuando el dolor ya había disminuido mucho en intensidad, un movimiento brusco realizado por el médico al tratar de sentarlo, intensificó de nuevo el dolor y muy pronto comenzó a notar insensibilidad en las rodillas y dificultad para mover las piernas, terminando en pocos días en una paraplejia fláccida. El primer diagnóstico de los Dres. Eduardo Cornejo y Alberto Croquevielle fue cáncer a la médula. Pero exámenes más detallados de las radiografías por ellos mismos, más otros cancerólogos le condujeron a la conclusión de descartar a posibilidad de cáncer y declararse incompetentes de diagnosticar y en consecuencia también de operar. Ahora bien, a pesar de haber perdido totalmente la movilidad de las piernas y sensibilidad táctil de las mismas, siente una sensación constante como de frío desde la rodilla hasta los pies, aun cuando al tacto se observa que están a la temperatura normal. Además, ante un ruido súbito tiene la sensación de que una corriente eléctrica recorre sus piernas hasta los pies mismos. Por otra parte, cuando hace esfuerzos de mover las piernas, a pesar de no haber ninguna reacción de ellas, se observa sin embargo una leve contracción del grueso tendón situado debajo de la rodilla. Entre tanto, como consecuencia de la paraplejia, le ha sobrevenido la pérdida de la función voluntaria de la vejiga y el intestino grueso, con la consecuente dificultad de la vejiga para retener la orina y el intestino grueso realizar la evacuación. Dado el estado estacionario de la enfermedad y los síntomas más arriba descritos se puede afirmar que el enfermo puede recuperar la salud al ser tratado en un centro médico que cuente con mayores recursos científicos que los existentes en Chile.

c) Copia declaración privada de Mario Enrique Contreras Vega, de fecha 26 de abril de 1993, Chileno, cédula de identidad N° 5.264.360-0, de profesión agricultor, y actualmente Concejal de I. Municipalidad de Castro, quien voluntariamente declara lo siguiente: que conoció personalmente a don José Raúl Quintul Muñoz, de quien le consta que fue detenido por fuerzas policiales de Castro en los primeros meses de 1974, trasladado a la cárcel de Chin Chin, en Puerto Montt. Que a esa unidad carcelaria llegó en evidente estado de deterioro físico, en calidad de semi-invalido ya que habría sido ferozmente golpeado por las fuerzas policiales, los que le dañaron la columna vertebral. Que permaneció recluido en la cárcel de Puerto Montt, sufrió continuamente por los daños

recibidos, de lo que jamás pudo recuperarse, ya que dichas lesiones falleció en 1979. Que lo que declara le consta personalmente por haber permanecido en la cárcel conjuntamente con él y muchos otros presos políticos de la época.

d) Certificado de José Del Carmen Quinchén Gómez, de fecha 27 de abril de 1993. Certificado de fecha 27 de abril de 1993, chileno, cédula de identidad N° 2.768.197-2, domiciliado en la comuna de Castro, sector Ten-Ten Alto, de profesión obrero de la construcción, certifica que : en el mes de marzo de 1974 fue detenido por miembros del cuerpo de carabineros de Chile, Comisaría de Castro, en esta localidad, junto con Raúl Quintul Muñoz, quien fue golpeado, torturado y flagelado por agentes policiales, causándole graves daños físicos, tanto en el estómago como en la columna, de lo que sufrió todo el tiempo que estuvo detenido, ya que nunca fue atendido médicamente de esos males, mientras estuvo preso. Certifica, además, que ambos fueron condenados a la pena de 802 días de cárcel, siendo liberados aproximadamente en junio o julio de 1976. Lo que declara bajo petición de los familiares de José Raúl Quintul Muñoz, para ser presentado a la Comisión de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

e) Copia declaración ante la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de María Helvecia Paillacar Paillacar de fecha 28 de mayo de 1993. En lo principal ratifica todas las declaraciones anteriores. El extenso informe médico entregado fue escrito por Eliecer Paillacar, primo de ella y profesor universitario en cuyo domicilio de Stgo. Se hospedaron cuando su cuñado estuvo internado en Santiago. El contenido fue descrito y dictado por el propio afectado dado que en esos momentos estaba ya impedido de escribir a máquina por cuánto no podía sentarse. Se deja constancia que en ese acto la sra. Maria Elevecia Paillacar Paillacar muestra todos los originales que corresponden a la documentación fotocopiada que recibió hace unos días de parte del asesor jurídico de esa gobernación.

f) Resumen Historia Clínica de José Raúl Quintul Muñoz, de fecha 26 de abril de 1993. Esta consignada su hospitalización el 15.05.79, por cuadro de hemorragia digestiva alta y paraplejia. Fue controlado por el médico ese mismo día 15.05.79. a las 17:30 hrs. 19 hrs, 21 y 23 hrs. Con agravamiento progresivo. Última evaluación esta consignada el 16-05.79 a las 08:30 hrs. Con paciente grave. En la caratula se consigna su fallecimiento ese día a las 13:15 hrs.

g) Certificado médico de José Raúl Quintul Muñoz, emitido por el médico Juvenal Hernández Vidal, con fecha 25 de diciembre de 1977. Certifica

haber examinado profesionalmente al señor José Raúl Quintul Muñoz de 35 años de edad, en su domicilio, en Castro, el día 23 de diciembre de año en curso, a petición de los familiares con objeto de proceder a trasladarlo a un centro especializado si fuese necesario. El resultado clínico es coincidente respecto al diagnóstico practicado hace algunos meses en Santiago y corresponde a una afección neuroquirúrgica que requiere obligadamente de estudio y tratamiento especializado. Se recomienda, por ende, traslado urgente a un servicio de neurocirugía. El paciente presenta una paraplejia fláccida por sección medular transversa completa por aplastamiento vertebral en D11 y de posible etiología neoplásica.

h) Certificado de Gendarmería de Chile. Especificando que don José Raúl Quintul Muñoz, fue condenado a las penas de 260 días, más 540 días, por el delito de tenencia ilegal de armas, por la 1ra Fiscalía Militar de Puerto Montt. Las condenas fueron cumplidas en su totalidad según los libros de archivos que obran en esa unidad penal, empezando la misma con fecha 26 de abril de 1974 y terminando con fecha 03 de julio de 1976.

i) Resumen de ficha clínica N°253514 del Hospital Puerto Montt de Raúl Quintul Muñoz. Donde consta que el paciente hospitalizado el 05 de agosto de 1978 con los diagnósticos de paraplejia de 2 años de evolución, masas abdominales palpables en hemiabdomen inferior. La ficha clínica no tiene epicrisis ni diagnóstico ni fecha de alta.

b.2) Informe de la Fundación Documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad, de fs. 37 a fs. 40 (Tomo I); que contiene Informe sobre calificación de víctima de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, en lo pertinente consta que José Raúl Quintul Muñoz, el Consejo Superior llegó a la convicción que la muerte de José Raúl Quintul Muñoz, influyeron decisivamente las tortura a que fue sometido durante su detención por agentes del Estado y a la falta de atención médica oportuna y eficaz. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

b.3) Copia del informe del Director regional de Gendarmería de Chile que adjunta planilla con datos estadísticos de ciudadanos ingresados y egresados del Centro de cumplimiento penitenciario de Puerto Montt con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 de fs. 165 a fs. 169 (Tomo I), figurando en el número 315

José Raúl Quintul Muñoz, por el delito de tenencia ilegal de armas, con una condena de 250 días más 540 días, con fecha de ingreso 26 de abril de 1974.

16° Que prestando declaración indagatoria **LUIS DIÓGENES ULLOA BAHAMONDE** de fs. 355 a fs. 358, de fs. 404 a fs. 405 (Tomo I), de fs. 535 (Tomo II).

En **declaración extrajudicial fs. 355 a fs. 358 (tomo I)**, prestada el 10 de abril de 2013, blasona que el 16 de marzo del año 1962 ingresó a Carabineros de Chile, específicamente en la Primera Comisaría de Ancud, correspondiéndole realizar el curso de instrucción en la ciudad de Temuco. Posteriormente, regresó a la misma Primera Comisaría de Ancud, siendo enviado en el año 1988 a la Quinta Comisaría de Palena. En esta unidad permaneció alrededor de un año, siendo enviado a la Quinta Comisaría de Buin, desempeñándose en ese lugar alrededor de un año, para luego en 1969, trasladarse a la Primera Comisaría de Punta Arenas, correspondiéndole labores en esa unidad por cuatro años aproximadamente. En el año 1974 fue destinado a la Segunda Comisaría de Castro, permaneciendo en esa unidad hasta el año 1984, hasta el mes de septiembre, fecha en que se acogió a retiro voluntario con 24 años de servicio y con el grado de Sargento Segundo. Refiere que al llegar a la Segunda Comisaría de Castro, primeramente llegó a cumplir labores de orden y seguridad, pero luego de un año aproximadamente fue designado por el Comisario de ese tiempo, de quien no recuerda el nombre para integrar la Comisión Civil de la unidad. En ese tiempo la comisión civil estaba integrada por tres funcionarios, siendo el jefe el Suboficial Carlos Cifuentes Hernández, el cabo Primero José Aude Añazco y el declarante. En esos años sus misiones principales eran fiscalizar la ley de alcoholes, investigar robos, hurtos y realizar indagaciones referidas a la ley de armas. En algunas ocasiones les correspondió realizar diligencias relacionadas con temas políticos, para ello el Suboficial Cifuentes, recibía órdenes directas del Comisario y las retransmitía a ellos. Sobre la detención de José Raúl Quintul Muñoz, señala que no recuerda ese nombre como persona conocida, tampoco recuerda el hecho de haber concurrido a un sector rural de Castro a realizar su detención. Refiere que ellos como Comisión Civil realizaban varias detenciones, allanamientos y procedimientos dentro de la jurisdicción de la unidad, siempre bajo las órdenes e instrucciones primeramente del Comisario y luego del Suboficial Cifuentes, quien andaba a cargo de la patrulla. Recuerda haber tomado procedimientos por infracción a la Ley de control de armas, las cuales eran

incautadas, tanto los antecedentes, como también los detenidos eran enviados a la Fiscalía Militar de Puerto Montt. Cuando eran detenidas personas en estos procedimientos, era el suboficial Cifuentes quien las interrogaba y ordenaba que debía hacerse en ese procedimiento. Recuerda que eran ellos mismos quienes trasladaban el armamento incautado hasta la Fiscalía Militar de Puerto Montt, en tanto, los detenidos, no recuerda cómo eran trasladados hasta esa ciudad. No recuerda cuanto tiempo estuvo en la comisión civil de la Segunda Comisaría de Castro.. nunca antes se le había consultado por ninguna persona o caso que haya ocurrido en la ciudad de Castro.

En declaración extrajudicial prestada de fs. 404 a fs. 405 (Tomo I), el 12 de marzo de 2014, ratifica en todas sus partes su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones y cuya acta se encuentra agregada a fs. 355. Acota que con fecha 16 de marzo del año 1962, cuando tenía 19 años, ingresó a Carabineros de Chile, específicamente en la Primera Comisaría de Ancud, realizando el curso de instrucción en Temuco. Posteriormente regresó a la misma Primera Comisaría de Ancud, con el grado de Carabinero. En julio de 1967 contrajo matrimonio con doña María Julia Almonacid Torres, con quien tuvieron tres hijos, todos varones, Luis Ruperto, Alex Roberto y Cristian Patricio, todos Ulloa Almonacid, nacidos en 1968, 1969 y 1978, todos ellos pertenecen a Carabineros de Chile; el mayor Sargento Primero, el segundo Sargento Segundo y el tercero cabo Primero, no sabe en qué unidad presta servicios el primero y el último, pero sabe que el segundo pertenece al orfeón. Su cónyuge falleció en octubre de 2006. En 1968 fue enviado a la Quinta Comisaría de Palena, donde permaneció alrededor de un año, para ser enviado después a la Séptima Comisaría de Buin, desempeñándose en esa unidad aproximadamente un año, para luego en 1969 trasladarse a la Primera Comisaría de Punta Arenas, en la que prestó servicios por cuatro años. Posteriormente en 1974, le parece que en el mes de marzo, fue destinado a la Segunda Comisaría de Castro, tenía alrededor de 32 años, con el grado de Cabo Primero, permaneciendo en esa unidad hasta 1984. En septiembre de ese año se acogió a retiro voluntario, con 24 años de servicio y con el grado de sargento Segundo. No recuerda el nombre de los oficiales que hubo en esa época, en esa Comisaría. De la nómina que se le lee, recuerda al Mayor Claudio Calderón Moraga y al Capitán de sanidad Barrientos. El Teniente Lemaitre estaba a cargo de la Tenencia de Chonchi. A la Segunda Comisaría de Castro llegó a cumplir labores de orden y seguridad, pero luego de

aproximadamente un año fue designado por el comisario de la época, cuyo nombre no recuerda, para integrar la comisión civil, que integraban tres funcionarios, el Suboficial Carlos Cifuentes Hernández como jefe, el Cabo Primero José Aude Añazco y el deponente. Su misión principal consistía en fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Alcoholes, investigar delitos de robo, hurtos y realizar investigaciones referidas a la Ley de control de armas. A veces realizaban diligencias relacionadas con temas políticos, para ello, el suboficial Cifuentes recibía órdenes directas del Comisario y luego las retransmitía a ellos. Respecto a la detención de José Raúl Quintul Muñoz, no recuerda su nombre, así como tampoco recuerda el hecho de haber concurrido a un sector rural de Castro para detenerlo. Efectivamente como comisión civil realizaban detenciones, allanamientos y procedimientos dentro del territorio jurisdiccional de la unidad, siempre bajo las órdenes e instrucciones, primeramente del Comisario y luego del Suboficial Cifuentes, quien como dijo, estaba al mando de la patrulla. En relación a las armas que utilizaban eran revólveres marca Ruby Extra, calibre 32, por lo que general cumplían su servicio vestidos de civil, se movilizaban en vehículos particulares ya que no disponían de vehículo fiscal. La Comisaría disponía de dos carros policiales, para servicio normal. Solo en casos especiales, como los desfiles, portaban carabinas marca Mauser. También cumplían procedimientos por infracción a la ley de control de armas, las cuales eran incautadas y tanto los antecedentes, como también los detenidos eran puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Puerto Montt. Los detenidos eran interrogados por el Suboficial Cifuentes y él emitía las ordenes que debían ejecutar en ese procedimiento. Ellos debían trasladar el armamento incautado hasta la Fiscalía Militar de Puerto Montt. No recuerda cómo se trasladaba a los detenidos hasta esa ciudad. No recuerda cuánto tiempo permaneció en la Comisión Civil de la Segunda Comisaría de Castro. A sus compañeros, antes mencionados, no los ha visto desde hace años. Una vez anduvo en Temuco, se le ocurrió mirar la guía telefónica y el apellido Cifuentes, lo llamó y estaba viviendo en Padre Las Casas. Es lo que puede señalar, respondiendo las preguntas que se le han formulado, se deja constancia que no puede firmar el acta debido a la carencia de impresora, por cuanto para proceder a esa diligencia el Ministro Instructor se trasladó al lugar de residencia del entrevistado, quien debido a una trombosis que le afectó el costado derecho presenta dificultad para desplazarse.

En declaración judicial rolante a fs. 535 (Tomo II), de fecha 19 de noviembre de 2014. Ampliando su declaración de fs. 404, respecto a Raúl Quintul

Muñoz, indica, como lo mencionó en su declaración anterior que no recuerda ningún antecedente respecto a la detención de esa persona, debido a que ha pasado mucho tiempo y por más que trate de recordar no es posible. Preguntado sobre que funcionario y a quien se le daba cuenta a la jefatura de las novedades y procedimiento existentes, era el jefe de la patrulla, el más antiguo, es decir el Suboficial Carlos Cifuentes, quien informaba los detalles del procedimiento que se tomara al Comisario, Mayor Calderón Moraga, si estaba presente en la unidad, sino al Subcomisario, Capitán Hernán Escobar, quienes a su vez daban las instrucciones a seguir.

17°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE**, quien fue sometido a proceso a **fs. 881 a 914 (Tomo III)**, con fecha 07 de abril de 2021. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1.090 a 1.117 (Tomo III)**, con fecha 02 de octubre de 2021, como autor de los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos** en su carácter de lesa humanidad en la persona de José Raúl Quintul Muñoz, perpetrados en la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, en el mes de abril de 1974; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

a.1) MARÍA HELVECIA PAILLACAR PAILLACAR

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2011, rolante de fs. 68 a 70; (Tomo I) dice que fue cuñada de José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció el día 16 de mayo de 1979, en el hospital de Castro. Es el caso que para el año 1973, residía en el sector de Rilan, comuna de Castro. En ese tiempo, siendo el año 1974, mantenía una relación sentimental con Héctor Septimio Quintul Muñoz y en aquella época la deponente vivía en este domicilio, en compañía de su madre, siendo como parte de la familia de Héctor. Más tarde, en el mes de mayo del año 1974, se enteró que José Raúl fue detenido por Carabineros de

Castro, quienes llegaron a la casa de la familia, ubicada en el sector Coihuinco, dijeron que andaban buscando a Raúl. En ese momento, estas personas comenzaron a registrar toda la casa, a la vez que causaban destrozos y rompían todo lo que había su paso, aduciendo que andaban buscando armas. Posteriormente, los Carabineros fueron a buscar a don Eliseo quien era el padre de Héctor y José Raúl, a quien trajeron desde el campo donde estaba trabajando, apuntando con las armas que portaban los Carabineros, quienes no conformes con su avanzada edad, lo amenazaron y consultaron donde estaba Raúl, en ese minuto se les dijo que estaba trabajando en el campo de Hernán Rehbein, lugar cercano a la casa, por ellos los Carabineros se fueron del lugar, supuestamente en busca de José Raúl. Posteriormente, luego de un rato, llegó Raúl a la casa, acompañado de los Carabineros, quienes fueron a detenerlo y lo encontraron cortando leña con una motosierra en el campo. En ese minuto, Raúl dejó la motosierra en la casa y se fue detenido con estos funcionarios a la Comisaría de Castro. Todo lo narrado en la actualidad, se lo contó su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz. En ese tiempo, su suegro recorrió varios lugares de Castro, en busca de Raúl, pero no podía dar con su paradero, por ello le solicitó ayuda a un sacerdote de la iglesia de los Sagrados Corazones, quien no recuerda su nombre, pero actualmente se encuentra al parecer fuera del país. Fue esta persona quien finalmente encontró a Raúl, en la cárcel de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt, ya que estaba cumpliendo una condena por Infracción a la Ley de Armas, siendo visitado por la deponente cada quince días, con la finalidad de llevarle víveres y cosas para su estadía. Hace presente que durante el tiempo en que Raúl estuvo detenido en Carabineros, y en la cárcel de Puerto Montt, fue duramente torturado, lo colgaban y golpeaban, sin tener compasión. Durante las visitas, Raúl le contaba a su hermano lo que sucedía, dándose cuenta de que estaba muy mal físicamente. Más tarde, luego de un año aproximadamente Raúl fue trasladado desde la cárcel de Chin Chin, hasta el recinto penal de Castro, donde estuvo alrededor de un año más, hasta que fue dejado en libertad. Una vez que José Raúl salió de la cárcel, caminaba con mucho dolor y estaba perturbado de mente, ya que no reconocía su casa o para donde tenía que ir. Por esos días, sus dolores se hicieron muy fuertes e imposibles de resistir, siendo atendido por el doctor Juvenal Hernández quien señaló que, debido a los malos tratos y las torturas recibidas, tenía múltiples lesiones en su cuerpo, por lo que el médico aconsejó que lo trasladaran hasta Santiago, a fin de que, con mayores adelantos médicos, pudieran ayudarlo en su recuperación. Posteriormente debido a que Raúl no

mejoraba, no dormía en la noche y gritaba de dolor de la cintura, es que su esposo viajó en bus con su hermano hasta Santiago, recorriendo varios centros médicos y siendo atendido en hospitales, sin lograr mejorar a Raúl. Un día mientras estaba sentado en la casa donde vivían en Santiago, en un momento éste se cayó de la silla y nunca más volvió a ponerse de pie, quedando parapléjico, regresando en esas condiciones a Castro, para ello su marido tuvo que volverse en avión a Puerto Montt y desde allí, en avioneta hasta Castro. Más tarde, su esposo nuevamente trasladó a su cuñado Raúl, esta vez a la ciudad de Puerto Montt, siendo atendido y operado en dos oportunidades en el hospital de la ciudad, regresando luego a su hogar. Seguidamente, la vida de Raúl fue muy complicada, ya que sufría mucho por las lesiones que tenía, permaneciendo alrededor de dos años en la casa, falleciendo luego de una hemorragia interna, después de padecer por cinco años, las consecuencias de las torturas que fue sometido, durante el tiempo en que estuvo detenido. Es necesario agregar que, los Carabineros que estuvieron en la casa de sus suegros y que detuvieron a Raúl, estuvo uno de nombre José Aude y había otro de apellido Oyarzún, esto conforme a lo que le comentó su cuñada. Señala, además, que la mujer que inventó que su cuñado tenía armas y denunció este hecho a los Carabineros, fue una vecina del campo, de nombre Ana Hernández, quien tenía simpatía con el Gobierno Militar y actualmente se encuentra fallecida.

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 302 a 303 Vta; (Tomo I) Explaya que en mayo de 1974, la llamó por teléfono su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz, quien vivía allí con su padre José Eliseo Quintul Quintul y su mamá María Rosa Muñoz Hernández, actualmente fallecidos, al igual que tres de sus 6 hijos para informarle que habían ido funcionarios de Carabineros en busca de José Raúl, registraron la casa, provocaron destrozos, hicieron pedazos los colchones buscando armamento, ya que estaba denunciado por tener armamento y ser dirigente socialista. A causa de esto a la finada Rosa le dio un ataque al corazón y tuvieron que llevarla al médico. Posteriormente, Carabineros con armas pasaron a la casa, preguntando por don Eliseo, su cuñada les dijo que estaba cortando leña en un lugar cercano a la casa y fueron a buscarlo y le preguntaron dónde estaba José Raúl, les dijo que estaba trabajando donde su prima Ermelinda Gallardo, con motosierra. Ella estaba casada con Hernán Rehbein. Luego de un rato, llegó Raúl a la casa, acompañado de los Carabineros, dejó la motosierra en la casa y se fue detenido con los Carabineros a la comisaria de Castro. Todo lo narrado se lo contó su cuñada Gloria Iris Quintul Muñoz, a

medida que iban ocurriendo estos hechos. Después que José Raúl fue detenido, su suegro recorrió varios lugares de la ciudad de Castro, buscándolo, pero no podía dar con su paradero, por ello le pidió ayuda a un sacerdote de la Iglesia de los Sagrados Corazones, de quien no recuerda su nombre, pero actualmente se encuentra viviendo fuera del país. Fue esta persona que finalmente encontró a Raúl en la cárcel de Chin Chin, ya que estaba cumpliendo una condena por infracción a la Ley de Armas. Una vez que supieron su paradero, sus familiares lo visitaron cada quince días, con la finalidad de llevarle víveres y cosas para su estadía. Hace presente, que durante el tiempo en que Raúl, estuvo detenido en Carabineros y en la cárcel de Puerto Montt fue duramente torturado, lo colgaban y golpeaban y hasta lo hacían comer excrementos. Todo esto lo sabe por los dichos de Mario Contreras, César Leiva y otros que estuvieron también detenidos al igual que su cuñado. Además, durante las visitas, Raúl le contaba a Héctor, su marido, lo que sucedía, dándose este cuenta que estaba muy mal físicamente. Más tarde, luego de un año aproximadamente, Raúl fue trasladado desde la cárcel de Chin Chin, hasta el recinto penal de Ten Tén, en Castro, donde estuvo alrededor de un año más, hasta que fue dejado en libertad. Cuando José Raúl fue detenido era un hombre joven, sano, de mente clara, alto de estatura, más o menos 1,65 cm, no sabe especificarlo, pero una vez que salió de la cárcel, caminaba con mucho dolor y estaba perturbado de su mente, ya que no reconocía su casa o no sabía para donde tenía que ir. Por esos días, sus dolores se fueron haciendo muy fuertes e imposibles de resistir, fue atendido por el doctor Juvenal Hernández, quien señaló que debido a los malos tratos y torturas recibidas, tenía complicaciones con su cuerpo, por lo que aconsejó que lo trasladaran a Santiago, a fin de que con mayores adelantos médicos, pudieran ayudarlo con su recuperación. Posteriormente, debido a que Raúl no mejoraba, no dormía en la noche y gritaba de dolor de la cintura, es que su esposo lo llevó en bus hasta Santiago, recorriendo varios centros médicos y fue atendido en hospitales, sin lograr mejoría. Un día, mientras estaba sentado en la casa donde estaban alojando en Santiago, se cayó de la silla y nunca más volvió a ponerse de pie, quedando parapléjico, regresando en esas condiciones a Castro, para ello su marido tuvo que llevarlo en avión devuelta a Puerto Montt y desde allí, en avioneta hasta Castro. Más tarde, su esposo nuevamente trasladó a Raúl al hospital de Puerto Montt, lo operaron en dos oportunidades, regresando luego a su hogar. Después permaneció alrededor de dos años en la casa, falleciendo de una hemorragia interna, después de padecer por cinco años, las consecuencias de las torturadas a

las que fue sometido. En varias ocasiones se entrevistó con la señora Felicia Cárdenas, en la gobernación y estaba relacionada con los Derechos Humanos y las personas que habían sido perseguidas por Carabineros. Entre los Carabineros que detuvieron a Raúl, existía uno de nombre José Aude y otro de apellido Oyarzún, esto conforme a lo que le contó su cuñada Gloria Iris Quintul, quien los reconoció cuando fueron en busca de José Raúl. Señala, además, que la mujer que inventó que su cuñado tenía armas y denunció este hecho a Carabineros, fue una vecina del campo, de nombre Ana Hernández, que vivía en Couhuinco, quien tenía simpatía con el Gobierno Militar y actualmente se encuentra fallecida.

a.2) MARIO ENRIQUE CONTRERAS VEGA.

En declaración extrajudicial de fecha 18 de mayo de 2011, rolante de fs. 71 a 72; (Tomo I) dice que para el año 1973, era comerciante y dirigente político del partido Comunista de Chile, siendo detenido con fecha 31 de diciembre de 1973, por Carabineros de Castro, supuestamente por reorganizar la resistencia al Gobierno Militar. Por lo anterior, fue enviado a la cárcel de Chin Chin en la ciudad de Puerto Montt, encontrándose con varias personas en la ciudad de Castro, entre las que recuerda a Raúl Quintul y Carmelo Quinchen Gómez, siendo compañero de celda de este último. En ese tiempo, todos tomaron conocimiento de los daños físicos que tenía Raúl Quintul, secuelas de las torturas a las que fue sometido antes de llegar a la cárcel, ya que habitualmente este se encontraba acostado y en ocasiones eran los compañeros quienes lo llevaban al baño. Es necesario agregar que a Carmelo Quinchen y a Raúl Quintul, los pasaron a consejo de guerra y fueron condenados al parecer por infracción a la Ley de Armas, a una pena si mal no recuerda de 22 meses. Posteriormente, un día en que se encontraban en la cárcel de Chin Chin, Quinchen y Quintul, fueron trasladados hasta la cárcel de Castro, mientras que el deponente permaneció en Puerto Montt, siendo dejado en libertad, con fecha 19 de diciembre de 1975. Una vez en libertad, se trasladó a vivir a la ciudad de Ancud, perdiendo todo contacto con la gente de Castro, hasta el año 1982, fecha en que regresó a la ciudad. Indica que se enteró de la muerte de Raúl Quintul, en una de las ocasiones que viajó a visitar a su familia a Castro, sin tener mayores noticias de su fallecimiento. Finalmente, agrega que por lo que recuerda, Raúl Quintul, presentaba lesiones en la parte baja de la espalda, especialmente heridas que se infectaron y estas lesiones le impedían poder desplazarse con normalidad, es más, en una ocasión se enteró que había quedado inválido y que permanecía en su domicilio acostado

todo el día, esto sin duda lo ocasionó las torturas a las que fue sometido durante su detención.

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2011, rolante de fs. 87; (Tomo I) señala que ratifica en todas sus partes lo que declaró ante la Policía de Investigaciones con fecha 18 de mayo de 2011. Y tiene entendido que las heridas que José Raúl Quintul Muñoz, tenía en el coxis alcanzaban el nivel de fracturas lo que le impedía ponerse de pie, caminar, en resumen, valerse por sus propios medios. José Quintul nunca fue atendido por las lesiones que presentaba, no fue llevado a ninguna posta, menos aún a un hospital. Sabe también que José Quintul falleció en su domicilio, había cumplido una pena de cárcel, y supone que la causa de muerte es producto de las lesiones sufridas estando privado de libertad en calidad de detenido político. Le consta lo que dice porque estuvo detenido la primera vez desde el 31 de diciembre al 10 de febrero de 1974, y luego la segunda, desde el 28 de mayo hasta el 19 de diciembre de 1975, cree que en su segundo periodo de detención se encontró con José Quintul quien ya estaba entre los detenidos y dado que compartió celda con su compañero de causa don José Carmelo Quinchen Gómez, pudo conocer a José Quintul e inclusive atenderlo cuando no era capaz por sí mismo movilizarse, descender o ascender escaleras e inclusive realizar sus necesidades en el baño.

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 304 a 306; (Tomo I). Fue detenido primeramente por personal de Carabineros, cuando estaba en su trabajo en una empresa llamada Importado Austral, por un grupo dirigido en aquel entonces por el sargento primero de apellido Cifuentes e integrado por el entonces cabo José Aude y un Carabinero de apellido Ulloa. Esto ocurrió en la mañana del 13 de septiembre de 1973. No le exhibieron orden ni el motivo. Circulaba una lista de personas que debían presentarse en la comisaria, personas que realizaban actividades sociales de relevancia. Lo condujeron a la segunda comisaria de Carabineros en Castro, había otros detenidos y a todos los mantuvieron sentados en el piso, permaneció en esa situación durante diez días, se alimentaban con la comida que le llevaban de sus casas. Desde luego, nunca pudo bañarse, para el aseo personal utilizaban un único lavamanos y para sus necesidades existía un baño común al cual los sacaban por turno. Le parece recordar que lo interrogaron en la misma guardia, pero sin mayores formalidades. Donde estaban las armas, quien era el responsable de ellas, quien manejaba la lista del plan z, eran las preguntas recurrentes. Recuerda que circulaba un afiche

dirigido a la tropa que decía “tú también estabas en la lista”, es decir, sugería que ellos y su familia iban a ser muertos

Después, se dijo que en algo de los libros había dos paquetes con balas de calibre 22, y lo trasladaron a Puerto Montt, a la cárcel de Chin Chin. Esta estaba llena, fue interrogado en la Fiscalía y después le dieron la orden de libertad

En Castro, a Pedro Quelincoy lo condujeron a las caballerizas de la Comisaria y allí lo sometieron al llamado “submarino”, un tambor petróleo vacío, lleno de agua podrida, en el cual lo sumergían. Cuando lo subieron al furgón que los llevaría a Ancud iba muy maltraer, y falleció a causa de un cáncer pulmonar. Con relación a José Raúl Quintul Muñoz, quien falleció posterior a 1973, por las circunstancias que ha narrado, estuvo privado de libertad en la cárcel de Chin Chin, encontrándose con varias personas de la ciudad de Castro, entre las que aparte de las que nombró, recuerda a Raúl Quintul y a Carmelo Quinchen Gómez, quien era su compañero de celda. Quinchén le relató las circunstancias en que ambos fueron detenidos. Resulta que aquel había comprado un revolver de aquellos procedentes de Argentina, calibre 22. A raíz de las informaciones que circulaban sobre personas detenidas se asustó y acudió a Quintul, con quien ocultaron el arma en un pozo seco que había en el predio de éste, y se ocultaron en algún bosque. Eso los hizo sospechosos y alguien los denunció, así es que se fueron detenidos por los funcionarios de Carabineros que ha mencionado y que los llevaron amarrados a la ciudad y luego trasladados a Puerto Montt junto con el arma, fueron sometidos a consejo de guerra y condenados. Dice que lo vio en Chin Chin, presentaba en su cuerpo huellas de culatazos, sobre todo en la parte baja de la espalda, y eso casi lo discapacita. Por ello tenía mucha dificultada para defecar en la taza turca en que hacían sus necesidades, y en muchas ocasiones lo ayudó apoyándolo entre dos personas. Por eso vio sus magulladuras y señales recientes de maltrato que impresionaban como culatazos. Quinchen le dijo que se los habían propinado los Carabineros en Castro. Como dijo, presentaba lesiones en la parte baja de la espalda, específicamente heridas, que se infectaron y estas lesiones le impedían poder desplazarse con normalidad. Por cierto, tanto Quintul como Quinche están muertos. Como señaló, los pasaron a consejo de guerra y fueron condenados al parecer por infracción a la Ley de Armas, a una pena que si mal no recuerda fue de 22 meses de presidio. Posteriormente, un día en que estaban en la cárcel de Chin Chin, Quinchen y Quintul fueron trasladados hasta la cárcel de Castro, mientras que el deponente permaneció en Puerto Montt, quedando en libertad el 19 de diciembre de 1975. En una de las ocasiones en que

viajó a visitar a su familia en Castro, se enteró de la muerte de Raúl Quintul, sin tener mayores noticias de su fallecimiento. En una ocasión se enteró que había quedado inválido y que permanecía en su casa acostado todo el día.

a.3) CÉSAR VLADIMIR LEIVA GARRIDO

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2011, rolante de fs. 73 a 74; (Tomo I) explana que recuerda para el mes de junio del año 1973, llegó a la ciudad de Castro proveniente de Valdivia, siendo detenido el día 27 de mayo del año 1974, por personal de Carabineros de civil de Castro, sin identificación, en su domicilio particular. En ese tiempo, permaneció tres días en la comisaria de Carabineros de Castro, donde fue golpeado, torturado y sometido a simulacro de fusilamiento, hasta que fue enviado a la ciudad de Ancud y luego a la cárcel de Chin Chin, Puerto Montt. Una vez en la cárcel, conoció en ese lugar a Carmelo Quinchen y José Quintul, quienes estaban detenidos al igual que el deponente y eran originarios de la ciudad de Castro. Recuerda que, en esa época, estaban ubicados en celdas, junto a unas quince o veinte personas, donde el alimento que les entregaban era incomible y no contaban con atenciones médicas o asistencia de paramédicos. Es necesario indicar que José Quintul, quedó muy afectado físicamente sufría de afecciones al pecho y/o pulmón, acrecentado por la humedad, la nula atención médica y las torturas a las que fue sometido, en su trayecto hasta la cárcel de Chin Chin, los hacía pensar que podría tener tuberculosis, ya que la mayoría de las veces no era capaz de levantarse. Por ello, el deponente cuando tenía la oportunidad de salir al patio, cuando había sol, lo sacaban a la fuerza, tratando de que pudiera con esta acción, mejorar en algo su estado. Un día, José Quintul y Carmelo Quinchen, fueron sacados de la cárcel de Chin Chin y en un primer momento pensó que habían quedado en libertad, pero luego de unos días se informó que habían sido trasladados hasta la cárcel de la ciudad de Castro. Una vez que fue dejado en libertad desde la cárcel de Chin Chin, se le informó de la muerte de José Quintul, quien falleció en la ciudad de Castro, debido a problemas pulmonares y las secuelas producto de las torturas a las que fue sometido. Finalmente, indica que cuando fue detenido por Carabineros de Castro, recuerda que fue interrogado y torturado por un funcionario de apellido Cifuentes, quien se hacía llamar de apellido Villalobos, otro funcionario de nombre José Adué y otra persona de quien no recuerda su apellido, pero fue concejal de la comuna de Quemchi, en el año 1990 aproximadamente.

En declaración judicial de fecha 12 de agosto de 2011, rolante de fs. 84 a 86; (Tomo I). El 27 de mayo de 1974, se encontraba en su domicilio ubicado en calle Galvarino Riveros número 721, en Castro, y daba almuerzo a su hijo mayor a quien le faltaban tres días para cumplir dos años cuando escucha que golpean la puerta, al abrir se encuentra con tres hombres vestidos de civil quienes le preguntaron por un señor Pérez, ahí les respondió que no lo conocía y le pidieron la cédula de identidad lo que le pareció extraño que persona vestidas de civil hicieran este cometido y les respondió que para qué, les dio su nombre y les explico que vivía en ese lugar por varios meses. Insistieron y ante tal situación, les mostró la cédula, estaba presente la señora del deponente y cuando entregó su carnet a la persona que se hacía llamar Cifuentes, vio su identificación y le señaló que tenía que acompañarlos porque debía hacer una declaración explicándole a la señora del deponente que no se preocupara por qué este iba a volver ligero. 19 meses después volvió. Desde su casa fue llevado a la comisaria de Carabineros de Castro, entrando en ella fue golpeado y le manifestaron “ahora vas a hablar y te vas a encontrar con nosotros”, fue golpeado con los puños en las costillas y en distintas partes del cuerpo, le sacaron la ropa dejándolo en pantalones y de allí a una pesebrera que estaba detrás de la comisaria, al rato y estando en esa dependencia escuchó la voz de alguien que gritaba “a qué hora vamos a fusilar a este comunista” esa persona se apodaba “corazón de escarcha” y después lo fueron a sacar y los mismos individuos que llegaron a su domicilio se encargaron de amarrarlo con las manos en la espalda y nuevamente lo golpearon de manera muy distendida sin hacer preguntas ni decir nada, solo golpear y cuando lo soltaron de nuevo lo encerraron en la pesebrera; en la tarde del día de su detención lo soltaron y le preguntaban por un señor de apellido Mansilla que después supo que se trataba de un funcionario del Servicio de Seguro Social, ahí se confundió porque el deponente conoció a un señor de apellido Mansilla que era comerciante y le preguntó si estaba vivo ante lo cual nuevamente le cayeron golpes diciéndole “sí, tal por cual... está vivo”. Durante la noche le sacaron de nuevo lo golpearon y la comida que le llevó su señora le mostraron y se la devolvieron manifestándole que no quería comer, de esto, se enteró tiempo después por que la señora del deponente le contó al igual que supo que llegaron a su hogar y registraron todo en busca de armas, quemaron libros y entre ellos quedaron uno que se titulaba “arme y desarme” y por el cual lo trasladaron como detenido a Chin Chin en Puerto Montt. La misma noche de su detención calcula, por el silencio reinante, debe haber sido las diez de la noche lo sacaron y lo

metieron en un jeep, atado de manos, lo tiraron al suelo del vehículo por la puerta trasera dejándolo ahí por no sabe cuánto tiempo pero escuchó que fuera del vehículo arrastraban a alguien, escuchó quejidos, enterándose después que se trataba de don Pedro Quelincoy de la Torre, a él lo conocía porque fue delegado de gobierno en Chonchi y después lo devolvieron a la pesebrera hasta el día siguiente que lo sacaron temprano preguntándole a quien tenía que matar, naturalmente para eso no tenía respuesta, por lo que lo involucraron en el plan z, este fue el gran invento que hicieron para justificar tanta detención. Los tres días que estuvo detenido en Castro la rutina fue la misma, preguntas y golpes salvo una noche que lo sacaron, lo tiraron en un jeep y lo llevaron vendado a un lugar desconocido en donde lo pusieron de pie, lo ataron a un árbol y le ordenaron fuego y dispararon al aire, en el fondo la intencionalidad era intimidar, maltratar y un sinnúmero de sentimientos contradictorios

En declaración judicial de fecha 30 de enero de 2013, rolante de fs. 307 a 309 Vta; (Tomo I), El 24 de mayo de 1974 fue detenido por personal de Carabineros de Castro, vestidos de civil, sin identificación, en su domicilio particular. Golpearon la puerta, abrió y vio a tres personas, de las cuales reconoció a José Aude, a quien antes había visto de uniforme; preguntaron por un tal Pérez, le dijo que no vivía ahí, uno de los sujetos sacó su revólver, le apuntó y le pidió que exhibiera el carnet, lo que hizo, y a continuación lo detuvieron al deponente y a su amigo, sin preguntarle a este nombre ni nada. A su señora le dijeron que se trataba de hacer una declaración y que volvía prontamente. Los trasladaron caminando hasta la comisaria de Carabineros, los separaron, al deponente lo pusieron en una caballeriza, le sacaron la ropa, lo dejaron en puro pantalón, descalzo. Se fueron, después volvieron dos, uno de ellos le ató las manos a la espalda con una pitilla, con nudo que se va apretando a medida que uno las mueve y luego comenzaron los golpes de manos y de pie, con mano empuñada, fundamentalmente en el estómago y pecho, la cara no se la tocaron hasta el final. En esto no participó José Aude, él solo observaba y tomaba nota, pero se le escapó el apellido de uno de ellos, Cifuentes; el otro era Ulloa. Desde luego, nunca le exhibieron orden de detención ni lo dejaron los motivos de esta; en ese tiempo había toque de queda desde las 16:30 a 17 hrs. Hasta las 06:00 AM. Permaneció tres días en la caballeriza de la comisaria de Carabineros, el primer día su cónyuge, Bernardita Irene Caro Rojas, enfermera y matrona, de su domicilio le llevó comida, pero le dijeron que el deponente no quería comer, al segundo día botaron la comida delante del deponente; durante todo ese lapso no le permitieron

asearse, sus necesidades las realizaba ahí mismo, en el suelo. En el sitio había un bebedero de los animales, una tinaja de cemento, llena de agua putrefacta porque ya no usaban caballos y en esa agua le sumergieron la cabeza en varias oportunidades. Fue en Chin Chin donde conoció a Carmelo Quinchen y a José Quintul, quienes estaban detenidos al igual que el deponente y eran originarios de la ciudad de Castro. Recuerda que en esa época, estaban ubicados en celdas, junto a unas quince o veinte personas, donde el alimento que les entregaban, era incomible y no contaban con atención médica ni asistencia de paramédicos. José Quintul, quedó muy afectado físicamente, sufría de afecciones al pecho y/o pulmón, acrecentado por la humedad, la nula atención médica y las torturas a las que había sido sometido en su trayecto hasta la cárcel de Chin Chin, los hacía pensar que podría tener tuberculosis, ya que la mayoría de las veces no era capaz de levantarse. Principalmente Carmelo Quinchen y Rodemil Cárdenas le ayudaban a hacer sus necesidades en la taza turca, pues no podía sostenerse. A veces lo examinaba el doctor Nofal Abud, que también estaba detenido. Cuando tenían la oportunidad de salir al patio, en días soleados, lo sacaban a la fuerza, tratando de que pudiera con esta acción, mejorar en algo su estado. Un día, José Quintul y Carmelo Quinchen fueron sacados de la cárcel de Chin Chin, en un primer momento pensó que habían quedado en libertad, pero luego de unos días se informó que habían sido trasladados hasta la cárcel de Castro. Una vez que fue dejado en libertad, se enteró de la muerte de José Quintul, quien falleció en Castro, debido a problemas pulmonares y las secuelas producto de las torturas a las que fue sometido. Eso es lo que pensaban, pero nunca supieron las causas directas de su muerte.

a.4) JOSÉ LUCEDINO AUDE AÑAZCO

En declaración extrajudicial de fecha 23 de febrero de 2013, rolante de fs. 342 a 343; (Tomo I) Con respecto a los hechos por los cuales se le consulta, indica que no recuerda fecha exacta, cuando un día llegó el sargento Cifuentes y le ordena junto con Ulloa, que lo acompañaran a la población, para lo cual se trasladaron en un vehículo que conducía Ulloa, se fueron en dirección al sector alto de Castro, específicamente a Coiguinico, lugar en el cual se detuvieron a las afuera de una vivienda y descendieron los tres uniformados del carro policial. El sargento Cifuentes, recuerda que golpeo la puerta y lo atendió una mujer joven, a quien se le consultó por una persona de José Raúl Quintul Muñoz, no pudiendo escuchar cual fue su respuesta ya que el deponente se encontraba a metros de

ellos, pero le parece mucho que dio indicaciones del lugar donde este señor se encontraba, por lo que procedieron a caminar unos metros e ingresaron en unos campos, en el cual dieron con esta persona que al parecer se encontraba trabajando la tierra. Inmediatamente el sargento Cifuentes, lo increpa diciéndole que le indicara donde estaban las armas, sin mayor resistencia el señor Quintul hizo entrega de un pequeño revolver que escondía dentro de los matorrales. Acto seguido, fue trasladado hasta la segunda comisaria de Castro, lugar donde permaneció en calidad de detenido por el delito de Porte de Arma, dando paso al trámite policial correspondiente. Indica que efectivamente fue integrante de la comisión civil de Carabineros de la segunda comisaria de Castro, sección que estaba a cargo de sargento Cifuentes, Ulloa y el deponente, su misión consistía en el control y obtención de antecedentes delictuales.

En declaración judicial de fecha 12 de marzo de 2014, rolante de fs. 406 a 408; (Tomo I. No recuerda la fecha exacta, por octubre o noviembre de 1973 pasó a integrar la comisión civil, eran solo tres; el jefe, sargento Carlos Cifuentes Hernández, el cabo primero Ulloa y el deponente. Les correspondía fiscalizar el cumplimiento de la ley de alcoholes, hurtos, robos. A la pregunta, no controlaban ley de armas, a veces les ordenaban realizarlo, y es lo que ocurrió con el señor Quintul, a quien le ordenaron ir a detener en el sector Cohuinco, ubicado en la cordillera de la Isla de Chiloé, hacia el oeste. No recuerda la fecha exacta, si a fines de 1973 o en el transcurso de 1974, al sargento Cifuentes, seguramente el comisario, le dio la orden de ir a detener a José Quintul, por una denuncia de infracción de ley de armas, así es que fueron en su búsqueda. Como señaló a los policiales, recuerda que Cifuentes golpeó la puerta de su casa, lo atendió una mujer joven, la que le indicó donde se encontraba, estaba en un lugar retirado de la casa, trabajando en la tierra. El sargento Cifuentes habló con él, hizo entrega de un revolver calibre 22, no sabe la marca, que tenía oculto bajo unos matorrales. A la pregunta, no sabe que explicación dio acerca de por qué tenía esa arma con él, ya que conversó solo con Cifuentes. Que recuerda el deponente no allanaron su casa. En ningún momento lo golpearon, pasó a la casa a buscar un documento, no sabe, lo trajeron a la comisaria y lo entregaron al oficial de guardia, confeccionaron el parte correspondiente y al día siguiente lo enviaron a Puerto Montt. El personal de uniforme de la comisaria hacia el traslado de detenidos, en el furgón de Carabineros. Estas misiones, como la que refiere, la cumplían vestidos de civil, portaban revólver de cargo fiscal, marca Colt, especial. El ruby extra 32, llegó después como arma de servicio. Llegaban personas a la comisaría, denunciaban a

alguien y Cifuentes ordenaba que había que concurrir a tal o cual parte. No contaban con orden judicial alguna. Solo procedía obedeciendo la orden de su superior jerárquico. Traían a la persona así detenida y procedían a interrogarla de la manera que se indica en esas declaraciones.

En declaración judicial de fecha 19 de noviembre de 2014, rolante de fs. 533 a 533 vta; (Tomo II) ampliando su declaración, con respecto a Raúl Quintul Muñoz, señala que aproximadamente en el año 1974, recuerda haber concurrido en compañía del suboficial Cifuentes y el cabo Ulloa; al sector rural Coihuinco, dentro de la jurisdicción de Castro, con la finalidad de ubicar y detener a Raúl Quintul, debido a que el suboficial Cifuentes, decía que esta persona debía entregar unas armas que supuestamente tenía en su poder. Una vez que llegaron a su domicilio, preguntaron por el señor Quintul a la persona que los atendió, diciéndole que no se encontraba en la casa, indicándoles que estaba trabajando en el campo y les dio las señas donde se encontraba. Conforme a lo anterior, se trasladaron a ese lugar, donde lo vieron a la distancia y lo llamaron que se acercara donde se encontraban. Al llegar Quintul, el suboficial Cifuentes le preguntó por las armas que supuestamente tenía, diciendo esta persona que solo tenía un revolver, por ello los condujo hasta un sector del mismo campo, donde detrás de unos arbustos, tenía oculto un revolver Argentino, calibre 22, el cual entregó en ese momento y conforme a ello, fue detenido y trasladado hasta la segunda comisaria de Castro, a fin de ser puesto a disposición de la Fiscalía Militar en Puerto Montt. Una vez que llegaron a la comisaria de Castro, nuevamente se interrogó a Quintul, esta vez al interior de la unidad policial, en las dependencias destinadas a casino, donde se ubicó al detenido sentado en una silla y se le preguntó insistentemente por las otras armas de fuego que supuestamente conforme a la información que tenía el suboficial Cifuentes, el señor Quintul mantenía en su poder, pero no obstante a los golpes, “palmetazos” con la mano abierta que le daban a Quintul, no entregó ninguna otra arma de fuego, por ello se siguió el procedimiento normal. La totalidad de las diligencias policiales que realizaban como comisión civil, se realizaban bajo las órdenes del comisario de la unidad, mayor Claudio Calderón Moraga y el subcomisario, el capitán Hernán Escobar Inostroza. Una vez que regresaron a la comisaria, le informaron de las novedades existentes, ósea si se había dado cumplimiento a lo ordenado y si se tuvo resultado positivo, este informe lo daba directamente el suboficial Cifuentes, quien era el funcionario más antiguo y se entendía directamente con la jefatura. Recuerda a Raúl Quintul, como una persona que

medía 1,65 de estatura, tenía unos 30 a 35 años de edad, contextura delgada, pelo negro y corto. A la pregunta, en orden a si fue sometido a malos tratos o apremios ilegítimos, a parte de los palmetazos que mencionó, su respuesta es negativa. Por lo demás, a Quintul lo detuvieron alrededor del mediodía y al día siguiente en la mañana fue trasladado a Puerto Montt en vehículo de Carabineros, y pasó la noche dentro del cuartel.

a.5) DOMINGO ÁLVAREZ CÁRDENAS

En declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2014, rolante de fs. 411 a 412; (Tomo I) aduce que fue detenido por Carabineros de Castro que vestían de civil y que identifica como de apellidos Cifuentes, Ulloa y Aude, quienes lo trasladaron hasta la segunda comisaria de Carabineros de Castro, allí fue interrogado por ellos en un patio del cuartel, donde había tambores con agua descompuesta en los cuales fue sumergido en varias ocasiones durante la noche por el Carabinero Aude. Al día siguiente, en un camión lo llevaron a su casa y revolvieron todo en busca de armas. Desde luego, no le mostraron ninguna orden. Dice que tenía un revolver de esos conocidos como “mata gatos” que le había regalado su hermano Armando que vivía y trabajaba en Argentina y le llevo ese regalo. Les entregó el arma que era un revolver chico y por esto fue condenado después a 540 días de presidio. Cree que estuvo detenido como ocho días en Castro y luego fue trasladado a Puerto Montt junto con Raúl Andrade, Berny Aros y Noé Cárdenas. Con relación a la pregunta, si conoció a José Quintul Muñoz cuando estuvieron en la cárcel de Chin Chin. Dice que a él también lo torturaron mucho y se encontraba en muy malas condiciones, cuando salió él quedó todavía allí y cuando estuvo en libertad murió al poco tiempo después.

B) DOCUMENTOS

b.1 Informe del Programa Continuación Ley 19.123 enviando antecedentes que poseen respecto a la víctima de autos, de fs. 12 a fs. 30 (Tomo I), que se desglosan de la siguiente manera:

a) Copia certificado de defunción N°2281475 de José Raúl Quintul Muñoz, donde consta fecha de defunción 16 de mayo de 1979 a las 13:15 horas, en el Hospital de Castro.

b) Copia de informe de fecha noviembre de 1976. En el que se expresa que: El señor José Raúl Quintul Muñoz, cédula de identidad N°49543, de Castro, fue detenido, en calidad de reo político, en su lugar de trabajo en Castro, el 2 de

abril de 1974, cuatro días después fue trasladado a la cárcel de Puerto Montt, donde permaneció hasta el 26 de septiembre de 1975. En esa fecha fue trasladado a la cárcel de Castro en la que permaneció hasta el 7 de julio de 1976, cuando salió libre definitivamente después de haber cumplido una condena de presidio de ochocientos dos días. Alrededor de un mes después de haber llegado a la prisión de Castro, se agudizaron los dolores a la columna que ya había sentido con intensidad leve en los últimos tres meses en Puerto Montt. Tanto el médico de Puerto Montt como el de Castro no dieron mayor importancia a esto, ya que lo atribuyeron a la posición corporal mantenida en su trabajo dentro de la prisión (tejer revestimiento de lápices con fibra plástica). Al salir libre, en julio de este año 1976, el dolor era ya muy intensidad, y veinte días después de abandonar la prisión viajó a Santiago con el objeto de hacerse realizar algunos exámenes médicos, pero antes que estos fueran efectuados, el dolor se intensificó repentinamente hasta el punto de hacerse insoportable al más mínimo movimiento corporal. Después fue paulatinamente calmando, pero el 25 de agosto, cuando el dolor ya había disminuido mucho en intensidad, un movimiento brusco realizado por el médico al tratar de sentarlo, intensificó de nuevo el dolor y muy pronto comenzó a notar insensibilidad en las rodillas y dificultad para mover las piernas, terminando en pocos días en una paraplejia fláccida. El primer diagnóstico de los Dres. Eduardo Cornejo y Alberto Croquevielle fue cáncer a la médula. Pero exámenes más detallados de las radiografías por ellos mismos, más otros cancerólogos le condujeron a la conclusión de descartar a posibilidad de cáncer y declararse incompetentes de diagnosticar y en consecuencia también de operar. Ahora bien, a pesar de haber perdido totalmente la movilidad de las piernas y sensibilidad táctil de las mismas, siente una sensación constante como de frío desde la rodilla hasta los pies, aun cuando al tacto de observa que están a la temperatura normal. Además, ante un ruido súbito tiene la sensación de que una corriente eléctrica recorre sus piernas hasta los pies mismos. Por otra parte, cuando hace esfuerzos de mover las piernas, a pesar de no haber ninguna reacción de ellas, se observa si embargo una leve contracción del grueso tendón situado debajo de la rodilla. Entre tanto, como consecuencia de la paraplejia, le ha sobrevenido la pérdida de la función voluntaria de la vejiga y el intestino grueso, con la consecuente dificultad de la vejiga para retener la orina y el intestino grueso realizar la evacuación. Dado el estado estacionario de la enfermedad y los síntomas más arriba descritos se puede afirmar que el enfermo puede recuperar la

salud al ser tratado en un centro médico que cuente con mayores recursos científicos que los existentes en Chile.

c) Copia declaración privada de Mario Enrique Contreras Vega, de fecha 26 de abril de 1993, Chileno, cédula de identidad N° 5.264.360-0, de profesión agricultor, y actualmente Concejal de I. Municipalidad de Castro, quien voluntariamente declara lo siguiente: que conoció personalmente a don José Raúl Quintul Muñoz, de quien le consta que fue detenido por fuerzas policiales de Castro en los primeros meses de 1974, trasladado a la cárcel de Chin Chin, en Puerto Montt. Que a esa unidad carcelaria llegó en evidente estado de deterioro físico, en calidad de semi-invalido ya que habría sido ferozmente golpeado por las fuerzas policiales, los que le dañaron la columna vertebral. Que permaneció recluido en la cárcel de Puerto Montt, sufrió continuamente por los daños recibidos, de lo que jamás pudo recuperarse, ya que dichas lesiones falleció en 1979. Que lo que declara le consta personalmente por haber permanecido en la cárcel conjuntamente con él y muchos otros presos políticos de la época.

d) Certificado de José Del Carmen Quinchén Gómez, de fecha 27 de abril de 1993. Certificado de fecha 27 de abril de 1993, chileno, cédula de identidad N° 2.768.197-2, domiciliado en la comuna de Castro, sector Ten-Ten Alto, de profesión obrero de la construcción, certifica que : en el mes de marzo de 1974 fue detenido por miembros del cuerpo de carabineros de Chile, Comisaría de Castro, en esta localidad, junto con Raúl Quintul Muñoz, quien fue golpeado, torturado y flagelado por agentes policiales, causándole graves daños físicos, tanto en el estómago como en la columna, de lo que sufrió todo el tiempo que estuvo detenido, ya que nunca fue atendido médicamente de esos males, mientras estuvo preso. Certifica, además, que ambos fueron condenados a la pena de 802 días de cárcel, siendo liberados aproximadamente en junio o julio de 1976. Lo que declara bajo petición de los familiares de José Raúl Quintul Muñoz, para ser presentado a la Comisión de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

e) Copia declaración ante la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de María Helvecia Paillacar Paillacar de fecha 28 de mayo de 1993. En lo principal ratifica todas las declaraciones anteriores. El extenso informe médico entregado fue escrito por Eliecer Paillacar, primo de ella y profesor universitario en cuyo domicilio de Stgo. Se hospedaron cuando su cuñado estuvo internado en Santiago. El contenido fue descrito y dictado por el propio afectado dado que en esos momentos estaba ya impedido de escribir a máquina por cuánto

no podía sentarse. Se deja constancia que en ese acto la sra. Maria Elevecia Paillacar Paillacar muestra todos los originales que corresponden a la documentación fotocopiada que recibió hace unos días de parte del asesor jurídico de esa gobernación.

f) Resumen Historia Clínica de José Raúl Quintul Muñoz, de fecha 26 de abril de 1993. Esta consignada su hospitalización el 15.05.79, por cuadro de hemorragia digestiva alta y paraplejia. Fue controlado por el médico ese mismo día 15.05.79. a las 17:30 hrs. 19 hrs, 21 y 23 hrs. Con agravamiento progresivo. Última evaluación esta consignada el 16-05.79 a las 08:30 hrs. Con paciente grave. En la caratula se consigna su fallecimiento ese día a las 13:15 hrs.

g) Certificado médico de José Raúl Quintul Muñoz, emitido por el médico Juvenal Hernández Vidal, con fecha 25 de diciembre de 1977. Certifica haber examinado profesionalmente al señor José Raúl Quintul Muñoz de 35 años de edad, en su domicilio, en Castro, el día 23 de diciembre de año en curso, a petición de los familiares con objeto de proceder a trasladarlo a un centro especializado si fuese necesario. El resultado clínico es coincidente respecto al diagnóstico practicado hace algunos meses en Santiago y corresponde a una afección neuroquirúrgica que requiere obligadamente de estudio y tratamiento especializado. Se recomienda, por ende, traslado urgente a un servicio de neurocirugía. El paciente presenta una paraplejia fláccida por sección medular transversa completa por aplastamiento vertebral en D11 y de posible etiología neoplásica.

h) Certificado de Gendarmería de Chile. Especificando que don José Raúl Quintul Muñoz, fue condenado a las penas de 260 días, más 540 días, por el delito de tenencia ilegal de armas, por la 1ra Fiscalía Militar de Puerto Montt. Las condenas fueron cumplidas en su totalidad según los libros de archivos que obran en esa unidad penal, empezando la misma con fecha 26 de abril de 1974 y terminando con fecha 03 de julio de 1976.

i) Resumen de ficha clínica N°253514 del Hospital Puerto Montt de Raúl Quintul Muñoz. Donde consta que el paciente hospitalizado el 05 de agosto de 1978 con los diagnósticos de paraplejia de 2 años de evolución, masas abdominales palpables en hemiabdomen inferior. La ficha clínica no tiene epicrisis ni diagnostico ni fecha de alta.

b.2) Informe de la Fundación Documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad, de fs. 37 a fs. 40 (Tomo I); que contiene Informe sobre calificación

de víctima de violaciones de derechos humanos y de la violencia política, en lo pertinente consta que José Raúl Quintul Muñoz, el Consejo Superior llegó a la convicción que la muerte de José Raúl Quintul Muñoz, influyeron decisivamente las tortura a que fue sometido durante su detención por agentes del Estado y a la falta de atención médica oportuna y eficaz. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

b.3) Copia del informe del Director regional de Gendarmería de Chile que adjunta planilla con datos estadísticos de ciudadanos ingresados y egresados del Centro de cumplimiento penitenciario de Puerto Montt con fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 de fs. 165 a fs. 169 (Tomo I), figurando en el número 315 José Raúl Quintul Muñoz, por el delito de tenencia ilegal de armas, con una condena de 250 días más 540 días, con fecha de ingreso 26 de abril de 1974.

18°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 1.090 a fs. 1.117 (Tomo III)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero, que han existido los delitos de **Detención ilegal y apremios ilegítimos** en la persona de **José Raúl Quintul Muñoz**, previsto y sancionado en el artículo 148 y 150 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo, que en ese ilícito les ha correspondido la participación en calidad de autores en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal a los acusados **Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Diógenes Ulloa Bahamonde**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

C. EN CUANTO A LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS CARLOS ULISES CIFUENTES HERNÁNDEZ Y LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE:

19°) Que a **fs. 1.308 a fs. 1.324 (Tomo IV)**, el abogado Eugenio José Horacio Torres Moraga, en representación de Carlos Ulises Cifuentes Hernández

y de Luis Ulloa Bahamonde, en lo principal de su escrito contesta la acusación fiscal y acusación particulares.

La defensa solicita sentencia absolutoria en favor de sus defendidos, por las siguientes razones:

I.- No se encuentra acreditado que el señor Carlos Ulises Cifuentes Hernández, ni el señor Ulloa Bahamonde hayan tenido participación en el hecho delictivo por el cual se les acusa. Al respecto señala que no existe ningún medio probatorio, ni ningún testigo presencial, ni directo, que atribuya a don Carlos Ulises Cifuentes Hernández, ni a de Luis Ulloa Bahamonde ser autores del delito de apremios ilegítimos, y de detención ilegal en la persona de José Quintul Muñoz, ni respecto de la forma en que se habría perpetrado el ilícito por el cual se les acusa. Primeramente invoca el derecho a presunción de inocencia por cuanto el hecho concreto de la detención ilegal y torturas en perjuicio de José Quintul Muñoz no se encuentra probado legalmente y a juicio del abogado se infiere de la condena previa dictada en contra de los mismos procesados en esta causa. Sin embargo si se examina con detención el expediente la detención ilegal y torturas contra José Quintul no están probadas en el derecho a fin de llevar al tribunal Más allá de toda duda razonable a procesar y luego acusar a sus representados.

Continúa señalando diversas declaraciones que constan en el proceso, en primer lugar menciona la señalada a fojas 65 a 67 declaración del hermano de la víctima Don Héctor Séptimio Quintul Muñoz, lo único que señala es la forma de detención, pero no hace ver ni presencié que haya existido algún apremio ilegítimo. Asimismo se refiere a declaraciones de fs. 677, 678 y 757. Posteriormente analiza las declaraciones la hermana de José Quintul, doña Gloria Iris Quintul Muñoz, específicamente se refiere a las declaraciones de fs. 764. En la misma línea con el otro hermano, don José Octavio Quintul Muñoz (fs. 726 y 727).

Continúa analizando las declaraciones de los testigos María Helvecia Paillacar Paillacar (de fs. 68 a fs.70 y 302 a 303 vuelta); de Mario Contreras Vega (fs. 71, 87, 304 a 306), respecto del que señala que no se puede exigir imparcialidad, toda vez que fue una de las víctimas de la causa rol 54.035, en la que fueron condenados los mismos acusados de esta causa). Analiza además, la declaración del testigo César Leiva Garrido (de fs. 73 a 74, de fs. 84 a 86 y 307 a 309 vta.). Argumentando que de acuerdo al mérito general del proceso, ocurre que no hay testigos presenciales de los apremios ilegítimos a don José Quintul Muñoz, salvo la declaración del cabo Aude.

Seguidamente se refiere a los distintos testigos del proceso. Analizando en profundidad las declaraciones de José Lucerino Aude Añazco, Refiriéndose a su declaración extrajudicial de fojas 342 y siguientes, recuerda la detención de Quintul y a los integrantes de la comisión civil, en dicha declaración extrajudicial, sin embargo niega agresión o golpes, agrega que van a Coihuinco a detenerlo. Señala a fojas 407 en su primera declaración judicial que "seguramente el comisario le dio la orden de ir a detener a José Quintúl" por una denuncia a la ley de control de armas y este hizo entrega de un arma calibre 22 que tenía oculta bajo unos matorrales. Refiere que "en ningún momento lo golpearon". A fojas 407 señala que en alguna ocasión interrogaron detenidos "y a veces se le golpeaba con palmazos en las orejas", no refiriéndose concretamente a Quintul, solo recuerda al detenido Torres (de la causa anterior por la que ya fueron condenados sus representados). En otra parte de la misma declaración señala que en el sector de la caballeriza había un tambor petrolero lleno de agua y en él en alguna ocasión el detenido (hablando genéricamente) fue sumergido "por un rato cortito". Cree que esa declaración es la principal en la que se basa su señoría Ilustrísima para sustentar la acusación contra sus representados, pero que a juicio de la defensa no debe ser tomada en cuenta para tener por acreditado el delito en base a los siguientes fundamentos. Los artículos 110 y 11 del Código de Procedimiento Penal, el Decreto Ley N° 3 Que declaró a partir del 18 de septiembre de 1973 que declaró el estado de sitio en todo el territorio de la República.

Posteriormente se refiere a las declaraciones indagatorias de sus representados, prestadas en el proceso y que cuyos dichos se han reproducido en esta sentencia.

Existe un acápite referido a los antecedentes médicos de José Quintul, expresando que se ha hecho hincapié en este proceso que el sr. José Raúl Quintul Muñoz habría fallecido a consecuencia de las torturas que se le habrían aplicado por parte de los procesados y acusados, sin embargo argumenta que ello se contradice con los documentos médicos existentes en el proceso y detalla cada uno de ellos.

Hace presente que el delito de apremios ilegítimos vigente a la época de los hechos y por el cual fue acusado su cliente, se encontraba previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal, transcribiendo el referido artículo. Argumenta que en la acusación no se señala en qué habrían consistido los apremios físicos que se habría infringido a los procesados y acusados al sr. Quintul, solo se habla de "duras torturas", toda vez que el denominado

“submarino” se aplicó a las víctimas de las causa rol 54.035, pero no se detalla que se la haya aplicado también a Quintul. Cuestiona que la acusación no indica cuál es la conducta desplegada por Cifuentes y Bahamonde que se imputa y, consiguientemente, cual es la hipótesis de autoría del artículo 15 del Código Penal que habría incurrido. En términos claros y simples, a ambos imputados se les imputa la autoría de un delito de apremios ilegítimos, pero no señala cuáles son los hechos que ellos habrían cometido y que permitan efectuar la correspondiente calificación delictiva que se le atribuye. Es decir, no se indica cuándo, qué día, en qué lugar, se le habrían infringido apremios ilegítimos a las víctimas, ni menos se señala en qué habrían consistido dichos apremios ilegítimos. Cita el artículo 7.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al derecho a la libertad personal. Señala que ningún antecedente del proceso auténtico e indubitado, permiten dar por establecido que los señores Ulloa y Cifuentes hayan aplicado apremios ilegítimos en la época de los hechos, o hayan detenido ilegalmente al sr. Quintul. Sólo lo deduce el Tribunal por hechos cometidos en la misma época con otras personas. Cita el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal.

Respecto a la contestación de las acusaciones particulares comienza refiriéndose a la de f. 1.128 a 1.137 presentada por la unidad programa de derechos humanos de la subsecretaría de derechos humanos, dando por reproducidos los argumentos enunciados precedentemente y alega para sus representados las eximentes de responsabilidad señaladas en los artículos 10 N°9 y 10 del Código Penal, 11 N°6 y 103 del mismo cuerpo normativo. Solicita tener por contestada la acusación particular deducida por la unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en definitiva rechazarla o en subsidio aplicar el mínimo de la pena que corresponda en derecho con alguno de los beneficios contemplados en la ley 18.216.

Seguidamente continúa contestando la acusación particular presentada por la abogada Llanara Avila Toledo solicitando la absolución de ambos procesados y acusados por las razones ya expuestas.

Argumenta, respecto de los acusados Luis Ulloa Bahamonde y Carlos Cifuentes Hernández, la eximente de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 10 N°9 del Código Penal y 10 N°10 del mismo cuerpo legal.

EN subsidio, para el evento que se dicte sentencia condenatoria en contra de sus representados, solicita que se reconozcan las circunstancias atenuantes de responsabilidad del artículo 11 N° 1, 6 y 103 del Código Penal. Se

refiere también a la situación especial del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Finalmente solicita se dicte sentencia absolutoria en favor de sus representados Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Diógenes Ulloa Bahamonde, en subsidio, para el caso que se dicte sentencia condenatoria, solicita se acojan las circunstancias atenuantes invocadas, rebajándose la pena a aplicar en dos grados y/o también en subsidio, se aplique el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales aplicando una pena no superior a 5 años con alguno de los beneficio contemplados en la ley 18.216 al no tener anotaciones anteriores a la comisión del hecho delictivo por el cual se les acusa.

D. ANÁLISIS DE LA DEFENSA

20°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA:

Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

D.1) Obligación de investigar:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

A. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser

aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

B. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

D. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

F. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...)el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación,

aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expone que (...) asimismo, en el cumplimiento

de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004.

Párrafo **159** acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo **83** añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo **145** anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el **137** (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233** (...) Este deber de investigar

deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299 (...)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afínica que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las

víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129 (...)** una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130 (...)** Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111 (...)** Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114 (...)** Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna.

Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido

proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo 106 indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en 104, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. 112 (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba

para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo **77** acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas

y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo **283** añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el

derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias

probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

G. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa

humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en **Eduardo Ferrer Mac-Gregor-** (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

G.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

G.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

G.3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

G.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

G.5. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

G.6. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

G.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

G.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

G.9. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

G.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

G.11. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

G.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

G.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

G.14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

H. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso en la sentencia. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia y que la defensa nada expresa. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación

adecuado de todos los testigos y documentos, sino que se refiere a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que esta defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

D.2) Jurisprudencia Internacional Sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) Pronunciada por los Tribunales Alemanes.

A. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

B. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se

razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores

como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

C. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

D. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

E. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la

sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

F. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la

complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

G. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de **Claus Roxin** (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

H. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del

contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

I. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que

el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

J. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

K. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

L. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

M. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

N. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho**. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica”

no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

Ñ. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

Ñ.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. **Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.**

Ñ.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

Ñ.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

Ñ.4. **En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión, como puede**

observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

O. En este caso, la **detención ilegal** desde el inicio (como indica el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de **fs. 1.090 a fs. 1.117 (Tomo III)**, de **José Raúl Quintul Muñoz**, fue al margen de todo derecho. Las múltiples pruebas, directa e indirecta generales y específicas que se han detallado y ponderado precedentemente, rebate cualquier argumento de la defensa, pues son alegaciones que no derriban el auto acusatorio. La realidad de las cosas demuestra que los acusados **Carlos Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde**, actuaron como autores en estos hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 1.090 y siguientes (Tomo III). Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para que los acusados tengan el grado de participación que se ha especificado, sin perjuicio de otras consideraciones que puedan realizarse más adelante.

D.3) Estado De Derecho:

A. Estado Autoritario: Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (**Oscar Vilhena Vieira** (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho

corresponda al constitucionalismo moderno. (**Dante Jaime Haro Reyes**: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (**Pablo Marshall Barberán** (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

B. Origen: El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (**Luis Villar Borda** (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (**Haro**, p. 118).

C. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo**: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (**Marshall**, pp. 187-188).

D. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y

las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro**, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (**Haro**, p. 126).

E. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra:** **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

F. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma

incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

21º) Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso

frente a una actuación de los agentes del Estado estos deben actuar respetando los derechos de las personas con proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad. Teniendo en especial consideración que los agentes del Estado andaban armados con armas de fuego. **La detención ilegal y apremios ilegítimos** (como indica el mérito del proceso) de **José Raúl Quintul Muñoz**, fue al margen de todo derecho. En consecuencia, es posible hacer el reproche penal a los acusados indicados, sin perjuicio de otras reflexiones que pueden hacerse más adelante.

D.4) Convenio de Ginebra

A. Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago "**Caso Luis Almonacid Dúmenez**" de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que "**los Convenios de Ginebra**" consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las

mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de los Cogens o Principios Generales de Derecho Internacional".

E. ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA

22º) Que haciéndonos cargo de la defensa de **fs. 1.308 a fs. 1.324 (Tomo IV)**, del abogado Eugenio José Horacio Torres Moraga, por los acusados Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde, el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a la declaraciones indagatorias de los acusados Cifuentes Hernández y Ulloa Bahamonde y a todos los fundamentos pertinentes que atingen a esta defensa en el análisis que se hizo precedentemente, precisando que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: Que la defensa en sus alegaciones no presentó excepciones de previo y especial pronunciamiento y tampoco presentó excepciones de fondo.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en la contestación de la acusación, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En todo caso, las tachas interpuestas durante el término probatorio, han sido falladas precedentemente en este fallo. De igual forma, no objetó ningún documento en particular. El tribunal puntualiza lo siguiente:

C. Solicitud de absolución. Que sobre lo pedido por la defensa, no es posible dar lugar a ello, toda vez que el Tribunal estará a todo lo razonado y ponderado en los medios probatorios aquilatados y relacionados en forma precedente, puntualizando lo siguiente:

D.1. Que a diferencia de lo que expone la defensa, en una lectura integral y relacionada del auto acusatorio, y lo mismo de los hechos establecidos en esta sentencia, se desprende de una manera coherente y lógica como sucedieron los hechos. Junto a lo cual, como se ha hecho también en este fallo las pruebas que van acreditando dichos hechos. Ahora bien de la lectura de los hechos, tanto del auto acusatorio, como de esta sentencia, se señala con precisión las personas que integraban la Comisión Civil en la Segunda Comisaría de Castro, el mes, año y lugar en que se fue a detener a José Raúl Quintul Muñoz. De la misma forma la filiación política de la víctima, como fue la dinámica de la detención y el traslado a la Segunda Comisaría de Castro y como fue interrogado y apremiado. Cabe hacer presente por todos los dichos de los testigos que se han indicado, en especial los que estuvieron detenidos con José Quintul y los familiares expresan, que José Quintul era una persona sana y podía, autónomamente, valerse por sí mismo y realizar un trabajo normal. Sucede que es luego de la detención y de los apremios ilegítimos que empezó con dolores, malestares físicos, por lo cual tuvo que visitar a diferentes médicos, falleciendo el día 16 de mayo de 1979, como indica el certificado de defunción de fs. 5 (tomo I).

D.2. Que a diferencia de lo que expone la defensa de forma parcial y general, luego de la detención, las primeras personas que vieron a José Quintul Muñoz, fueron sus familiares, Héctor Septimio Quintul Muñoz, María Helvecia Paillacar Paillacar, dichas personas manifiestan desde el primer momento las dolencias y malestares físicos que manifiesta Quintul y que habría sido apremiado por los agentes del Estado, Carabineros, en la Comisaría de Castro. Lo mismo ratifica los testigos Mario Contreras Vega, César Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, que estuvieron detenidos en la cárcel de Chin Chin con Quintul. Respecto de las condiciones físicas de José Quintul, dan un relato coherente, real de cómo sucedieron los hechos en la detención y apremios ilegítimo de José Quintul.

D.3. Para ratificar y confirmar lo anterior están las expresiones del carabinero José Aude Añazco, fallecido (cuyo certificado de defunción consta a **fs. 673, Tomo II**), quien relata los hechos de la detención de José Quintul y de manera precisa indica que “ a José Quintul le pegaron palmetazos”.

D.4. Confirmando lo anterior están los antecedentes médicos, en específico, certificado médico que consta a fs. 28 (tomo I), suscrito por el médico Juvenal Hernández Vidal, en que se especifica que el paciente presenta paraplejia fláccida por sección medular transversa completa por aplastamiento vertebral en

D11 y de posible etiología neoplásica. Antecedentes médicos que sin duda corroboran estas dolencias y malestares que tuvo luego de la detención y apremios ilegítimos José Quintul. Puesto que hay que hacer presente, como han manifestado sus familiares, que antes de la detención José Quintul trabajaba sin tener dolencias. Si esto no fuera creíble, en el sentido que en la Comisaría de Castro nunca hubo detenidos, no hubo apremios, no hubo Comisión Civil, existe un patrón sobre los mismos acusados, que es la causa rol 54.035 del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, en que se condenó a Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Diógenes Ulloa Bahamonde por los delitos de apremios ilegítimos previstos en el artículo 150 N°1 del Código Penal (vigente a la época de los hechos) en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, César Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado y Werne Víctor Haro Oyarzún, perpetrados en la comuna de Castro, entre los meses de septiembre de 1973 y septiembre de 1974, en grado de consumado.

En consecuencia todos los alegatos para pedir la absolución de Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Diógenes Ulloa Bahamonde, no se ajustan a la realidad, al mérito del proceso, a la prueba que hay en contra los acusados, ni a los estándares normativos e interpretativos en materia de violaciones a los Derechos Humanos, en este caso de lesa humanidad.

En consecuencia **no es posible dar lugar a la absolución** pedida por la defensa, por lo antes razonado.

F. ACUSACIONES PARTICULARES

23° Que a fs. 1.128 a fs. 1.136 (Tomo III), la abogada Catalina Ross Fredes, en representación por la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del ramo, formula acusación particular en contra de Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde, solicitando se le condene como autores del delito de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad, en contra de José Raúl Quintul Muñoz, previsto en los artículos 148 y 150 N°1 del Código Penal de la época, condenándolos e imponiendo las penas señaladas, más las sanciones accesorias legales, con costas. Reproduce los hechos y comparte lo razonado en cuanto a la calificación jurídica del ilícito referidos en la acusación fiscal. Considera que concurren las circunstancias **agravante 6ª del artículo 12** del Código Penal,

respecto de la participación que les cabe en la comisión del ilícito a los acusados. Que dice relación con que el delincuente se sirve o vale de la superioridad de sus fuerzas, lo que importa “una disposición subjetiva especial” que hace necesario “que el sujeto contemple esas circunstancias como un factor decisivo para la perpetración del delito. En el presente caso, la víctima de autos se encontraba en una situación de inferioridad respecto de los autores del delito, derivada de la fuerza, número y armas con que actuaron, considerando además que el delito fue ejecutado por personas que actuaron en grupo. **Agravante 8ª del artículo 12** del Código Penal, respecto de la participación que les cabe en la comisión del ilícito a los acusados. Toda vez que plantea que se desprende que quienes llevaron adelante la comisión de estos hechos ostentaban la calidad de funcionarios públicos. Requiere tener por reproducidos todos los medios de prueba considerados en el basamento primero del auto acusatorio de fs. 1.090 y siguientes. Solicita no se considere la aplicación de la atenuante contemplada en el artículo 11 N°6 del mismo cuerpo legal, por no configurarse, en su opinión, dicha circunstancia lo que fundamenta con jurisprudencia. Reseña la cusa rol 54.035, que fueron condenados los acusados Luis Ulloa Bahamonde y Carlos Cifuentes Hernández, estimando que estas condenas y especialmente las condenas por hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de la actual causa, dan cuenta de indicios fehacientes que cuestiona la citada irreprochable conducta. Para fundar su pretensión solicita se tengan por reproducidos todos los medios de prueba considerados en el basamento treinta y dos del auto acusatorio. Invoca se le imponga a los acusados una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales del artículo 28 y 38 del Código Penal, como autores de los delitos consumados de detención ilegal y apremios ilegítimos previsto y sancionado en los artículos 148 y 150 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

24°) Que, haciéndonos cargo de la acusación particular de **fs. 1.128 a fs. 1.136 (Tomo III)**, la abogada Catalina Ross Fredes, respecto de Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde, mantiene la misma calificación de los hechos y participación y solo discute las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que no se considere la atenuante del artículo 11 N°6 y se aplique las agravantes del artículo 12 N°6 y 8, del Código Penal. Las que serán analizadas con posterioridad.

25°) A fs. 1.164 a fs. 1.188 (Tomo III) la abogada **Llanara Ávila Nieto**, en representación de Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz, en lo principal de su escrito adhiere a la acusación fiscal, dicta en contra de los ex funcionarios de Carabineros de Chile Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde, como autores, en virtud del artículo 15 N°1 de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad en la persona de José Raúl Quintul Muñoz. Solicita se apliquen a los acusados la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal y agrega que no procede la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

26°) Que haciéndonos cargo de la acusación particular, coincidiendo en los hechos y el derecho con el Tribunal, sobre esta materia en consecuencia nada tiene que reflexionar este Ministro. En relación a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, estas serán analizadas en los considerandos posteriores.

G. REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

27°) Para mayor ilustración y atendido además que se ha alegado la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, que se analizará más adelante, es necesario reflexionar sobre el delito de lesa humanidad.

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad

en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **Homicidio simple**, es un delito de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo *Almonacid Arellano y otros vs Chile* dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las

características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

C. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”** afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excmá. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221

detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973". Esta misma Comisión señaló que "más del 94% de las personas que sufrieron prisión política" dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. "Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva" de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc." Las ejecuciones de estas personas "se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una "limpieza" de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual "amenaza". No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia".

D. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante "el Estado" o "Uruguay") por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que

éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y

todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

E. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

E.1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.

E.2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

E.3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

E.4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

E.5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

E.6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

E.7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

F. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten

contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

G. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

H. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

28°) Atenuante de Responsabilidad Penal: el abogado Eugenio José Horacio Torres Moraga, en representación de Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde de **fs. 1.308 y siguientes (Tomo IV)**, alega como circunstancias eximentes de responsabilidad criminal las señaladas en los artículos **10 N°9 y 10** del Código Penal y las atenuantes de responsabilidad penal, previstas en el **artículo 11 N°1 y 6** del Código Penal y la del **artículo 103** del mismo cuerpo legal.

Que en relación a la eximente del artículo **10 N°9 del Código Penal** estipula “el que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable”. Esta **eximente es rechazada**, puesto que no ha sido desarrollada por la defensa y de la prueba rendida en autos y del mérito de autos no se desprende ningún elemento para acogerla.

29°) Que en relación a la eximente del artículo **10 N°10 del Código citado** que dispone “El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”. Igual que la eximente anterior esta **es rechazada** por el tribunal, principalmente porque nadie puede cumplir un deber o ejercer un derecho para cometer un delito de lesa humanidad.

30°) Que en relación a la minorante del artículo **11 N°1 del Código Citado**, el Tribunal **rechaza** esta petición, ello porque según el informe del Servicio Médico Legal respecto del acusado Luis Ulloa Bahamonde, no tiene ningún impedimento para enfrentar el juicio y no presenta ninguna enfermedad que lo inhabilite . Respecto de Cifuentes a los autos no se ha agregado ningún elemento probatorio que permita acoger esta atenuante.

31°) Que en relación al **artículo 11 N°6** del Código Penal. El Tribunal **dará lugar** a esta minorante, en **calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**. A los acusados les favorece esta circunstancia minorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes de Carlos Ulises Cifuentes Hernández de fs. 770 a fs. 771 (Tomo II) y de Luis Diógenes Ulloa Bahamonde de fs. 772 a fs. 773 (Tomo II), todo a la época de los hechos, esto es, a contar del mes de abril de 1974 no tenían antecedentes penales pretéritos. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia. Haciéndonos de esta manera cargo de la petición de la abogada Catalina Ross, que pidió no se acogiera esta atenuante.

32°) Que en relación a la minorante del **artículo 11 N°8** del Código Penal, esta atenuante no fue desarrollada por la defensa solo enunciada. En conformidad al mérito del proceso no existe elemento alguno para tenerla por configurada, en consecuencia **se rechaza esta minorante**.

33°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el

ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la Ilma. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “La Masacre de la Rochela vs Colombia”, señaló de manera expresa: “que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible

reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero**, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza** la petición realizada por el abogado Eugenio José Horacio Torres Moraga, en representación Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Ulloa Bahamonde de fs. **1.308 y siguientes (Tomo III)**.

34°) Agravantes de Responsabilidad Penal.

La abogada **Catalina Ross Fredes**, en su escrito de fs. **1.128 y siguientes (Tomo III)**, y la abogada **Llanara Ávila Nieto** en su escrito de fs. **1.164 y siguientes (tomo III)** invocaron como circunstancia agravante la prevista en el **artículo 12 N°6** del Código Penal.

En relación al artículo **12 N°6** del Código Penal, atendido el auto acusatorio de fs. 1090 y siguientes (tomo III), el mérito probatorio, no se reúnen los elementos para dar por acreditados la agravante solicitada por las querellantes, en consecuencia **se rechaza**.

35°) Que en relación a la agravante del artículo **12 N°8** del Código Penal, esta agravante **se rechaza** toda vez que según consta en el auto acusatorio, a los imputados se les acusa por los delitos previstos en los artículos 148 y 150 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, cuyo título es “De los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución”. Esto implica que la calidad de funcionario público, ya ha sido considerada en el tipo penal. En consecuencia no se puede volver a utilizar un mismo elemento normativo como lo pretende la querellante, para solicitar se aplique la agravante pedida.

36°) Determinación de la Pena. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, todo lo anterior debe combinarse con la posibilidad cierta que los encartados acceda a cumplir parcialmente alguna pena en libertad según los beneficios de la **Ley 18.216** (salvo que exista una prohibición legal o no esté de acuerdo con los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos en la materia).

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente), jugando un rol fundamental que en la determinación de la pena exista la

posibilidad que los acusados cumplan una parte de la pena en libertad. Pues debe preferirse aquello a que cumpla una parte de la pena privados de libertad (salvo que exista prohibición legal o esté en contra de los estándares normativos e interpretativos, sobre derechos humanos en la materia).

37°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica de los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **José Raúl Quintul Muñoz**, previstos y sancionados en los artículos 148 y 150 N° 1 del Código Penal vigentes a la época de los hechos. **El delito de detención ilegal** tiene la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimo a medios. Si el arresto o detención excediera de 30 días las penas serán reclusión menor y suspensión en sus grados máximos. Para el caso de los **apremios ilegítimos** las penas corresponden a presidio o reclusiones menores y suspensión en cualquiera de sus grados.

38°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 1.090 a fs. 1.117 (Tomo III)**, de 02 de octubre de 2021, el encartado **Carlos Ulises Cifuentes Hernández**, está acusado en calidad de autor de los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos**, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **José Quintul Muñoz**, perpetrados en la Segunda Comisaría de Castro, en el mes de abril de 1974. Ahora bien, es necesario razonar lo siguiente:

Le beneficia la atenuante del **Artículo 11 N°6 del Código Penal** en su carácter de simple. Del mismo modo, no le perjudica ninguna agravante. Luego en conformidad al artículo 68 del Código Citado, la pena no puede aplicarse en su máximo. En consecuencia, en el caso de la detención ilegal, la pena debe quedar en reclusión menor (que en este caso quedaría en 540 días). Por su lado, en el caso de los apremios ilegítimos la pena quedaría en presidio menor en su grado medio, que en este caso quedaría en tres años.

39°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 1.090 a fs. 1.117 (Tomo III)**, de 02 de octubre de 2021, el encartado **LUIS DIÓGENES ULLOA BAHAMONDE**, está acusado en calidad de autor de los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos**, en su carácter de lesa humanidad, en la

persona de **José Quintul Muñoz**, perpetrados en la Segunda Comisaría de Castro, en el mes de abril de 1974. Ahora bien, es necesario razonar lo siguiente:

Al acusado **Luis Diógenes Ulloa Bahamonde** le beneficia una atenuante, esto es, la contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal en calidad de simple, sin que le perjudiquen agravantes. En conformidad al artículo 68 del Código Penal, la pena no puede aplicarse en su grado máximo. En consecuencia, en el caso de la detención ilegal, la pena debe quedar en reclusión menor (que en este caso quedaría en 540 días). Por su lado, en el caso de los apremios ilegítimos la pena quedaría en presidio menor en su grado medio, que en este caso quedaría en tres años.

40°) Aplicación del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales: La defensa de los acusados ha solicitado se aplique la acumulación de penas, en conformidad al artículo 164 del Código Penal. Ello, toda vez que en causa rol 54.035 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, condenó a los acusados Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Luis Diógenes Ulloa Bahamonde por los delitos de apremios ilegítimos previstos en el artículo 150 N°1 del Código Penal (vigente a la época de los hechos) en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, César Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado y Werne Víctor Haro Oyarzún, perpetrados en la comuna de Castro, entre los meses de septiembre de 1973 y septiembre de 1974, en grado de consumado, condenándose a ambos a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, (Según certificación de fs. 1681 (tomo V). Ahora bien, como mandata el artículo citado, el Tribunal posterior que dictare sentencia condenatoria contra los mismos acusados, deberá regular la pena de modo tal que el conjunto de penas no pueda exceder de aquella que hubiere correspondido de haberse juzgado conjuntamente los delitos. En este caso tenemos 7 delitos de apremios ilegítimos en la causa rol 54.035 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, ya citada. Por su lado, en esta causa nueva tenemos 1 delito de apremios ilegítimos y 1 delito de detención ilegal. Si se hubiera realizado un solo juicio, tal como se hizo en la causa rol 54.035, les beneficia a los acusados la atenuante del artículo 11 N°6 del Código

Penal, sin que les perjudiquen agravante. En consecuencia, no puede aplicarse la pena en su grado máximo y de conformidad al estándar fijado en la condena anterior, se parte de presidio menor en su grado mínimo para los apremios ilegítimos y reclusión menor en su grado mínimo para la detención ilegal. Desde esa perspectiva, tratándose de delitos que se encuentran en el mismo título, es posible reflexionar sobre la conveniencia o no de la aplicación de los artículos 74 del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal. Como corresponden en total a 8 delitos de apremios ilegítimos, en los que se tomó como base presidio menor en su grado mínimo, esto es 540 días. Al multiplicar por 8 esos días, nos da una suma de 4320 días, la que dividida por 365 días, es igual 11,8 años. De aplicarse el artículo 74 tendría que cumplir esa cantidad de años más 540 días por el delito de detención ilegal. Ahora bien si se aplica el artículo 509 del texto citado, ya sea que se trata de delito de la misma especie, o que están en el mismo título, o bien se trata de diferentes delitos, el Tribunal en ambos casos, puede aumentar la pena en uno, dos o tres grados, según sea el número de los delitos. Si ya en la causa rol 54.035 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, por siete delitos se aumentó la pena en dos grados, corresponde ahora, por ser delitos de lesa humanidad y ser en total nueve delitos, se aumente la pena en tres grados, quedando en presidio menor en su grado máximo, fijándose en **OCHO AÑOS** su extensión.

41°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus Modificaciones Posteriores.

A. Respecto al acusado **CARLOS ULISES CIFUENTES HERNÁNDEZ**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena), **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado.** En este caso se tiene en consideración, el informe del Centro de Reinserción Social, de fecha 27 de diciembre de 2022, que rola de **fs. 1.636 a fs. 1.638 (Tomo IV)**, el que entre sus conclusiones señala “se estima que finaliza con un nivel de riesgo muy bajo, con medias necesidades de intervención.

B. Respecto al acusado **LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena), **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado.** En este caso se tiene en consideración, el informe del Centro de Reinserción Social de Castro, N°400/21 de fecha 15 de octubre de 2022, que rola a **fs. 1.514 a fs. 1.518 (Tomo IV)**, el que concluye que el nivel de riesgo / necesidad que se establece es medio. En definitiva sostener que el nivel de riesgo de reincidencia del procesado

no permitiría elaborar y ejecutar un plan de intervención individual que aborde eficazmente necesidades criminógenas, debido a la rigidez cognitiva expuesta en relación a lo manifestado, indicando, que no tendría el impacto esperado una condena en libertad, al no legitimar la actual acusación debido a que sus esquemas cognitivos impiden interpretar el accionar de sus actos, no teniendo eficacia y eficiencia la inserción en un proceso de libertad vigilada. Se concluye que resulta no recomendable la derivación del sr. Luis Diógenes Ulloa Bahamonde a la modalidad de cumplimiento de pena en el medio libre. En segundo lugar el informe pericial psiquiátrico N°X- ANC- SIA- 045/2017 del Servicio Médico Legal, de fecha 11 de diciembre de 2017 que rola a **fs. 1.603 y siguientes (Tomo IV)**, el cual concluye, dentro de otras cosas, que el examinado presenta estado de conciencia lucido, capacidad intelectual dentro de límites normales,. Memoria, algunas alteraciones en la retención de información para hechos recientes, visto tanto en las pruebas realizadas como en los antecedentes de la anamnesis, probablemente ocasionados por el daño orgánico cerebral vascular. Juicio y razonamiento, con discernimiento suficiente para diferencias entre actos lícitos de ilícitos sin alteraciones delirantes o patológicas del contenido del pensamiento. Afectividad, síntomas depresivos aislados. Vida Social: retraimiento desde la viudez. Requiere persona acompañante cuando se desplaza fuera del domicilio. Salud: en control médico por lo secular neurológico de la hemiplejia y en tratamiento de la hipertensión arterial y la hiperlipidemia

42°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

A. Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la

solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia

de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa

humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

E.4. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que

en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

E.6. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se

promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **Detención ilegal y apremios ilegítimos**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

43°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 a los acusados** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo

exigido por normas de conducta internacionales. (**Núñez, Constanza (2017):** El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarles a los acusados ningún beneficio y deberá cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

44°) Que la defensa en su cuarto otrosí de fs. 1308 (tomo IV), solicitó se tuviera presente la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores. Sobre lo anterior no desarrolla mayormente su argumento ni tampoco hace alguna petición concreta. Ahora bien, como ya lo ha resuelto este Tribunal, tanto en dicha Convención, como en la legislación Chilena no existe prohibición para que las personas mayores cumplan penas efectivas en la cárcel. En este caso, además se tiene que tener presente que las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos tienen recintos especiales, diferentes a la población penal general, por lo que no existe ninguna infracción a la Convención aludida.

V. EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

45°) Que a **fs. 1.164 y siguientes (Tomo III)**, en el primer otrosí de su presentación, la abogada **Llanara Avila Nieto**, en representación de Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz, deduce demanda de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado para estos efecto por el Consejo de Defensa del Estado y este último a su vez representado por el abogado Procurador Fiscal de la Araucanía Álvaro Sáez Willer, por la suma total de \$240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos, que se desglosan en \$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos) para cada uno de los hermanos de víctima, por concepto de daño moral por el accionar ilícito de agentes estatales que cometieron los delitos de detención ilegal y aplicación de tormentos, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales, desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio. El demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. Hechos: La demandante soslaya que el grupo integrado por Cifuentes, Aude y Ulloa, en un día del mes de abril del año 1974 se dirigió hasta el sector rural Las Chacras, ubicado en la ciudad de Castro, en búsqueda del domicilio de José Quintul Muñoz, militante socialista, con el objetivo de detenerlo debido a una denuncia en su contra que decía relación con que este tendría armas de fuego en su poder. Una vez en el domicilio del señor Quintul, allanaron la casa y lo detuvieron sin orden judicial aparente, trasladándolo hasta la Segunda Comisaría de Castro, lugar donde fue interrogado y duramente torturado por sus aprehensores. Posteriormente fue trasladado hasta la ciudad de Puerto Montt, donde con fecha 22 de abril de 1974 fue puesto a disposición de la Fiscalía Militar, siendo condenado por un consejo de guerra, a cumplir una pena de 260 días de presidio menor en su grado mínimo, como autor del delito de tenencia ilegal de armas y 540 días de presidio menor en su grado mínimo, por su responsabilidad como autor del delito de porte ilegal de armas de fuego. Dicha condena fue cumplida a por la víctima en la cárcel de Chin Chin de la ciudad de Puerto Montt, lugar donde se le vio en muy mal estado, con permanentes dolores en su columna y dificultad para caminar. Lo anterior producto de las torturas sufridas previo a llegar al indicado centro de cumplimiento penitenciario. Continuando reseñando lo acontecido y antecedentes descrito en la acusación fiscal.

B. Delito de lesa humanidad. Refiere que este delito tiene un segundo carácter, y es que constituye un crimen contra la humanidad, porque ciertos delitos o crímenes, por su particular y excepcional gravedad, agreden y hieren no solamente a sus víctimas, sino también a la conciencia misma de la humanidad, violan principios que deben regir la vida de las naciones civilizadas, transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es por ello que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad. Las consecuencias prácticas de tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción. Se refiere al Derecho internacional humanitario así como al derecho internacional de los derechos humanos. Expresa que en consecuencia, el Estado de Chile ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares, cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ninguna ley interna puede alzarse o desconocer esas obligaciones internacionales del Estado de Chile.

C. Víctimas de autos que demandan resarcimiento civil y el detrimento moral sufrido. Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz, ambos hermanos de la víctima. Argumenta que el daño causado es obvio, público y notorio y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, permanentes, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Cita jurisprudencia referente al tema.

D. El derecho: suscribe el querellante que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son competencia de ese ilícito. En este caso se persiguen las responsabilidades penales y también las responsabilidades civiles que de los hechos derivan. Esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infirieron el daño cuya reparación se solicita. En cuanto a las fuentes de responsabilidad: artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, reproduce el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en cuanto consagra la responsabilidad del Estado, se apoya en jurisprudencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema. Que la responsabilidad del Estado proviene esencialmente de disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, citando el artículo 5 inciso segundo de la Constitución. Artículo 38 de la Constitución Política.

E. Monto de la indemnización que se reclama. Solicita en favor de sus representados la suma total de \$240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos, que se desglosan en \$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos) para cada uno de los hermanos de víctima, por concepto de daño moral por el accionar ilícito de agentes estatales que cometieron los delitos de detención ilegal y aplicación de tormentos, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales, desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio, salvo mejor parecer de SSI..

46°) Que de **fs. 1.258 a fs. 1.290 (Tomo IV)**, el abogado Procurador Fiscal de Temuco, por el **Consejo de Defensa del Estado, Álvaro Sáez Willer**, contesta la demanda civil entablada por la abogada Ávila Nieto, en representación de Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz, invocando la

calidad de hermanos de la víctima. Solicitando acoger las excepciones y defensas opuestas y negar lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar sustancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su cómputo e improcedencia de condena en costas.

A. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por haber sido ya indemnizados el demandante en conformidad a las leyes de reparación.

A.1. Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas: arguye que, no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Que la comprensión solo puede efectuarse al interior - y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Aduciendo a los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que el dilema "justicia versus paz" es uno de los pilares sobre los cuales descansa la justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". Proclama que, por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Que toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radica en grupos humanos más específicos. Refiere a los programas propuestos por las comisiones de verdad o reconciliación.

A.2. Complejidad reparatoria: Comienza citando a Lira. Posteriormente señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o también llamada "Comisión Rettig", en su informe final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe derivó en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro

al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de la víctimas”. Cita lo que ejecutivo entendió por reparación. Que la compensación de daños morales y mejora patrimonial, son los dos claros objetivos de estas normas reparatorias. Refiere a la discusión de la ley 19.123 señalando como ejemplo las referencias a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. Aduce que la idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18. Que, asumida esa idea reparatoria, tanto la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas, han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. Indicando que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones a saber: reparación mediante transferencia directa de dinero; reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas.

A.3. Reparaciones mediante transferencias directas de dinero: afínica que, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones. La ley N° 19.123 ha sido la más importante. Abogando a la discusión legislativa. Cimentando los costos generales que ha significado para el Estado, este tipo de indemnizaciones a diciembre de 2019, detallando las sumas desembolsadas, lo que da un total de \$992.084.910.400. Plantea que desde una perspectiva indemnizatoria, y tal como se indicó en la historia de la ley 19.123, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, lo que no obstaría a valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Que ellas son, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

A.4. Reparaciones mediante la asignación de nuevos derechos: Reseña que en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. Exterioriza lo

mencionado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en cuanto al objetivo de un programa de reparación. Invocando a las Ley 19.123, 19.980, 19.992 y 20.405. Aduciendo a los programas y beneficios que están contemplan, además de la forma de obtenerlos.

A.5. Reparaciones simbólicas: Apoya que, al igual que todos los demás proceso de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a la víctima de DD.HH se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Cita a Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial. Destaca las ejecuciones de diversas obras de reparaciones simbólicas realizadas.

A.6. La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas: Concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de los violaciones a los Derechos Humanos. Demarca que, así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cumulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismo daños ocasionados por los mismo hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo por ello ser exigidos nuevamente. Funda sus argumentos citando fallos de la Excma. Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia, normativa internacional y doctrina atingente. Manifestando que la acción deducida en estos autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella resarcir los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que se opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el demandante en conformidad a las leyes 19.123 y 19.980 y sus modificaciones.

B. Excepción de prescripción extintiva:

B.1. Normas de prescripción aplicables: opone la excepción de prescripción de las acción de indemnización de perjuicios deducida por el mencionado actor, con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que, por encontrarse prescrita la demanda, se rechace en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en la demanda, la detención ilegal de José Quintul Muñoz, se produjo en el mes de abril de 1974. Es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **23 de junio de 2022**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

B.2. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Cita jurisprudencia. Que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del

Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

B.3. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que, los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permite concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

B. 4. Jurisprudencia sobre la materia: Cita jurisprudencia y reflexiona en ese ámbito. 1). Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, 2). Los Tratados Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. Citando fallos al respecto. 3). Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. 4). Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al

resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. 5º) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la personas desaparecida. Adiciona fallo de la Excma. Corte Suprema.

B.5. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial. En efecto basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos e disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tacita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

B.6. Normas contenidas en el Derecho Internacional: funda que, en relación con las alegaciones expuestas por los actores en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Reseña a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Convenio de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 60/147 de 21 de marzo de 2006, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile"

y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase íntegramente la demanda, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: vislumbra que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de las acciones indemnizatorias solicitadas y los montos pretendidos.

C.1. Fijación de la indemnización por daño moral: Alega que los demandantes ejercer acción indemnizatoria por daños moral y solicitan por este concepto la suma total de \$240.000.000.- a razón de \$120.000.000.- para cada uno de ellos. Que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

C.2. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: en subsidio de las excepciones precedentes opuestas, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, y que benefician a los demandantes puesto que todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada: hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger la acción deducida en autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

E. Respecto de las costas de la causa: que atendido el compromiso del Estado democrático con los Derechos Humanos, yendo más allá de lo que en derecho le era exigible, asumiendo los costos no solo de la reparación de las víctimas, sino que también de la promoción y conmemoración de los Derechos Humanos como eje estructurante de la vida en sociedad, resulta improcedente que se le condene en costas, siendo, además, evidente que a todo evento, tiene motivo plausible para litigar.

47°) Que haciéndonos cargo de la contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A.** Excepción de reparación satisfactiva, improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes en conformidad con las leyes de reparación.
- B.** Excepción de prescripción extintiva.
- C.** En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A.- Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparados los demandantes en conformidad con las leyes de reparación: Se estará a lo ya razonado en las siguientes causas: **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida

por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014; **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014; **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015; **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016; **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016; **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016, **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015; **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016; **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016; **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016; **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016; **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016; **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017; **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017; **Causa rol 10.868**, del

Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017; **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017; **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016; **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017; **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017, **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018; **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020; **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020; **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018; **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018; **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018; y **Causa rol 114.042**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. Todos los anteriores fallos

condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

a.1) Sobre lo anterior, **esta excepción se rechaza**. En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial:

a.2) El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, *la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile*. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

a.3) En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado en oficio **de fs. 1.301 (Tomo IV)**, por parte del Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa los beneficios de reparación Leyes 19.123 y 19.980, toda vez que no han recibido, beneficios los hermanos del causante don

José Quintul Muñoz. En consecuencia el tribunal rechaza esta excepción interpuesta.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También **se rechaza**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo **rol 1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N° 19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación

relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de

Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo**. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

C.1. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls. Una Teoría de la Justicia**. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

C.2. Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

C.3. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia*

Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena”* (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores

adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continua, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

C.4. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia **procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.**

C.5. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

C.5.a. Causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de

Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

C.5.b. El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:...“Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la **“falta de servicio”**, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

C.6. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre la indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia aparece justo y razonable que se otorgue un monto de: **\$50.000.000.- (Cincuenta millones de pesos)**, para cada uno de los hermanos de la víctima, esto es: Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz, por lo razonado anteriormente y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

48°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito de detención ilegal y apremios ilegítimos de **José Raúl Quintul Muñoz**, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. De fs. 1.201 a fs. 1.209 (Tomo III), Informe de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) que contiene documentación sobre las secuelas en el plano de la salud mental en los familiares de víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Éste informe a modo de conclusión manifiesta que “no obstante las manifestaciones y consecuencias psicopatológicas descritas, no se trata únicamente de cuadros o síndromes psicopatológicos, sino al mismo tiempo de expresiones concretas del conflicto social y político desarrollado en una sociedad determinada, que se manifiesta tanto en el psiquismo individual, como en la subjetividad social (...) Se puede apreciar que frente a diversas situaciones traumáticas, la sintomatología y la desestructuración que se observan pueden manifestarse de manera similar. Es preciso enfatizar, que la especificidad radicada en la situación traumática, que en Chile se definió a través de la represión política. Esta trasforma el contexto social haciendo amenazador y traumatizante y con un

gran potencial destructivo. Incidiendo en las condiciones materiales de la vida concreta, en la sobrevivencia psíquica, y en los significados y valores que constituyen el sentido de la vida de los sujetos”.

B. De fs. 1.334 a fs. 1.513 (Tomo IV), informe del Arzobispado de Santiago Fundación Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad, en que se acompaña: Pre-informe Trabajo Diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos; Informe de Trabajo de Diagnóstico niños familiares de detenidos desaparecidos; Salud Mental: síntesis del trabajo con niños de familiares de detenidos desaparecidos; algunos factores de daño a la salud mental; Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos; Algunos problemas de salud mental detectados por equipos psicológicos psiquiátrico; Daño psicológico prolongado de los familiares de detenidos desaparecidos; y Salud Mental y Violaciones a los derechos humanos.

C. De fs. 1.521 a fs. 1.532 (Tomo IV), ordinario N°454 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de fecha 04 de febrero de 2022, en el que se adjunta Capítulo II, Normas Técnica N°88, para la Atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.

D. Testimonios de Cecilia Beatriz Hernández Quintul de fs. 1.648 a fs. 1.650 (Tomo IV) de **Erna Michelle Vera Hernández** de fs. 1.652 a fs. 1.655 (Tomo IV), y de **José Bernardo Barria Barrientos** de fs. 1.656 a fs. 1.658 (Tomo IV). Quienes son contestes y en síntesis declaran que conocen a los querellantes de autos, hermanos de la víctima de autos. Declaran que saben y les consta lo vividos por estos hermanos, ya que fueron afectados psicológicamente y también económicamente.

E. Certificados de nacimiento de Gloria Iris Quintul Muñoz de fs. 1.079 (tomo III) y **Héctor Septimio Quintul Muñoz** de fs. 1.080 (tomo III) y de la víctima **José Raúl Quintul Muñoz** de fs. 1.682 (tomo V).

49°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos de José Raúl Quintul Muñoz, está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedente la indemnización que se demanda, esto es: **a)**

la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por el demandante; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por el actor y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por el delito de **detención ilegal y apremios ilegítimos de José Raúl Quintul Muñoz, cometido por los Agentes del Estado**, la suma que ante se ha detallado, esto es:

A. **\$50.000.000.-** (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los hermanos de la víctima José Raúl Quintul Muñoz, a saber: Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz.

Lo que equivale a la **suma total de: \$100.000.000.- (cien millones de pesos).**

50°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

VI. ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 10 N°9 y 10, 11 N°1, 6, 8, 12 N°6, 8, 52, 56, 61, 68, 69, 103, 148 y 150 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 164 del **Código Orgánico de Tribunales**, artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Ley 20.357**, **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, **Convención**

Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y los Convenios de Ginebra de 1949, se declara:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

I. QUE SE RECHAZA la tacha del artículo 460 N°10 del Código de Procedimiento Penal interpuesta por el abogado Eugenio Torres Moraga, en contra de la testigo Cecilia Beatriz Hernández Quintul.

II. QUE SE RECHAZA la tacha del artículo 460 N° 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal interpuesta por el abogado Eugenio Torres Moraga, en contra del testigo José Bernardo Barría Barrientos.

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

III.- QUE SE CONDENA a CARLOS ULISES CIFUENTES HERNANDEZ, R.U.N 3.472.709-0, ya individualizado, en calidad de **AUTOR** a la **pena única de OCHO AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, **CON COSTAS** por los siguientes delitos:

A) Por los delitos **de apremios ilegítimos** previstos en el artículo 150 N°1 del Código Penal (vigente a la época de los hechos), referidos en la cusa rol **N°54.035** del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, César Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado y Werne Víctor Haro Oyarzún, perpetrados en la comuna de Castro, entre los meses de septiembre de 1973 y septiembre de 1974, en grado de consumado.

B) Por los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos** en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **José Raúl Quintul Muñoz**, perpetrados en la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, en el mes de abril de 1974.

IV.- QUE SE CONDENA a LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE, R.U.N 4.647.468-6 ya individualizado, en calidad de **AUTOR** a la **pena única** de

OCHO AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, **CON COSTAS** por los siguientes delitos:

A) Por los delitos **de apremios ilegítimos** previstos en el artículo 150 N°1 del Código Penal (vigente a la época de los hechos), referidos en la cusa rol **N°54.035** del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, César Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado y Werne Víctor Haro Oyarzún, perpetrados en la comuna de Castro, entre los meses de septiembre de 1973 y septiembre de 1974, en grado de consumado.

B) Por los delitos de **detención ilegal y apremios ilegítimos** en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **José Raúl Quintul Muñoz**, perpetrados en la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, en el mes de abril de 1974.

V.- Que respecto al acusado **CARLOS ULISES CIFUENTES HERNANDEZ**, según se expresó, **no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216**, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de **abono** los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

a).- Arresto domiciliario total: desde el **15 de abril de 2021**, como consta a fs. 934 (tomo III), cuando es notificado del auto de procesamiento, hasta el **20 de mayo de 2021**, cuando se dicta resolución que modifica la medida cautelar por la de **arresto domiciliario parcial**, según consta a fs. 1.059 (Tomo III) hasta la fecha.

VI.- Que respecto al acusado **LUIS DIOGENES ULLOA BAHAMONDE**, según se expresó, **no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216**, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de **abono** los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

a).- Arresto domiciliario total: desde el **28 de abril de 2021**, como consta a fs. 1018 (tomo III), cuando es notificado del auto de procesamiento, hasta

el **11 de mayo de 2021**, cuando dicta resolución que modifica la medida cautelar por la de **arresto domiciliario parcial**, según consta 1.037 (tomo III), hasta la fecha.

VII.- La pena impuesta al condenado comenzará a regir desde que **se presente o sea habido en la presente causa.**

VIII.- Respecto a la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, no existiendo ninguna prohibición los acusados deben cumplir la pena en forma efectiva en los recintos habilitados por Gendarmería de Chile

IX.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas a los acusados, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedentes.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

X.- QUE NO HA LUGAR a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Fisco de Chile de fs. **1.258 y siguientes (Tomo III)**, esto es:

A. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya reparado el demandante en conformidad con las leyes de reparación.

B. Excepción de prescripción extintiva.

Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

XI.- Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por la abogada **Llanara Ávila Nieto**, en representación de Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz fs. **1.164 y siguientes (Tomo III)**, en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos, en su carácter de lesa humanidad en la persona de **José Raúl Quintul Muñoz**, la suma:

De \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los hermanos de la víctima, a saber: Héctor Septimio Quintul Muñoz y Gloria Iris Quintul Muñoz. Lo que da una **suma total de \$100.000.000.- (cien millones de pesos).**

XII.- La suma anterior deberán ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente bajo apercibimiento de arresto a los sentenciados, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese.**

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1974 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 10.867.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a diecisiete de julio de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.